



**Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos**

Distr. general
7 de diciembre de 2012
Español
Original: inglés

Comité de Derechos Humanos

**Examen de los informes presentados por los
Estados partes en virtud del artículo 40 del Pacto**

Segundo informe periódico de los Estados partes

Malta* **

[24 de julio de 2012]

* Con arreglo a la información transmitida a los Estados partes acerca de la publicación de sus informes, el presente documento no fue objeto de revisión editorial antes de ser enviado a los servicios de traducción de las Naciones Unidas.

** Los anexos del presente informe pueden consultarse en la secretaría.

Índice

	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
Siglas		3
I. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Introducción.....	1–4	4
II. Información con respecto a la aplicación de disposiciones específicas del Pacto	5–455	5
Artículo 1	5–11	5
Artículo 2	12–23	7
Artículo 3	24–42	10
Artículo 4	43–60	13
Artículo 5	61	17
Artículo 6	62–79	17
Artículo 7	80–87	20
Artículo 8	88–117	23
Artículo 9	118–155	29
Artículo 10	156–165	37
Artículo 11	166–169	39
Artículo 12	170–182	40
Artículo 13	183–186	42
Artículo 14	187–249	43
Artículo 15	250–251	55
Artículo 16	252–260	56
Artículo 17	261–283	57
Artículo 18	284–294	63
Artículo 20	295–298	65
Artículos 19, 21 y 22	299–330	66
Artículo 23	331–368	72
Artículo 24	369–395	79
Artículo 25	396–447	84
Artículo 26	448–455	93

Siglas

CAP	Comisión de la Administración Pública
CCF	Centro Penitenciario de Corradino
COPC	Código de Organización y Procedimiento Civil
UE	Unión Europea
OIT	Organización Internacional del Trabajo
OIM	Organización Internacional para las Migraciones
LN	Aviso Legal
S.L.	Legislación subsidiaria
TIC	Tecnologías de la información y las comunicaciones

I. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Introducción

1. Malta es una República constitucional y una democracia parlamentaria. El Presidente nombra como Jefe de Gobierno y Primer Ministro al jefe del partido que consigue la mayoría de escaños en las elecciones generales para el órgano legislativo unicameral. Las últimas elecciones generales se celebraron el 8 de marzo de 2008. Volvió al poder el Partido Nacionalista con una mayoría del 49,34%. El Partido Laborista, en la oposición, consiguió el 48,79% de los votos. La participación electoral fue del 93,3%.

2. El poder judicial es independiente. El Presidente del Tribunal Supremo, los jueces y magistrados son nombrados por el Presidente previa propuesta del Primer Ministro. Su edad de jubilación obligatoria son los 65 años. Los tribunales pueden ser superiores e inferiores. El primer grupo está formado por el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Apelación, el Tribunal de Apelación Penal, el Tribunal Penal y el Tribunal Civil. Estos tribunales están integrados por jueces. Los tribunales inferiores son el Tribunal de Magistrados (Malta) y el Tribunal de Magistrados (Gozo), cuyos miembros son magistrados. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción de primera instancia y de apelación. En cuanto tribunal de apelación, conoce de los recursos en los casos relacionados con violaciones de los derechos humanos, la interpretación de la Constitución y la validez de las leyes. En cuanto tribunal de jurisdicción de primera instancia, el Tribunal Constitucional decide sobre las cuestiones relacionadas con elecciones parlamentarias impugnadas y alegaciones de prácticas electorales corruptas. El Tribunal de Apelación conoce de los recursos contra las decisiones del Tribunal Civil y es la última instancia de apelación en cuestiones civiles en Malta. El Tribunal de Apelación Penal es la última instancia de apelación en las cuestiones penales. Cuando está integrado por tres jueces, el Tribunal de Apelación Penal (Jurisdicción Superior) conoce de los recursos presentados contra las sentencias dictadas por el Tribunal Penal. Cuando está constituido por un único juez, el Tribunal de Apelación Penal (Jurisdicción Inferior) conoce de los recursos contra las decisiones del Tribunal de Magistrados (Malta) y el Tribunal de Magistrados (Gozo) en todas las cuestiones penales. En el Tribunal Penal, un solo juez decide sobre las excepciones preliminares y excepciones a la admisibilidad de las pruebas, pero, cuando se debe determinar si el acusado es culpable o no de los cargos formulados contra él, el Tribunal Penal está compuesto por un juez y un jurado de nueve personas. El Tribunal Civil se divide luego en tres salas, la Sala de Jurisdicción General (conocida también como Sala Primera del Tribunal Civil), la Sala de la Familia y la Sala de Jurisdicción Voluntaria. El Tribunal de Magistrados tiene jurisdicción tanto civil como penal. Con respecto a esta última, tiene doble competencia, en cuanto tribunal de jurisdicción penal y tribunal de investigación penal¹.

3. La Policía Ejecutiva es responsable de la seguridad interna del país. Su misión consiste en mantener el orden público y la paz, evitar, detectar e investigar los delitos, recopilar pruebas y llevar a los infractores ante las autoridades judiciales². Las Fuerzas Armadas de Malta son las encargadas de la defensa y la seguridad nacionales y se les ha confiado la función primaria de salvaguardar la soberanía y el interés nacionales, en particular la protección de las aguas territoriales y el espacio aéreo.

4. El 13 de septiembre de 1990 Malta se adhirió al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En este informe consolidado se combinan los informes periódicos segundo y tercero de Malta sobre la aplicación del Pacto, presentados en cumplimiento de

¹ <http://www.judiciarymalta.gov.mt/the-courts>.

² <http://www.mjha.gov.mt/page.aspx?pageid=156>.

la obligación contraída en virtud del artículo 40. Ha sido preparado por la Fiscalía General bajo los auspicios del Ministerio de Justicia, Diálogo y la Familia en cooperación con el Ministerio del Interior y Asuntos Parlamentarios, el Ministerio de Infraestructura, Transporte y Comunicaciones, el Ministerio de Salud, de los Ancianos y de la Atención Comunitaria, el Ministerio de Educación y Empleo, el Consejo Nacional de la Mujer, la Comisión de los Emigrantes de Malta, la Comisión Electoral, la Oficina Nacional de Estadística y la Comisión Nacional para la Promoción de la Igualdad.

II. Información con respecto a la aplicación de disposiciones específicas del Pacto

Artículo 1

5. Malta es un Estado democrático y neutral basado en los principios del trabajo y el respeto a los derechos fundamentales de la persona. Obtuvo la independencia de Gran Bretaña el 21 de septiembre de 1964 y posteriormente, el 13 de diciembre de 1974, se convirtió en República. Malta fue admitida como miembro de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 1 de diciembre de 1964 y desde entonces ha adoptado activamente una política de promoción de la paz, la seguridad y el progreso social entre las naciones en los otros foros internacionales. Más tarde, el 1 de mayo de 2004, Malta se adhirió a la Unión Europea (UE).

6. El Jefe de Estado es el Presidente, que cumple un mandato de cinco años y no puede ser reelegido. El Parlamento está formado por la Cámara de Representantes y el Presidente de Malta. Sesenta y nueve diputados son elegidos para la Cámara de Representantes con un mandato de cinco años. Las elecciones generales a la Cámara de Representantes y la reelección de los candidatos están basadas en los principios de representación proporcional mediante voto único transferible. Actualmente hay 13 distritos electorales, de cada uno de los cuales se eligen no menos de 5 y no más de 7 diputados (art. 52 de la Constitución de Malta).

7. Todo ciudadano de Malta que haya cumplido 18 años de edad se inscribe en el registro electoral y tiene derecho a votar en las elecciones generales. El voto es secreto. Toda persona tiene derecho a un solo voto y no puede votar en nombre de otro ciudadano. La única excepción es el caso de las personas que, por razones de analfabetismo, ceguera u otra incapacidad física, no pueden anotar su elección en la papeleta electoral. En este caso, la papeleta se marca siguiendo las instrucciones de una persona que supervisa oficialmente la elección en el colegio electoral.

8. Malta es miembro activo del Consejo de Europa. Ha firmado y ratificado, entre otros, los siguientes convenios y protocolos:

- Convenio Cultural Europeo, 12 de diciembre de 1966;
- Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, 23 de enero de 1967;
- Protocolo N° 1 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, 23 de enero de 1967;
- Protocolo N° 2 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales por el que se confiere al Tribunal Europeo de Derechos Humanos la competencia de emitir opiniones, 23 de enero de 1967;

- Protocolo N° 3 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales que modifica los artículos 29, 30 y 34 del Convenio, 23 de enero de 1967;
- Protocolo N° 4 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales por el que se reconocen ciertos derechos y libertades además de los que ya figuran en el Convenio y en el primer Protocolo adicional al Convenio, 5 de junio de 2002;
- Protocolo N° 5 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales que modifica los artículos 22 y 40 del Convenio, 23 de enero de 1967;
- Protocolo N° 6 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales relativo a la abolición de la pena de muerte, 26 de marzo de 1991;
- Protocolo N° 7 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, 15 de enero de 2003;
- Protocolo N° 8 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, 7 de marzo de 1998;
- Protocolo N° 10 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, 7 de mayo de 1992;
- Protocolo N° 11 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales relativo a la reestructuración del mecanismo de control establecido por el Convenio, 11 de mayo de 1995;
- Protocolo N° 13 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales relativo a la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias, 3 de mayo de 2002;
- Protocolo N° 14 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales por el que se modifica el sistema de control del Convenio, 4 de octubre de 2004;
- Convenio europeo sobre el arreglo pacífico de controversias, 28 de febrero de 1967;
- Convenio europeo sobre adopción de niños, 22 de septiembre de 1967;
- Carta Social Europea, 4 de octubre de 1988;
- Protocolo por el que se modifica la Carta Social Europea, 16 de febrero de 1994;
- Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, 7 de marzo de 1988;
- Protocolo N° 1 al Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, 4 de noviembre de 1993;
- Protocolo N° 2 al Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, 4 de noviembre de 1993;
- Acuerdo europeo sobre la abolición de visados para refugiados, 17 de enero de 1989;
- Convenio sobre el traslado de personas condenadas, 26 de marzo de 1991;
- Convenio europeo relativo a la asistencia judicial mutua en materia penal, 3 de marzo de 1994;

- Protocolo adicional al Convenio europeo relativo a la asistencia judicial mutua en materia penal, 29 de marzo de 2012;
- Convenio europeo de extradición, 19 de marzo de 1996;
- Protocolo adicional al Convenio europeo de extradición, 20 de noviembre de 2000;
- Segundo protocolo adicional al Convenio europeo de extradición, 20 de noviembre de 2000;
- Convenio europeo para la represión del terrorismo, 19 de marzo de 1996;
- Convenio europeo relativo al reconocimiento y ejecución de decisiones en materia de custodia de menores, así como al restablecimiento de dicha custodia, 18 de octubre de 1999;
- Convenio del Consejo de Europa relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito y a la financiación del terrorismo, 19 de noviembre de 1999;
- Convenio para la protección de las personas con relación al tratamiento automatizado de los datos de carácter personal, 28 de febrero de 2003;
- Carta Social Europea, 27 de julio de 2005;
- Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, 30 de enero de 2008;
- Convenio del Consejo de Europa relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito y a la financiación del terrorismo, 30 de enero de 2008;
- Convenio para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, 6 de septiembre de 2010;
- Convenio sobre la Ciberdelincuencia, 12 de abril de 2012;

9. Por otro lado, Malta firmó pero no ratificó, entre otros, los siguientes convenios y protocolos del Consejo de Europa:

- Protocolo N° 9 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales;
- Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias;
- Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los Derechos del Niño;
- Convenio Europeo sobre la Nacionalidad;
- Protocolo de enmienda del Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo;
- Convenio del Consejo de Europa para la Prevención del Terrorismo.

10. Malta está plenamente comprometida con la libre empresa y el libre comercio y alienta la iniciativa y la empresa privada. Toda persona de Malta puede poseer libremente bienes y enajenarlos.

11. Malta no tiene colonias y no es responsable de la administración de ningún territorio no autónomo ni territorio en fideicomiso.

Artículo 2

12. La discriminación se define en el artículo 45 3) de la Constitución de Malta de la siguiente manera: "Se entenderá por "discriminatorio" el trato diferente que se dé a diferentes personas y sea atribuible, en su totalidad o en parte, a su respectiva descripción ya sea por raza, lugar de origen, opiniones políticas, color, credo o sexo, y que hace que las personas que se ajustan a esa descripción sean objeto de inhabilitaciones o restricciones de las que no son objeto personas de otra descripción o a quienes se les reconoce privilegios o ventajas que no se reconocen a las personas de esa otra descripción".

13. En esa misma disposición constitucional se estipula que no se promulgará ninguna ley que sea discriminatoria en si misma o en sus efectos. En virtud del apartado 4 de la misma disposición, la garantía contra la no discriminación se reduce quedando excluida específicamente en las siguientes circunstancias:

- Para la asignación de rentas públicas y fondos públicos;
- Respetto de las personas que no son ciudadanos de Malta;
- Respetto de la adopción, el matrimonio, la disolución del matrimonio, la inhumación, la sucesión hereditaria y todas las cuestiones referentes al régimen jurídico de las personas, pero no en los casos en que la discriminación es totalmente imputable al sexo;
- Respetto de las personas sometidas a cualquier inhabilitación o restricción o que han recibido cualquier privilegio o ventaja que, por su naturaleza y las circunstancias especiales relativas a tales personas o a cualquier otra disposición de la Constitución, se justifica razonablemente en una sociedad democrática;
- Para la autorización de medidas durante períodos de emergencia pública razonablemente justificadas a los efectos de hacer frente a tal situación.

1. Personas que actúan en el ejercicio de sus funciones oficiales

14. La Constitución de Malta contiene una garantía contra toda forma de discriminación. El artículo 45 2) de la Constitución declara que "... ninguna persona será tratada de forma discriminatoria por ninguna persona que actúe en cumplimiento de una ley escrita o en el desempeño de las funciones de un cargo público o una autoridad pública".

15. Asimismo, el artículo 135 del Código Penal establece lo siguiente: "Toda persona depositaria de autoridad pública que, con medidas ilícitas concebidas junto con otras personas, obstaculice la ejecución de la ley, en caso de ser declarada culpable será sancionada con pena de prisión de 18 meses a 3 años".

16. El Código Penal hace también referencia a la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes cometidos por un funcionario público o cualquier otra persona que intervenga a título oficial. En él se dispone que los funcionarios que, en el ejercicio de sus facultades oficiales, infligen a una persona dolor o sufrimiento grave, ya sea físico o mental, por una de las razones mencionadas, serán culpables de un delito penal. El Código Penal, en su artículo 139A, especifica las cuatro razones siguientes para que se produzca esa circunstancia: a) obtener de la persona o un tercero información o una confesión o b) castigar a la persona por un acto que ella o un tercero haya cometido o se sospeche que ha cometido o c) intimidar a la persona o a un tercero u obligarles a hacer o dejar de hacer una determinada acción o d) por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación. Si el funcionario público es declarado culpable de ese delito, podrá ser condenado a pena de cárcel de 5 a 9 años.

2. Empleo de nacionales de terceros países

17. Los nacionales de terceros países no gozan del derecho automático al trabajo en Malta y solo pueden trabajar si su empleador ha recibido un permiso de trabajo, previa presentación de una solicitud. Esa limitación no se aplica a los nacionales de la Unión Europea, ya que a estos se les concede el permiso automáticamente (con exclusión temporal de los ciudadanos de Bulgaria y Rumanía), así como a los ciudadanos noruegos, suizos e islandeses. Un nacional de un tercer país puede solicitar directamente un permiso de trabajo si ha fundado una sociedad en Malta y participa en su gestión o si ha realizado una inversión considerable en una organización local y desea ocupar un alto cargo en ella.

18. Los permisos de trabajo son en general válidos durante un año. Las concedidas a los solicitantes de asilo se expiden por seis meses y las de las personas a las que se deniega la solicitud de asilo tienen validez durante tres meses³.

19. El Departamento de Asuntos de Ciudadanía y Expatriados puede otorgar permisos de trabajo por motivos humanitarios a los hijos de emigrantes de Malta que residen en Malta con alguno de sus padres, o a una persona extranjera prometida en matrimonio a un ciudadano de Malta. En este último caso la solicitud de permiso de trabajo debe presentarse dentro de los seis meses anteriores a la fecha del matrimonio y mediante prueba de la celebración de este. A menos que la solicitud se refiera a un trabajo por cuenta propia, debe ser presentada también por el empleador.

20. Desde la adhesión a la UE en mayo de 2004, los nacionales de los Estados Miembros de la UE tienen derecho a trabajar en Malta en las mismas condiciones aplicables a los nacionales malteses de conformidad con el acervo comunitario en materia de libre circulación de las personas, a saber, la Directiva 2004/38/CE relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. Hay excepciones en el caso del empleo en la Administración Pública.

3. Legislación aplicable a las personas que no son nacionales de Malta ni de la UE

21. La Ley de inmigración de 1970 establece las condiciones para la entrada en Malta y la residencia de los extracomunitarios. Tienen derecho a la libertad de circulación los siguientes extracomunitarios: los cónyuges de nacionales de Malta, las personas con derecho a privilegios e inmunidades diplomáticos y los miembros de las fuerzas armadas de otros países que se encuentran en Malta de conformidad con disposiciones adoptadas con el Gobierno de Malta. Los cónyuges y las personas a cargo de cualquiera de las personas enumeradas también tienen derecho a la libertad de circulación siempre que, en el caso de los cónyuges, permanezcan casados y vivan con la persona que goza de ese derecho.

22. También puede obtenerse un permiso de residencia permanente mediante el cumplimiento de ciertas condiciones que se enumeran en la Ley de inmigración, basadas en la cuantía del capital remitido anualmente a Malta y la adquisición de bienes en el país. El cónyuge y las personas a cargo del titular de tal permiso tienen derecho a la libertad de circulación.

23. La Ley de refugiados⁴ de 2000 establece los procedimientos referentes a la obtención del estatuto de refugiado en Malta y enumera los tipos de asistencia a que tienen derecho las personas reconocidas como refugiados. Los refugiados en Malta no tienen derecho a buscar empleo en el país ni a ejercer ninguna otra actividad sin consentimiento

³ ETC: ELU Guidelines <<http://etc.gov.mt/etc-portal/page/3/ELU-Guidelines.aspx#1.5>> consulta realizada el 23 de febrero de 2012.

⁴ Ley de refugiados, cap. 420 de la legislación de Malta.

del Ministro del Interior⁵, pero tienen acceso a la educación pública y la capacitación y pueden recibir atención y servicios médicos gratuitos. En diciembre de 2011 había 1.686 solicitantes de asilo en Malta.

Artículo 3

24. Uno de los principios reconocidos en la Constitución de Malta es la igualdad entre hombres y mujeres. El artículo 14 establece que el Estado debe promover la igualdad de derechos de hombres y mujeres en el disfrute de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. Asimismo, el Estado debe adoptar las medidas adecuadas para eliminar todas las formas de discriminación entre los sexos cometida por cualquier persona, organización o empresa y garantizar que las mujeres trabajadoras gocen de los mismos derechos y perciban los mismos salarios por el mismo trabajo que los hombres.

25. En los últimos años se han promulgado varias leyes que han introducido medidas para garantizar la igualdad entre los hombres y las mujeres. En paralelo con esas disposiciones se ha establecido un mecanismo nacional cuyo objetivo específico es promover los derechos de la mujer. En 1989 el Gobierno estableció la Comisión para el Adelanto de la Mujer, que fue sustituida por la Comisión Nacional para la Promoción de la Igualdad, adscrita al Ministerio de Justicia, Diálogo y la Familia. En 1964 se creó el Consejo Nacional de la Mujer, organización no gubernamental integrada por particulares y organizaciones nacionales⁶. En el cuadro 1 del anexo I puede verse una lista de iniciativas llevadas a cabo por el Consejo Nacional de la Mujer.

26. En virtud de la Ley de igualdad entre hombres y mujeres⁷, 2003, se estableció un organismo independiente financiado con fondos públicos, la Comisión Nacional para la Promoción de la Igualdad⁸, que recibe y tramita las denuncias de discriminación. Además, instrumenta varias directivas de la Unión Europea sobre la igualdad de trato entre los sexos. Otros aspectos de la Ley están relacionados con la introducción de medidas legislativas para reforzar la legislación existente en materia de igualdad de trato y de oportunidades para el hombre y la mujer en el acceso al empleo, el empleo por cuenta propia y la educación y formación profesional. La Ley contiene también disposiciones contra el acoso sexual en el lugar de trabajo y contra los estereotipos sexuales en la publicidad y los medios de difusión.

27. La mujer maltesa obtuvo el derecho al voto el 5 de septiembre de 1947, y en 1955 se designó ministra por primera vez a una mujer, la Sra. Agatha Barbara, asignada a la cartera de educación. Durante cinco años fue también Ministra de Servicios Sociales, y por último accedió a la Jefatura del Estado en 1982. Es la primera y única mujer que ha ocupado ese cargo en el país. Actualmente hay seis mujeres en la Cámara de Representantes, y una de ellas forma parte del gabinete (cuadro 2). Al 31 de enero de 2012 la representación femenina en los consejos locales era la siguiente: 7 alcaldesas (10,3%), 11 vicealcaldesas (16,2%) y 72 consejeras (23,4%) (cuadro 3).

28. Durante el último decenio ha aumentado el número de mujeres que ocupan cargos de rango superior -legisladores, altos funcionarios y directores- tanto en el sector público como en el privado. Se ha registrado un aumento del 47,83% de las trabajadoras del sector

⁵ Reglamento sobre la acogida de solicitantes de asilo (criterios mínimos), Legislación subsidiaria 420.06, norma 10.

⁶ Consejo Nacional de la Mujer de Malta: Promoción de la igualdad de oportunidades <<http://www.ncwmalta.com/home/?l=1>> consulta realizada el 31 de enero de 2012.

⁷ Ley de igualdad entre hombres y mujeres, cap. 456 de la legislación de Malta.

⁸ Welcome to NCPE <https://secure2.gov.mt/socialpolicy/SocProt/equal_opp/equality/welcome/front_pg.aspx> consulta realizada el 31 de enero de 2012.

público entre 1993 (192 mujeres) y 2011 (368 mujeres), mientras que en el sector privado el aumento ha sido del 61,64% (de 1.500 a 3.910 mujeres), lo que representa un aumento total del 60,45% (cuadro 4). Solo una mujer ha sido nombrada Secretaria Permanente (Fondos de la UE en la Oficina del Primer Ministro); hay 12 mujeres magistradas y juezas de un total de 41, es decir, el 29,27% (cuadro 5). Asimismo, en julio de 2002 el Presidente de Malta nombró la primera embajadora residente. Actualmente Malta tienen dos embajadoras residentes, una en Túnez y otra en Madrid. Además, una mujer ocupa el cargo de Fiscal General Adjunta.

1. Igualdad de género en virtud del derecho civil

29. La mujer goza en Malta de un régimen de igualdad con el hombre en todas las cuestiones civiles. Así, la mujer puede, en su propio nombre, suscribir contratos y demandar y ser demandada, y posee iguales derechos que el varón en materia sucesoria. Esta situación fue resultado de una serie de leyes a partir de 1973. En virtud de la Ley N° XLVI de 1973, se otorgó a la mujer casada el derecho de contratar en su propio nombre y de demandar y ser demandada. Sin embargo, solo en 1993 las modificaciones del Código Civil colocaron a la mujer casada en igualdad de condiciones con el varón, sobre todo en relación con de la administración de los bienes gananciales y la autoridad respecto de los hijos.

30. Hasta las modificaciones del Código Civil de 1993, el marido era el jefe del hogar y tenía mayores derechos y obligaciones matrimoniales que su esposa. Las modificaciones de 1993 establecieron la igualdad de los cónyuges en el matrimonio. Los bienes comunes adquiridos después del matrimonio son administrados conjuntamente por ambos, y cualquier decisión importante relativa a la familia o al hogar conyugal se adopta conjuntamente. La patria potestad deja de corresponder exclusivamente al padre y se asigna a los cónyuges la responsabilidad conjunta. La esposa, en vez de recibir automáticamente el apellido del esposo al casarse, puede optar por mantener su nombre de soltera o agregar al suyo el apellido del esposo. Los hijos reciben el apellido del padre, al que pueden agregar el de la madre.

2. Igualdad de género en el empleo

31. En 1974 se promulgó la Ordenanza Nacional sobre Igualdad de Salarios (LN 111 de 1974), que dispone el establecimiento progresivo de la igualdad de remuneración para los trabajadores de ambos sexos en los empleos de igual clase o categoría. La plena igualdad de remuneración se aplicó a partir del 1 de abril de 1976. Además, la Ordenanza Nacional sobre Salario Semanal Mínimo (LN 42 de 1976) dispone que los salarios pagados a las trabajadoras no pueden ser inferiores a los pagados a los trabajadores varones por las mismas tareas o un trabajo de igual valor.

32. Otro año importante para la igualdad de género en el empleo fue 1981. Mientras que, hasta ese año, la mujer estaba obligada a renunciar a sus puestos en la Administración Pública al contraer matrimonio, esta prescripción quedó eliminada en virtud de la Circular de la Oficina del Primer Ministro N° 103/80, de 31 de diciembre de 1980. Además, el mismo año se modificó la Ley sobre condiciones de empleo (reglamentación) de 1952 para ofrecer a todas las trabajadoras de los sectores privado y paraestatal una salvaguardia contra el despido al contraer matrimonio o durante el embarazo. A partir del 1 de enero de 2001 se estableció una licencia de maternidad de 13 semanas con remuneración completa. Ese plazo se amplió a 14 semanas conforme a la Directiva 92/85/CEE de la Unión Europea. Posteriormente volvió a ampliarse en virtud del Reglamento de protección de la maternidad (empleo) (enmienda) (N° 2), 2011, que modificó el reglamento principal, a saber el Reglamento de protección de la maternidad (empleo), 2003, prorrogando de 14 a 16

semanas el período ininterrumpido de licencia a partir del 1 de enero de 2012 y a 18 semanas a partir del 1 de enero de 2013.

33. En la Administración Pública se han dictado diversas medidas para facilitar la conciliación entre las responsabilidades del trabajo y la familia. Además, los funcionarios públicos pueden optar por trabajar en horario reducido a fin de cuidar a sus hijos de menos de 8 años de edad⁹. Todos los funcionarios públicos tienen derecho, con motivo del nacimiento de un hijo, a 12 meses de licencia no remunerada, que puede tomar indistintamente el padre o la madre o que puede repartirse entre ambos. Además, hasta que el niño cumple 5 años, cualquiera de sus padres puede interrumpir la carrera profesional durante un período de hasta tres años. También se puede repartir ese tiempo entre ambos. Además, existe la opción de un año de licencia especial para los empleados que tienen niños en régimen de acogida y una licencia de adopción de cinco semanas para todos los empleados a tiempo completo que adoptan un niño. Con tal ocasión, los hombres tienen derecho a dos días de licencia remunerada.

34. Además, la Ley de empleo y servicios de formación profesional¹⁰, 1990, que establece la Dirección Nacional de Empleo y Formación Profesional, dispone que la discriminación de género por parte de los empleadores contra cualquier persona en relación con el empleo constituye un delito en virtud de dicha Ley. Una persona declarada culpable de este delito puede ser sancionada con multa de no menos de 1.164,69 euros y no más de 11.646,87 euros.

35. Dicha Dirección tomó la iniciativa de organizar una campaña de comercialización social bajo el lema *Nista' - Responsabilidades compartidas en el trabajo y en la vida* con el fin de promover el equilibrio entre las exigencias laborales y personales; la campaña está destinada a las mujeres, los hombres, los empleadores y a la sociedad en general. Se divide en cuatro fases:

- a) Sensibilización de la sociedad en general;
- b) Cuestionamiento del papel tradicional de la mujer;
- c) Promoción del hombre en la esfera familiar;
- d) Contribución de los empleadores a la conciliación de la vida privada y la vida laboral.

36. Mediante la Circular N° 24/2000 de la Oficina del Primer Ministro sobre incorporación de la perspectiva de género, el Gobierno ha establecido su política sobre esta materia y destacado la responsabilidad de todos los ministerios y departamentos gubernamentales en su aplicación.

37. La Ley de empleo y relaciones laborales, 2002, que complementa las disposiciones de la Ley de igualdad entre hombres y mujeres, contiene disposiciones contra la victimización y el acoso sexual y en favor de la igualdad de género en el empleo y la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor.

38. Más en concreto, en lo que respecta al empleo y a la igualdad de derechos, el artículo 26 de la Ley de empleo y relaciones laborales prohíbe la discriminación en las convocatorias de vacantes o selección de candidatos para un empleo. Prohíbe también discriminar entre los empleados o a una clase determinada de empleados con respecto a las condiciones de empleo o de despido.

⁹ Reglamento sobre la licencia por maternidad y paternidad, Legislación subsidiaria 452.78.

¹⁰ Ley de empleo y servicios de formación profesional, cap. 343 de la legislación de Malta.

39. En dicho artículo, se consideran que las siguientes acciones constituyen trato discriminatorio:

- a) Contratación o selección de una persona que está menos calificada que otra persona del sexo opuesto, a no ser que el empleador pueda demostrar que la decisión estaba basada en motivos aceptables relacionados con la naturaleza del trabajo o con el anterior desempeño y experiencia laboral;
- b) Adopción de medidas y condiciones de pago o empleo para un empleado menos favorables que las aplicadas a otro empleado que realiza el mismo trabajo o un trabajo de igual valor, por motivos discriminatorios;
- c) Aplicación de medidas en virtud de las cuales el empleador, deliberadamente, gestiona el trabajo, distribuye las tareas o estipula de alguna otra manera las condiciones de trabajo de manera que un empleado reciba una consideración claramente menos favorable que otros por motivos discriminatorios.

40. Todas las denuncias de infracción de estas normas se interponen ante el Tribunal de Trabajo.

3. Igualdad de género en la educación

41. No se hace distinción alguna entre el varón y la mujer en lo que respecta al derecho a recibir educación, y la educación obligatoria entre los 5 y los 16 años de edad se aplica a ambos sexos. El Estado tiene la obligación de prestar todos los servicios a los alumnos de ambos sexos. El artículo 3 de la Ley de educación de 1988 establece que "todos los ciudadanos de la República de Malta tienen el derecho de recibir educación e instrucción, sin ninguna distinción por motivos de edad, sexo, creencias o recursos económicos".

42. La educación terciaria está igualmente abierta a las personas de ambos sexos y es gratuita. El número de mujeres estudiantes en la Universidad de Malta ha registrado un aumento desde 1988. En 2011 representaban el 57,9% de la población estudiantil. Ese mismo año el 58,3% del total de los graduados eran mujeres (Cuadros 6 y 7). Ha aumentado también rápidamente el número de mujeres que continúan sus estudios después de los 16 años de edad: eran 4.032 en 1993 y 20.084 en 2010 (cuadro 8).

Artículo 4

43. El artículo 47 2) de la Constitución determina que Malta se encuentra en situación de emergencia pública cuando se da una de las siguientes circunstancias:

- a) El país se encuentra en guerra; o
- b) El Presidente proclama la existencia de una situación de emergencia pública; o
- c) Hay una resolución vigente de la Cámara de Representantes, aprobada al menos por dos tercios de todos sus miembros, que declare que las instituciones democráticas de Malta están amenazadas por la subversión.

44. Una proclamación de emergencia deja de estar en vigor una vez transcurridos 14 días desde la fecha en que se formuló. La duración puede ampliarse por un período adicional de tres meses mediante resolución de la Cámara de Representantes. De la misma manera, una resolución de la Cámara de Representantes que declare que las instituciones democráticas de Malta están amenazadas por la subversión deja de estar en vigor una vez transcurridos 12 meses desde la fecha en que se aprobó. Las disposiciones de la Constitución que hacen referencia expresa a la emergencia pública son las siguientes:

a) El artículo 34 establece la protección contra la detención o encarcelamiento arbitrarios. Ninguna disposición adoptada en virtud de una ley se considerará incompatible con el artículo 34 cuando dicha ley autorice, durante un período de emergencia pública, la adopción de medidas razonablemente justificadas para hacer frente a la situación. Las medidas pueden ser objeto de revisión judicial para determinar si son "razonablemente justificables";

b) El artículo 35 estipula que el trabajo exigido durante un período de emergencia pública no puede considerarse trabajo forzoso. Tal medida no puede ser objeto de revisión judicial;

c) El artículo 45 garantiza la protección contra la discriminación por motivos de raza, etc. Esa norma no se aplica cuando, durante un período de emergencia pública, la ley prevé la adopción de medidas razonablemente justificadas para hacer frente a la situación.

El terrorismo en la legislación maltesa

45. Malta es miembro de las Naciones Unidas desde 1964. El Primer Ministro está facultado para incorporar una resolución del Consejo de Seguridad en la legislación maltesa dictando disposiciones de conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre los intereses nacionales (facultades básicas)¹¹, 1993¹². La obligación de Malta de adoptar medidas encaminadas a reprimir el terrorismo está basada en instrumentos como las convenciones y las resoluciones del Consejo de Seguridad promulgadas por las Naciones Unidas.

46. Malta firmó y ratificó la Convención de Viena, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) y el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo. El Convenio del Consejo de Europa relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito y a la financiación del terrorismo se ratificó el 30 de enero de 2008 y entró en vigor el 1 de mayo de 2008. Aunque la Convención de Palermo y el Convenio relativo a la financiación del terrorismo están vigentes, en algunas cuestiones hay todavía reservas acerca de la eficacia de la aplicación. Las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se incorporan, mediante la legislación subsidiaria, en virtud de la Ley sobre los intereses nacionales (facultades básicas). Las resoluciones 1267 (1999) y 1373 (2001) del Consejo de Seguridad son aplicables en Malta en virtud de los avisos legales 214 (1999) y 156 (2002).

47. En 2005, el Código Penal se enmendó mediante la Ley VI de 2005. Esta introdujo el nuevo epígrafe "De los actos de terrorismo, la financiación del terrorismo y los delitos conexos". En él se tipifican como delitos los "actos de terrorismo", la "financiación del terrorismo" y la "financiación de grupos terroristas". Se incluyen también definiciones detalladas de "acto de terrorismo", "grupos terroristas" y "bienes de terroristas".

48. Se definen como "actos de terrorismo" los siguientes:

- a) Quitar la vida a una persona o privarla de la libertad;
- b) Poner en peligro la vida de una persona causándole lesiones corporales;
- c) Causar lesiones corporales;
- d) Causar en instalaciones estatales o gubernamentales, un sistema de transporte público, instalaciones de infraestructura, incluidos los sistemas informáticos, una

¹¹ Ley sobre los intereses nacionales (facultades básicas), cap. 365 de la legislación de Malta.

¹² Puede encontrarse una lista completa en:

<http://gov.mt/frame.asp?l=1&url=http://www.justiceservices.gov.mt/lom.aspx?pageid=27&mode=chrono>.

plataforma fija ubicada en la plataforma continental, un lugar público o una propiedad privada una destrucción significativa, que pueda poner en peligro la vida o causar grave daño a los bienes de cualquier otra persona o que den lugar a una pérdida económica grave;

e) Apoderarse ilícitamente de aeronaves, barcos u otros medios de transporte de pasajeros o de mercancías;

f) Fabricar, poseer, adquirir, transportar, suministrar o utilizar armamentos, explosivos o armas nucleares, biológicas o químicas;

g) Realizar actividades de investigación o desarrollo de armas biológicas y químicas;

h) Emitir o verter sustancias peligrosas, o causar incendios, explosiones o inundaciones que pongan en peligro la vida de cualquier persona;

i) Perturbar el suministro de agua, electricidad o cualquier otro recurso natural esencial poniendo con ello en peligro la vida de cualquier persona.

49. El artículo 328A 2) j) del Código Penal amplía la definición de acto de terrorismo para incluir también la amenaza de perpetrar cualquiera de los actos mencionados en los apartados a) a i).

50. Para que una persona sea declarada culpable de conformidad con las disposiciones relativas al terrorismo, debe haber actuado de manera deliberada y con el fin de intimidar gravemente a una población u obligar a un gobierno u organización internacional a realizar o abstenerse de realizar un acto o desestabilizar de manera grave o destruir las estructuras políticas, constitucionales, económicas o sociales de un país o una organización internacional.

51. Si una persona es declarada culpable de un acto de terrorismo, puede ser condenada a pena de prisión de cinco años a cadena perpetua.

52. Según el Código Penal por "grupo terrorista" se entiende un "grupo estructurado (es decir, un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada) de más de dos personas, establecido a lo largo de un período de tiempo y que actúe de forma coordinada para cometer delitos de terrorismo".

53. Se tienen también en cuenta a las personas que promueven, constituyen, organizan, o dirigen a esos grupos terroristas o les facilitan financiación e información. Cuando se comprueba que dichos actos se realizan con pleno conocimiento de que esa información va a contribuir a la realización de actividades criminales de dicho grupo, la persona podrá ser sancionada con pena de prisión de no más de 30 años; cuando dicha participación consiste en dirigir el grupo terrorista, se impondrá pena de prisión de no más de ocho años a quienes amenacen con cometer el acto de terrorismo y también a quienes cometan cualquier acto relacionado con el terrorismo.

54. Toda persona que reciba, suministre, o invite a alguien a aportar recursos monetarios (sea en forma de préstamo o de donación) u otros bienes para utilizarlos con fines terroristas podrá ser sancionada con pena de prisión de no más de cuatro años o/y multa no superior a 11.646,47 euros. La misma pena se impondrá a quien posea dinero u otros bienes que se van a utilizar, o de los que quepa sospechar razonablemente que puedan utilizarse, para cometer un acto de terrorismo. Por otro lado, toda persona que hace uso de esos fondos puede ser sancionada con prisión de no más de 12 años.

55. Asimismo, toda persona que concierta un acuerdo o participa en un acuerdo cuyo objetivo es facilitar la retención o control de bienes terroristas podrá ser condenada a pena

de prisión de no más de cuatro años de prisión y/o multa no superior a 11.646,47 euros. En este caso por "bienes terroristas" se entiende el dinero u otros bienes que se utilizarán probablemente con fines terroristas, los ingresos procedentes de la comisión de actos de terrorismo y los derivados de actos llevados a cabo con fines terroristas.

56. Cuando la financiación o cualquier acto de terrorismo o la comisión del delito pueden atribuirse a una sociedad, es decir, a sus directores, administradores, secretarios u otros altos cargos o personas que tengan facultades de representación de dicha sociedad o con autoridad para tomar decisiones en nombre de la misma, dichas personas podrán ser sancionada con multa de no menos de 11.646,47 euros y no más de 2.329.373,40 euros.

57. En calidad de Estado miembro de la UE, Malta está obligada a cumplir la legislación comunitaria, por lo que el Aviso Legal 199 de 2003 incorporó en su legislación la segunda directiva de la UE sobre el blanqueo de dinero, y el resultado fue la aprobación del Reglamento para la prevención del lavado de dinero. Este se enmendó posteriormente mediante el Aviso Legal 42 de 2006, que cambió su nombre por el de Reglamento para la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Mediante este Aviso Legal, se introdujeron medidas cuyo objetivo era prevenir y detectar la financiación del terrorismo de conformidad con la legislación maltesa. Más adelante, el Reglamento fue revocado mediante el Aviso Legal 180 de 2008. Este incorporó la tercera directiva de la UE sobre el lavado de dinero, a saber, la Directiva 2005/60/CE. El consiguiente Reglamento para la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo (2008) introdujo una ampliación de la lista de personas sujetas a las obligaciones establecidas en dicho Reglamento. Se ampliaron también las obligaciones de dichas personas de aplicar medidas para detectar transacciones relacionadas con la financiación del terrorismo. Las obligaciones previstas en el Reglamento se refieren a "toda persona jurídica o natural con cometidos financieros o actividades pertinentes".

58. No ha habido condenas locales por financiación del terrorismo. Asimismo, las personas sometidas a dichas obligaciones solo han señalado a la Dependencia de Análisis de Información Financiera un pequeño número de transacciones sospechosas y actividades de personas que pueden estar asociadas con el terrorismo. Desde 2003 se han presentado a dicha Dependencia cuatro denuncias de transacciones sospechosas¹³.

59. Las autoridades de Malta indicaron que la congelación de los bienes de terroristas de acuerdo con lo estipulado en la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en particular los activos de ciudadanos o residentes de la Unión Europea, puede conseguirse también mediante avisos legales publicados en virtud de la Ley sobre los intereses nacionales (facultades básicas), en los que se incluirían listas de dichos ciudadanos o residentes relacionados con el terrorismo. En esos avisos pueden especificarse también las sanciones por incumplimiento de las obligaciones de congelación de activos. En cuanto a la congelación de fondos, la situación ha cambiado desde el tercer informe. Dicha ley constituiría la base jurídica para la congelación de activos sin necesidad de aplicar una orden judicial. No obstante, ningún ciudadano o residente de la UE ha recibido un aviso legal en virtud de dicha Ley.

60. Cuando un reglamento promulgado en virtud de la Ley sobre los intereses nacionales (facultades básicas) obliga a una persona o entidad a identificar los fondos o activos que pertenecen o están en posesión de personas o entidades identificadas o identificables en virtud del reglamento, o cuando un reglamento impone la congelación o bloqueo de dichos fondos o activos, toda persona o entidad cuyas actividades requieren la expedición de una licencia deberá comunicar sin demora por escrito a la autoridad

¹³ Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU), Malta Annual Report 2010
 <<http://www.fiumalta.org/library/PDF/Annual%20Report%202010.pdf>> consulta realizada el 16 de febrero de 2012.

expedidora de las licencias toda la información pertinente. A su vez, dicha autoridad está obligada a transmitir dicha información a la Junta de Supervisión de las Sanciones establecida en virtud de la Ley sobre los intereses nacionales (facultades básicas).

Artículo 5

61. Las disposiciones de la Constitución, la Ley sobre la Convención Europea, de 1987, y los recursos judiciales de que disponen todas las personas en Malta garantizan la plena aplicación de los derechos consagrados en el Pacto, según figuran en la legislación de Malta. Además, los tribunales interpretan las leyes con su significado corriente y no se les da ninguna interpretación restrictiva a menos que lo permita la ley.

Artículo 6

1. El derecho a la vida

62. El derecho a la vida está consagrado en el artículo 33 1) de la Constitución de Malta, en el que se dispone que "nadie será privado intencionalmente de su vida". No obstante, la excepción a esta norma es el caso de "la ejecución de una sentencia pronunciada por un tribunal como consecuencia de una infracción penal prevista en la legislación de Malta por la que haya sido condenado ". Asimismo, lo que se estipula en el artículo 33 de la Constitución de Malta se refleja también en el artículo 2 del Título I del Convenio Europeo, en el que se dispone lo siguiente: "El derecho de toda persona a la vida está protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de su vida intencionadamente, salvo en ejecución de una condena que imponga la pena capital dictada por un tribunal al reo de un delito para el que la ley establece esa pena".

63. En el apartado 2) de ambos artículos se establece que el fallecimiento debido a un uso de la fuerza que, dadas las circunstancias, fuera razonablemente justificable no constituye privación de la vida. Las razones justificables comunes a ambos apartados son las siguientes: a) defender a una persona de una agresión ilegítima (o proteger sus bienes); b) practicar una detención legal o impedir la evasión de una persona legalmente detenida o encarcelada; c) para reprimir, de acuerdo con la ley, una revuelta o insurrección. No obstante, la Constitución de Malta agrega una cuarta razón, a saber, "impedir que una persona cometa un delito o si la muerte ha ocurrido como consecuencia de un acto de guerra lícito".

2. Presunciones de la legislación de Malta sobre la condición de los niños no nacidos

64. En 2010 la tasa de natalidad fue de 3.617 (1.865 niños y 1.752 niñas), lo que representa un descenso del 29,73% con respecto a 1993, año en que la tasa global de natalidad fue de 5,147 (cuadro 9). Por otro lado, no hubo una sola muerte materna en los tres últimos años (cuadro 10).

65. En la legislación de Malta el aborto está tipificado como delito. En concreto, nuestra legislación incluye el delito de aborto en el epígrafe VII del título VIII del Código Penal, titulado "Del aborto inducido, de la administración o suministro de sustancias venenosas o de efectos mortales y de la propagación de enfermedades". El término "aborto inducido" se utiliza en el epígrafe VII pero no en los artículos 241, 242 y 243, en los que se habla de "aborto espontáneo". El texto del artículo 241 1) es el siguiente: "Cualquier persona que, mediante la administración de bebidas, alimentos o medicinas, mediante la utilización de la violencia o por cualquier otro medio, cause el aborto de una mujer embarazada, con independencia de que la mujer esté o no de acuerdo, podrá ser condenada con pena de prisión de 18 meses a 3 años". En el apartado 2) se prevé el mismo castigo para cualquier

mujer que procure su propio aborto o haya consentido a la utilización del medio empleado con ese fin.

66. En el artículo 242 del Código Penal se estipula que, si la mujer fallece o sufre lesiones graves, independientemente de que tenga lugar o no el aborto, podrá aplicarse al infractor la sanción aplicable al homicidio o a los daños físicos, disminuida de uno a tres grados. No se trata de un mero agravante del delito de aborto sino de un delito específico cuya responsabilidad se contrae, en las debidas circunstancias, independientemente de que el aborto haya tenido o no lugar. No son pocos los casos en los que los medios utilizados para el aborto provocan también la muerte de la mujer o graves daños a su salud. Estos efectos pueden producirse sin que llegue a ocurrir el aborto. El artículo 242 no equipara la sanción a la prevista para el homicidio voluntario o la lesión corporal voluntaria, ya que en tales casos no estaban previstas consecuencias más graves. Si, por el otro lado, el infractor desea la muerte de la mujer o provocarle daño, será culpable de homicidio o daño corporal voluntario sin reducción de la sanción.

67. Finalmente, el artículo 243 del Código Penal establece que todo médico, cirujano, obstetra o farmacéutico que prescriba o administre a sabiendas los medios por los cuales se puede provocar el aborto podrá ser condenado a pena de prisión de 18 meses a 4 años, y podrá verse alejado para siempre del ejercicio de la profesión médica (exclusión permanente del registro médico).

68. El artículo 135 del Código Civil estipula que, en todas las cuestiones civiles, los padres representan conjuntamente a sus hijos con independencia de que hayan nacido o no. El artículo 170 1) hace referencia a los curadores *ad ventrem* que son nombrados si, en el momento de la defunción del marido, la mujer declara que está embarazada. El tribunal realiza el nombramiento, a petición de cualquier persona interesada, con el fin de impedir la supresión del nacimiento o la sustitución del hijo y para administrar los bienes hasta el momento del nacimiento según las orientaciones que el tribunal considere apropiadas.

69. El artículo 283 3) del Código Civil afirma que, en caso de aborto, solo se levantará acta de nacimiento si el feto ha adquirido forma plenamente humana. El artículo 601 1) aclara el significado de la viabilidad en la legislación, estableciendo que los nacidos no viables no podrán suceder por testamento. Por otro lado, se supone que los nacidos vivos son viables. Ello puede interpretarse en el sentido de que los derechos de sucesión comienzan con el nacimiento y solo cuando el recién nacido es suficientemente maduro como para poder ser considerado viable.

70. El artículo 9 de la Ley del Comisionado para la Infancia estipula que el Comisionado deberá desempeñar varias funciones, una de las cuales es lograr los niveles más altos de calidad de los servicios de salud y sociales para las mujeres durante el embarazo y promover una atención y protección especial para los niños, incluida la protección jurídica adecuada, tanto antes como después del nacimiento.

71. Por violencia doméstica¹⁴ se entiende todo acto de violencia, aunque solo sea verbal, cometido por un miembro de la familia sobre otro, e incluye toda omisión que cause un daño físico o moral a la otra parte. Entre los miembros del hogar se incluye "ix) el niño concebido pero todavía no nacido de cualquiera de las personas mencionadas en los párrafos i) a viii), ambos inclusive, es decir, las personas casadas o anteriormente casadas, otras personas que compartan el mismo hogar, los prometidos y los familiares".

72. El feto está protegido indirectamente en los reglamentos sobre seguridad y salud en el trabajo de las mujeres embarazadas, en particular "cuando un empleador adopta medidas para proteger la salud y seguridad de una empleada que quede embarazada o comience la

¹⁴ Ley sobre la violencia doméstica, cap. 481, art. 2.

lactancia materna, en forma satisfactoria para el Organismo de Seguridad y Salud en el Empleo, para evitar el riesgo de exposición a situaciones que pudieran poner en peligro la salud o seguridad de dicha empleada, agentes, procesos o condiciones de trabajo que estén prohibidos en virtud de disposiciones específicas adoptadas de acuerdo con la Ley del Organismo de Seguridad y Salud en el Empleo, siempre que la empleada haya informado debidamente a su empleador de que está embarazada o amamantando a su hijo"¹⁵.

73. En la Constitución de Malta no se hace ninguna mención del aborto ni de los derechos de los niños no nacidos pero sí se menciona el derecho a la vida, derecho que se incluye también en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

74. En una demanda presentada ante el Tribunal Constitucional el 9 de diciembre de 2003, *Anthony Borg c. Comisionado de Policía*, Borg pidió al tribunal que declarara que la orden de deportación dictada por el Comisionado de Policía contra su novia embarazada Nadezda constituía una violación de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 32 de la Constitución de Malta y el artículo 8 del Convenio Europeo, relativos al derecho fundamental a la vida. El demandante explicaba que su novia tenía intención de abandonar Malta para visitar su país de origen (Rusia) a fin de abortar. En su respuesta, el Comisionado de Policía rechazaba esa petición afirmando que la mujer rusa tenía derecho a decidir teniendo en cuenta las disposiciones de las leyes de su país. No se dictó una sentencia, ya que las partes llegaron a un acuerdo durante los procedimientos y, por consiguiente, se retiró la demanda.

75. El 24 de agosto de 2000 se presentó otra demanda ante el Tribunal Constitucional, *Emilio Persiano c. Comisionado de Policía*. Persiano quería que se dictara un interdicto prohibitorio contra el Comisionado de Policía en calidad de Oficial Principal de Inmigración, que quería expatriar a Marruecos a Rajaa Mukada. Esta mujer marroquí estaba embarazada de cuatro meses con un hijo no nacido de Persiano. El solicitante temía que, si Mukada regresaba a su país, se vería obligada a abortar por razones religiosas y culturales. Por ello, solicitaba protección en virtud de la Ley de inmigración. El Comisionado de Policía mantenía que la Ley de inmigración no otorga el derecho a la libertad de ingreso en Malta a las personas que no han nacido todavía. El Tribunal decidió que, dado que la mujer embarazada y el niño no nacidos son inseparables, en consideración del interés superior del niño la madre no debía ser deportada.

3. Infanticidio

76. El castigo por el aborto es mucho menor que el castigo impuesto a una persona declarada culpable de infanticidio. Este se regula en el epígrafe VIII del título VIII del Código Penal titulado "Del infanticidio y el abandono, la exposición y el maltrato de niños". En él se dispone que toda mujer que, por acción u omisión, provoque la muerte de su hijo de menos de 12 meses de edad será sancionada, en caso de ser condenada, con pena de prisión de no más de 20 años. Si una madre que ha dado a luz a un hijo no atiende sus necesidades básicas, consideradas imprescindibles para la supervivencia del lactante, la madre será declarada culpable de infanticidio, mediante un acto de omisión. La Ley establece una serie de requisitos para que se produzca el delito de infanticidio. Primero, el delito debe ser cometido por la madre del hijo cuya muerte se provocó. Segundo, el hijo no debe tener más de 12 meses de edad. Tercero, en el momento en que se comete el delito, la madre no debe sufrir trastorno mental debido a los efectos del parto del hijo en cuestión o a la lactancia después del nacimiento. Cuarto, el niño debe haber nacido vivo.

¹⁵ Reglamento de protección de la maternidad en el empleo, Legislación subsidiaria 452.91, Norma 4.

4. Pena de muerte

77. Malta ha ratificado varios convenios y protocolos relativos a la pena de muerte. Son los siguientes:

- Convención sobre los Derechos del Niño;
- Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;
- Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales;
- Protocolo N° 6 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (relativo a la abolición de la pena de muerte)¹⁶;
- Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes;
- Protocolo N° 13 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, relativo a la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias;
- Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (que excluye la pena de muerte).

78. El 29 de diciembre de 1994, Malta se adhirió también al Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte. La pena de muerte ha sido abolida por el Parlamento de Malta en tres etapas: a) en 1971 se abolió para los delitos penales comunes, excepto en el caso de delitos militares cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas; b) en 1990, para los militares, excepto en tiempo de guerra; y c) en 2000 se abolió por completo tanto en tiempo de paz como de guerra. El 21 de marzo de 2000 se promulgó una enmienda de la Ley de las Fuerzas Armadas de 2000 tras la aprobación por la Cámara de Representantes y el entonces Presidente Guido de Marco. Dicha ley abolió la pena de muerte por todos los delitos. El proyecto de ley fue promovido por el Ministro del Interior, Excmo. Dr. Tonio Borg, y contó con el apoyo tanto del gobierno como de la oposición. En virtud de sus disposiciones, la cadena perpetua sustituye a la pena de muerte por todos los delitos.

79. El 3 de mayo de 2002 Malta depósito ante el Consejo de Europa el instrumento de ratificación del Protocolo N° 13 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, relativo a la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias. El 18 de diciembre de 2008 y el 21 de diciembre de 2010 Malta copatrocinó y votó en la Asamblea General a favor de las resoluciones sobre una moratoria del uso de la pena de muerte (62/149 y 65/206).

Artículo 7

80. La Constitución de Malta, en su artículo 36, prohíbe todo castigo o trato inhumano o degradante. En él se dispone lo siguiente:

- 1) Nadie será sometido a castigos o tratos inhumanos o degradantes.

¹⁶ Artículo 1 - Abolición de la pena de muerte: Queda abolida la pena de muerte. Nadie podrá ser condenado a tal pena ni ejecutado. Artículo 2 - Pena de muerte en tiempo de guerra: Un Estado podrá prever en su legislación la pena de muerte para aquellos actos cometidos en tiempo de guerra o de peligro inminente de guerra; dicha pena solamente se aplicará en los casos previstos por dicha legislación y con acuerdo a lo dispuesto en la misma. Dicho Estado comunicará al Secretario General del Consejo de Europa las correspondientes disposiciones de la legislación en cuestión.

2) Lo establecido en la ley o hecho en virtud de ella no se reputará incompatible con el presente artículo ni en contravención del mismo en la medida en que la ley en cuestión autorice la imposición de cualquier clase de castigo que fuese legal en Malta inmediatamente antes del día señalado como referencia.

3) a) Ninguna ley preverá la imposición de castigos colectivos.

b) Lo dispuesto en el presente párrafo no impedirá la imposición de castigos colectivos a los miembros de las fuerzas del orden conforme al régimen legal de la disciplina de dichas fuerzas.

81. Malta se adhirió a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes el 13 de septiembre de 1990. Anteriormente, el 7 de marzo de 1988 Malta ratificó el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes. Asimismo, el 4 de noviembre de 1993 Malta ratificó los Protocolos Nos. 1 y 2 al Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes.

1. Definiciones

82. Según el artículo 54C del Código Penal de Malta por "tortura" se entiende "causar intencionalmente dolor o sufrimiento grave, ya sea físico o mental, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control; sin embargo, no se entenderá por tortura el dolor o sufrimiento que se derive únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas". Se encuentra una definición semejante en el Reglamento sobre el comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes¹⁷, en el que por "tortura" se entiende "todo acto por el cual se inflige intencionalmente a una persona dolor o sufrimiento grave, ya sean físico o mental, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que ella o un tercero haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dicho dolor o sufrimiento sea infligido por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. Sin embargo, no se incluye el dolor o sufrimiento que es consecuencia únicamente de sanciones legítimas, inherentes o incidentales a estas". En el mismo Reglamento, por "otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes" se entiende "cualquier acto por el cual se inflige a una persona dolor o sufrimiento significativo, físico o mental, cuando dicho dolor o sufrimiento sea infligido por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. Sin embargo, no se incluye el dolor o sufrimiento que es consecuencia únicamente de sanciones legítimas, inherentes o incidentales a estas".

2. Leyes relativas a la tortura u otras penas crueles o inhumanas

83. El mismo Reglamento antes mencionado aplica las disposiciones del Reglamento CE N° 1236/2005 del Consejo sobre el comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Este reglamento, como indica el título, prohíbe la exportación e importación de materiales cuyo único uso práctico sea aplicar la pena de muerte o infligir torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona que se

¹⁷ Aviso Legal 167 de 2006 modificado mediante el Aviso Legal 425 de 2007, Legislación subsidiaria 365.22, Norma 2.

encuentre en Malta, o todo ciudadano residente permanente de Malta, independientemente de que se encuentre en Malta o en otro lugar, que sea declarado culpable de infringir el reglamento puede ser condenado a prisión de no más de 5 años o a multa no superior a 116.468,67 euros.

84. Con respecto a la confesión del acusado, el Código Penal considera que una persona acusada puede realizar una confesión, sea en forma oral o por escrito. Es imprescindible que "dicha confesión se realice voluntariamente y no por extorsión ni se obtenga con amenazas o intimidación ni con promesas o expectativas de favores".

3. Tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por funcionarios públicos

85. El Código Penal hace referencia a la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes perpetrados por un funcionario público o cualquier otra persona en el ejercicio de sus funciones. Puede darse el caso de que esos funcionarios ejerzan sus funciones oficiales para infligir a alguien daño o sufrimiento grave, sea físico o mental. Ello puede deberse a varias razones y el Código Penal, en el artículo 139A, enumera las cuatro siguientes: a) obtener de él o de un tercero información o una confesión o b) castigarle por un acto que él o un tercero haya cometido o se sospeche que haya cometido o c) intimidar a él o a un tercero u obligar a él o a un tercero a hacer u omitir alguna acción o d) cualquier razón basada en la discriminación de cualquier tipo. Si se da una de esas circunstancias, el funcionario público puede ser condenado a pena de 5 a 9 años de prisión.

4. Deportación y riesgo de daño irreparable

86. De acuerdo con la jurisprudencia, la extradición, expulsión o deportación por un Estado contratante puede dar lugar a problemas relacionados con el artículo 3 del Convenio Europeo y, por lo tanto, comprometer la responsabilidad del Estado según el Convenio. Así ocurrirá cuando existan razones fundadas para creer que la persona en cuestión, de ser extraditada o deportada, correría un riesgo cierto de ser sometida en el país receptor a tratos contrarios al artículo 3. La determinación de tal responsabilidad conlleva inevitablemente una evaluación de las condiciones en el país solicitante en referencia a los criterios del artículo 3.

87. El artículo 4 del Protocolo al Convenio Europeo excluye la deportación o exclusión colectiva de extranjeros. Recientemente, el 29 de septiembre de 2011, se presentó ante el Tribunal Civil, Sala Primera (Jurisdicción Constitucional), la causa *Abdul Hakim Hassan Abdulle u Kasin Ibrahim Nur c. Ministerio de Justicia y Oficial Principal de Inmigración* (Nº de referencia 56/2007)¹⁸, en la que el tribunal determinó que, debido a la deportación, se habían infringido los derechos humanos fundamentales de los inmigrantes y, por lo tanto, se les compensó con una suma de 10.000 euros. Los hechos del caso eran los siguientes: Los demandantes, dos somalíes, se desplazaron a Libia con la intención de llegar a Malta. Mientras se dirigían a Malta, fueron interceptados por un buque patrulla maltés y acompañados a Malta el 1 de octubre de 2004. Veinte días después de su llegada a la isla, fueron devueltos a Libia. A su llegada a Trípoli, las autoridades libias los detuvieron y los enviaron a un lugar donde se celebraron los interrogatorios. Durante estos, los deportados fueron maltratados y torturados; uno de ellos fue sometido a descargas eléctricas. Después de tres meses de detención en una prisión en Ain Zara, fueron enjuiciados y condenados a un año de cárcel. Los demandantes mantuvieron que durante el encarcelamiento fueron también torturados. Cuando se terminó la condena de prisión, fueron transportados en un jeep hasta el desierto, donde se les abandonó a su suerte -14 días

¹⁸ El 16 de diciembre de 2011 el Ministerio de Justicia y el Oficial Principal de Inmigración presentaron un recurso.

sin comida ni agua. Dos de los inmigrantes fallecieron, pero Abdul y Kasin lograron sobrevivir y el 23 de junio de 2006 regresaron a Malta. Iniciaron un pleito contra las autoridades maltesas sobre la base del artículo 36 de la Constitución, el artículo 3 del Convenio Europeo y el artículo 4 del Protocolo N° 4.

Artículo 8

1. Esclavitud

88. Con excepción de la Orden de supresión de la trata de blancas¹⁹, ninguna legislación interna hace referencia a los problemas de las personas sometidas a esclavitud. Tampoco el Código Penal contiene disposiciones específicas que la prohíban, aun cuando se define en las disposiciones relativas a los crímenes de lesa humanidad. No obstante, si bien el Código Penal no contiene una disposición específica de abolición de la esclavitud y prácticas semejantes, el ordenamiento jurídico nacional salvaguarda la libertad de la persona y mantiene el principio de la libertad de todas las personas.

89. La Orden de supresión de la trata de blancas es un instrumento jurídico nacional, promulgado en 1930, que aborda directamente el problema de la trata de blancas como forma de esclavitud sexual. La Orden se enmendó en 1994 para tipificar como delitos penales las actividades relacionadas con la trata de adultos y niños. De acuerdo con esta Orden, la víctima puede ser cualquier persona, de uno u otro sexo.

2. Trata de personas

90. El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Protocolo de Palermo), entiende por "trata de personas" la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos²⁰. El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación intencional descrita *supra* se considera irrelevante cuando se han utilizado, en cualquier momento, medios como la coerción o el secuestro²¹.

91. La trata de personas no debe confundirse con el tráfico ilícito de migrantes, que supone la facilitación de la migración ilegal. El tráfico ilícito de migrantes implicaría el pago de una tarifa del migrante al traficante a cambio del transporte al país de destino. La relación entre ambos finaliza cuando el migrante llega a ese país. No obstante, es cierto que los migrantes en situación irregular están expuestos a la trata de personas una vez que

¹⁹ Orden de supresión de la trata de blancas, cap. 63 de la legislación de Malta.

²⁰ En virtud de la legislación de Malta, la pena aplicable a la trata de personas con fines de explotación para extraer órganos es de 4 a 12 años.

²¹ Malta Action Plan on Combating Trafficking in Persons: October 2011 - December 2012 <<http://ec.europa.eu/anti-trafficking/download.action?nodeId=9b748a40-54d4-4b0b-8662-c3c1adfe2fa7&fileName=Malta+Action+Plan+on+Combating+Trafficking+in+Persons+October+2011-December+2012.pdf&fileType=pdf>> consulta realizada el 2 de febrero de 2012.

llegan al país de destino o a un país de tránsito, en particular debido a la falta de familiaridad con su nuevo entorno y las nuevas circunstancias²².

92. La trata con fines de explotación sexual, explotación en la fabricación de mercancía o la prestación de servicios y explotación para extraer órganos está prohibida en Malta por el Código Penal (junto con la Orden de supresión de la trata de blancas). El artículo 54C 1) del Código Penal prohíbe la esclavitud y dispone lo siguiente: "Se comete un crimen de lesa humanidad cuando se realiza uno de los siguientes actos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque... c) esclavitud; ...". Por esclavitud debe entenderse "el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, o algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, en particular mujeres y niños".

93. No obstante, la trata de personas procedentes de Malta con fines de prostitución ya se había tipificado como delito penal en la Orden de supresión de la trata de blancas. Esta Orden incorpora a la legislación nacional el Acuerdo internacional para asegurar una protección eficaz contra el tráfico criminal denominado trata de blancas, de 1904, que fue enmendado posteriormente mediante el Protocolo aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 3 de diciembre de 1948. La Orden prohíbe inducir a una persona de al menos 21 de edad a entrar o salir de Malta con fines de prostitución. La sanción reservada a este delito es la de prisión de no más de 2 años, con o sin confinamiento solitario. Asimismo, la sanción será de 2 a 10 años de prisión, con o sin confinamiento solitario, si el delito es cometido:

- a) Por un familiar, a saber, un ascendiente por consanguinidad o afinidad, madre o padre adoptivo, esposa o esposo, hermana o hermano; o
- b) Mediante abuso de autoridad, confianza o relaciones domésticas; o
- c) De forma habitual o para obtener un beneficio²³.

94. Por otro lado, todo aquel que induce a una persona de menos de 21 años de edad a abandonar Malta o a venir al país con fines de prostitución podrá ser sancionado con pena de 2 a 5 años de prisión, con o sin confinamiento solitario. Asimismo, la pena de prisión será de 3 a 10 años si el delito se comete:

- a) En perjuicio de una persona que no ha cumplido todavía los 21 años de edad; o
- b) Mediante violencia, amenazas o engaño; o
- c) Por familiares o tutores, es decir, antecedentes por consanguinidad o afinidad, padre o madre adoptivo, esposo o esposa, tutor, cualquier persona encargada de la atención, educación, instrucción, control o custodia de la persona de menos de 21 años de edad; o
- d) De forma habitual o para obtener un beneficio²⁴.

95. La Ley N° III de 2002 introdujo el epígrafe VIII bis titulado "de la trata de personas" en el Código Penal en cumplimiento del compromiso de Malta con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos. Malta ratificó la Convención y los Protocolos, incluido el Protocolo de Palermo, el 14 de septiembre de 2003.

²² *Ibid.*

²³ Orden de supresión de la trata de blancas, art. 2 1).

²⁴ *Ibid.*, art. 3 1).

96. En 2007, entró en vigor el Reglamento sobre el permiso de residencia para las víctimas de la trata o la inmigración ilegal que cooperan con las autoridades maltesas²⁵. Este Reglamento incorpora la Directiva 2004/81/CE del Consejo de la UE relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de la trata de seres humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal, que cooperen con las autoridades competentes. Esta legislación otorga a las víctimas de la trata o a los inmigrantes ilegales que cooperen con las autoridades maltesas autorización para residir en Malta durante un período de seis meses (renovable). Se prevé también un período de reflexión no superior a dos meses (antes de la concesión del permiso de residencia de seis meses) a las víctimas de la trata, a fin de darles la oportunidad de alejarse de la influencia de los responsables del delito y tomar una decisión informada sobre la posibilidad de cooperar.

97. Las víctimas de la trata pueden acogerse también al Programa de protección de testigos establecido mediante el artículo 75 de la Ley sobre la Policía²⁶. Este programa puede ser utilizado por cualquier víctima de la trata de personas que acepte y "declare que dará testimonio en todos los juicios contra los participantes en el delito, dándose por supuesto que renunciará a todos los posibles beneficios si se niega a dar testimonio en ese contexto". Entre los beneficios del programa se incluyen el reasentamiento de las víctimas en otros países al amparo de una nueva identidad, la protección de la vida y el suministro de bienes para el testigo y su familia y el pago de un subsidio de subsistencia. La decisión final recae en último término en el Fiscal General, que determina si la persona en cuestión será admitida en el Programa de protección de testigos, previa petición del Comisionado de Policía.

98. El 1 de marzo de 2012, el Tribunal de Magistrados (Jurisdicción Penal), en la causa *Policía c. Raymond Mifsud*, declaró a Raymon Mifsud culpable de trata de dos mujeres rusas y le impuso una pena de 9 años de prisión y una multa de 230 euros²⁷.

99. En 2008, el Organismo de Servicios de Bienestar Social (*Aġenzija Appogg*) y el entonces Ministerio de Justicia y del Interior prepararon conjuntamente un folleto con información detallada para lograr una mayor sensibilización acerca del problema de la trata de personas. Contenía orientaciones para identificar a las posibles víctimas y encontrar asistencia. Los folletos se distribuyeron, por ejemplo, en los dispensarios de salud, centros comunitarios e iglesias. Se distribuyeron también en los lugares de distracción para llegar a las posibles víctimas de explotación sexual y a los clientes de servicios sexuales. En enero de 2009, 60 funcionarios de policía recibieron capacitación para identificar y ayudar a las víctimas de la trata²⁸.

100. En febrero de 2009, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) - Malta organizó un seminario de "formación de formadores", seguido de dos días de capacitación en los que se examinaron la legislación comunitaria y nacional pertinente, y las medidas adecuadas para identificar y ayudar a las víctimas. Esta actividad de capacitación se celebró conjuntamente con el Organismo de Bienestar Social, la Policía de Malta y la organización no gubernamental People for Change Foundation. Participaron unos 80 trabajadores sociales gubernamentales y no gubernamentales así como otros

²⁵ Aviso Legal 175 de 2007, S.L. 217.07.

²⁶ Ley sobre la Policía, cap. 164 de la legislación de Malta.

²⁷ La defensa ha interpuesto un recurso.

²⁸ European Commission: Fight against Trafficking in Human Beings - Malta <<http://ec.europa.eu/anti-trafficking/showNIPsection.action?sessionId=yvLFTGgcvnrp9htCN111Mrp8VdVkfzQ0JT21ScsgjK7tGn4s282!741669820?sectionId=98fedc5f-f7c7-410f-9c90-a1d0ffb73a62#>> consulta realizada el 2 de febrero de 2012.

profesionales. La actividad se llevó a cabo en el marco del Programa sobre cooperación policial y judicial en materia penal (AGIS), de la UE²⁹.

101. Dentro de la Policía de Malta, la trata de personas es competencia de la Brigada contra la Delincuencia. En diciembre de 2011 se creó dentro de la Brigada una unidad especial con un equipo especialmente encargado de la prostitución y la trata de personas.

102. Según datos estadísticos, en 2007 hubo seis detenciones por sospecha de personas y se identificaron siete víctimas. En 2008 se identificó una víctima y tres presuntos traficantes fueron procesados judicialmente. En 2011 se enjuició a siete sospechosos y se identificaron tres víctimas. Uno de los sospechosos fue detenido y acusado ante los tribunales y se identificaron tres víctimas hasta fines de junio de 2012.

103. El Organismo de Bienestar Social tiene un oficial de enlace encargado de las cuestiones relacionadas con la trata de personas, que mantiene contactos con la Policía de Malta y otras entidades relacionadas con los casos pertinentes. Mantiene también contactos con otros profesionales dentro del propio Organismo de Bienestar Social, en particular con respecto a la identificación, evaluación y apoyo a las víctimas de la trata.

104. El Primer Ministro ha establecido un Comité de Supervisión nacional, que se reunió por primera vez en 2011. Los objetivos del Comité son fundamentalmente los siguientes:

- Contribuir al Plan nacional de acción contra la trata de personas y participar en su actualización;
- Supervisar la aplicación del Plan de acción y preparar informes para dar a conocer al Gobierno la situación de la trata de personas en Malta;
- Establecer relaciones de intercambio de conocimientos e información con otras autoridades estatales;
- Evaluar las prácticas y procedimientos operacionales de todas las organizaciones relacionadas con la trata de personas; y
- Empezar un proceso de comunicación con grupos de personas en situación de riesgo o el público en general, en caso necesario.

105. Del 14 al 17 de junio de 2011 se ofreció un programa de capacitación para las partes interesadas gubernamentales y las ONG que participan en la lucha contra la trata de personas y la identificación/respaldo de las víctimas. La capacitación fue llevada a cabo por expertos de la OIM (Washington) y fue cofinanciada por la Oficina de los Estados Unidos encargada de la trata de personas y el Gobierno de Malta. En las actividades de capacitación se consideraron, entre otras cuestiones, los diferentes aspectos de la trata de personas, incluida la identificación de las víctimas y el procesamiento de los infractores, entre otras. Se analizaron también los medios más indicados de mejorar la interconexión entre los proveedores de servicios a fin de adoptar una estrategia integrada que permita ofrecer apoyo a las víctimas³⁰. Entre el 27 y 30 de marzo de 2012 se ofreció un segundo programa de capacitación cargo de expertos de la OIM-Roma con destino a las partes interesadas gubernamentales y ONG, y en él se examinó la aprobación oficial de las orientaciones para la identificación de las víctimas de la trata de personas, así como la elaboración de un sistema nacional de remisión de víctimas. Como complemento, entre el 17 y el 20 de julio de este año se organizará un segundo programa de capacitación con el fin de elaborar un Manual de procedimientos para todas las partes interesadas a fin de hacer posible la instrumentación del Sistema de remisión de víctimas. Este programa de capacitación será también ofrecido por expertos de la OIM-Roma.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

106. El Gobierno siguió confiando la responsabilidad de la atención a las víctimas de la trata de personas y consignando fondos a Appogg, organismo de servicios sociales del Gobierno de Malta con cierta participación privada. Se facultó a Appogg para que ofreciera refugio, atención psicológica y otros servicios a las víctimas identificadas de la trata. Este organismo cuenta con una línea telefónica directa de servicios que puede recibir llamadas acerca de la trata de personas³¹.

3. Protección de los niños contra la esclavitud y prácticas conexas en virtud de la legislación de Malta

107. El artículo 157 del Código Civil entiende por niño toda persona que no haya cumplido los 18 años de edad. En 2008, se denunciaron a *Agenzija Appogg* 464 casos de abusos de niños³².

108. La legislación de Malta contiene numerosas disposiciones destinadas a salvaguardar los derechos de los niños y protegerles contra prácticas afines a la esclavitud. Por ejemplo, el artículo 248D del Código Penal estipula que toda persona que practique la trata de menores de edad para explotarlos mediante a) la producción de bienes o prestación de servicios, b) la esclavitud o prácticas análogas, c) la servidumbre, d) actividades asociadas con la mendicidad, e) cualquier otra actividad ilícita o f) la prostitución o la participación en espectáculos o materiales pornográficos será condenada a pena de 2 a 9 años de prisión. Asimismo, si un menor es objeto de trata para la extracción de un órgano corporal, el autor del delito puede ser sancionado con pena de 4 a 12 años de prisión.

109. Si se recurre a violencia o amenazas, incluido el secuestro, engaño o fraude, abuso de poder o influencia, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra o para cometer uno de los delitos mencionados en el párrafo anterior, la pena de prisión se aumenta en un grado.

110. La Ley N° VII de 2010 introdujo en el Código Penal dos artículos sobre la inducción inadecuada del consentimiento a la adopción de un menor de edad con fines de explotación y trabajo infantil. En ambos casos, toda persona que cometa ese delito podrá ser condenada a prisión de 2 a 9 años si la adopción o el trabajo infantil tiene como objetivo a) la producción de bienes o la prestación de servicios o b) la esclavitud o prácticas semejantes a la esclavitud o c) la servidumbre o d) actividades asociadas con la mendicidad o e) cualquier otra actividad ilícita o f) la prostitución o espectáculos o materiales pornográficos, y de 4 a 12 años de prisión si la adopción o el trabajo infantil se destinan a la extracción de un órgano. La pena de prisión se aumenta en un grado cuando dicho delito se comete mediante violencia o amenazas, incluido el secuestro, engaño o fraude, abuso de poder o influencia o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra persona.

111. El artículo 3 b) 1) del Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil prohíbe la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución. De acuerdo con este principio, el artículo 204 1) del Código Penal establece que todo aquel que, para gratificar la concupiscencia de otra persona, induce a un menor de edad a practicar la prostitución o induce su corrupción o alienta o facilita su prostitución, podrá ser sancionado con pena de prisión. Si la víctima es una persona que no ha cumplido todavía los 12 años de edad, la pena se agrava.

112. Una forma actual de esclavitud es la explotación de niños con fines pornográficos. De conformidad con el Convenio N° 182 de la Organización Internacional del Comercio

³¹ <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e12ee622.html>.

³² Children 2010 (National Statistics Office) <http://www.nso.gov.mt/statdoc/document_file.aspx?id=2703> consulta realizada el 16 de febrero de 2012.

(OIT), el Código Penal de Malta, en su artículo 208A 1), dispone que todo ciudadano o residente permanente de Malta, independientemente de que se encuentre en Malta o fuera del país, así como toda persona que se encuentre en Malta, que realice o permita que se realice una fotografía, filmación, grabación en vídeo o reproducción electrónica indecente de un menor de edad o distribuya o exhiba esa fotografía, filmación, grabación en vídeo o imagen electrónica indecente podrá ser condenado a pena de prisión de 12 meses a 5 años.

113. El delito de conocimiento carnal ilícito con violencia es un delito contra la libertad sexual de la persona. La Ley protege ampliamente a los niños que han sido víctimas de tales delitos. De hecho, cuando la víctima es un niño que no ha cumplido todavía los 12 años de edad, se plantea la presunción de derecho de que la relación carnal ilícita fue acompañada de violencia. El agravante persiste aun cuando el autor demuestre que no tenía conocimiento de la edad de la víctima. El delito se agrava cuando es cometido por un ascendiente o tutor de una persona que no ha llegado todavía a la mayoría de edad, o cuando se comete con un hermano, un ascendiente o descendiente natural u otras personas que están relacionadas mutuamente por consanguinidad de hasta el tercer grado³³.

114. Cuando un niño es retenido en condiciones de esclavitud sexual, el delito de corrupción se agrava también. Este delito se produce cuando el autor corrompe al menor con actos lascivos, que el menor se ve obligado a soportar y que no comprende, y a los que no puede ofrecer resistencia. Si la corrupción no es un hecho aislado, el niño es víctima de servidumbre sexual. No obstante, si los actos lascivos consisten en una relación carnal ilícita con violencia, permanece el delito de violación. Los menores que terminan en condiciones de esclavitud sexual pueden haber sido anteriormente objeto de trata, secuestro, adopción o venta por sus familiares. En este último caso, el delito se ve agravado. En situaciones de corrupción de menores, el agravante se produce cuando el autor es un ascendiente por consanguinidad o afinidad, el padre adoptivo, el tutor o cualquier otra persona a la que se haya confiado el cuidado del menor, aunque sea en forma temporal (art. 203 1) c) del Código Penal). El delito se ve también agravado cuando se utilizan amenazas, engaño o fraude.

4. Trabajo forzoso

115. El Gobierno de Malta ratificó el Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso el 4 de enero de 1965. El artículo 35 de la Constitución de Malta establece que "nadie podrá ser obligado a realizar trabajos forzosos". Además, enumera varias situaciones que no se consideran como trabajo forzoso. Son las siguientes:

- a) Todo trabajo que se requiera en el cumplimiento de una condena o una orden judicial;
- b) Todo trabajo que cualquier persona que se encuentre cumpliendo condena o detenida en cumplimiento de un mandato judicial, aunque no sea obligatorio según lo estipulado en la condena o la orden judicial, se considere razonablemente necesario para preservar la higiene o mantener limpio y ordenado el lugar en donde se encuentra detenida o, si está internada para recibir atención, tratamiento o educación o para su bienestar, sea razonablemente necesario con ese fin;
- c) Todo trabajo que un miembro de un cuerpo armado deba llevar a cabo en el desempeño de sus funciones como tal o, en el caso de una persona que tenga objeciones de conciencia respecto del servicio en una fuerza como la Armada, el Ejército o la Aviación, todo trabajo que la ley exija que esa persona realice en lugar del servicio militar;

³³ *Ibid.*, 150.

d) Todo trabajo necesario durante un período de emergencia pública o en caso de alguna otra situación de emergencia o desastre que ponga en peligro la vida o el bienestar de la comunidad.

116. En virtud de la disposición contenida en la Ley de empleo y relaciones laborales³⁴, el legislador prohíbe las situaciones en que se obliga a una persona a trabajar sin ninguna remuneración a cambio. De conformidad con este principio, el artículo 11 1) de la Ley exige el pago al empleado de todos los salarios que le corresponden, sin deducción ninguna. El pago debe asignarse al empleado directamente, y el empleador no puede indicar al trabajador cómo emplear esos salarios. Por sus repercusiones y efectos es muy importante el artículo 18, que establece que la remuneración puede ser en especie, en forma de alimentos, alojamiento u otros subsidios o privilegios concedidos al empleado, siempre que dicho pago en especie sea adicional al salario mínimo pagadero. De esa manera, no se priva al trabajador de un pago considerable en efectivo. Asimismo, es contrario a la ley emplear a una persona sin pagarle el salario mínimo establecido por la ley³⁵.

117. El Reglamento sobre los jóvenes (empleo)³⁶ establece que los niños de menos de 15 años no pueden ser empleados mediante contrato ni de ninguna otra manera. Lo mismo cabe decir de los niños en edad de escolarización obligatoria, a no ser que dicho empleo esté cubierto por una exención emitida en virtud de la Ley de educación. Cuando los jóvenes de 15 a 18 años de edad están empleados, el Reglamento de protección de los jóvenes en el lugar de trabajo³⁷ exige que esas personas reciban la capacitación adecuada para el trabajo asignado y que se tengan en cuenta los peligros para la seguridad y la salud. Además, los niños no pueden ser empleados en ningún momento entre las 20.00 y las 6.00 horas, mientras que los adolescentes no pueden ser empleados entre las 10.00 y las 6.00 horas en el caso de planes de capacitación aprobados o de programas de aprendizaje o actividades educativas, culturales o deportivas. El Reglamento no se aplica a los hoteles o a los servicios de restauración, siempre que el trabajador joven pueda descansar no menos de 12 horas consecutivas en un período de 24 horas, y no menos de 2 días por semana, incluido el domingo. Por otro lado, el artículo 4 del Reglamento de 2004 establece que el horario de trabajo de los adolescentes no deberá ser superior a 8 horas diarias ni a 40 horas semanales, en las que se incluirán todo el tiempo de capacitación de los jóvenes que trabajan en un programa combinado de actividades teóricas o prácticas, capacitación o experiencia laboral en el trabajo.

Artículo 9

118. La Constitución prohíbe las detenciones y encarcelamientos arbitrarios. El artículo 34 establece lo siguiente:

1) Nadie podrá ser privado de su libertad personal, salvo en la medida en que lo autorice la ley en los casos siguientes:

a) Como consecuencia de su incapacidad de rebatir de una acusación de índole criminal;

b) En ejecución de una sentencia o mandato judicial, ya se haya dictado en Malta o fuera de Malta, en relación con un delito criminal por el cual se haya condenado al reo;

³⁴ Cap. 452 de la legislación de Malta.

³⁵ Orden sobre el salario mínimo nacional, Legislación subsidiaria 452.71.

³⁶ Aviso Legal 440 de 2003 modificado por el Aviso Legal 427 de 2007, S.L. 452.92.

³⁷ Aviso Legal 91 de 2000 modificado por el Aviso Legal 283 de 2004, S.L. 424.01.

c) En ejecución de un auto judicial por el cual se castigue a alguien en concepto de desacato al tribunal o en ejecución de un auto de cualquier otro tribunal o juzgado o de una orden de la Cámara de Representantes que imponga el castigo por desacato a la Cámara o a uno de sus miembros o por infracción de sus inmunidades;

d) En ejecución del auto de algún tribunal dictado para garantizar el cumplimiento de una obligación impuesta por la ley al interesado;

e) Para llevar a una persona ante un tribunal en ejecución de un auto judicial o ante la Cámara de Representantes en ejecución de la orden de esta;

f) Cuando exista sospecha fundada de que el detenido ha cometido o iba a cometer un delito;

g) Cuando se trate de alguien que no haya cumplido los 18 años de edad, con objeto de proveer a su educación o bienestar;

h) Con el fin de impedir la propagación de una enfermedad infecciosa o contagiosa;

i) Tratándose de una persona que sea demente o de la que se sospecha con fundamento que lo es, o adicta a las drogas o al alcohol o vagabunda, con el fin de cuidarla o tratarla o de proteger a la colectividad; o

j) Con el fin de impedir la entrada ilegal del detenido en Malta o para llevar a efecto su expulsión, extradición u otro traslado lícito desde Malta o para adoptar actuaciones en relación con estos trámites o con objeto de custodiar al interesado mientras es conducido a través del territorio maltés en el transcurso de su extradición o traslado de un país a otro en calidad de condenado.

119. Tanto la Constitución (art. 34 2)) como el Código Penal (art. 355AC 1)) establecen que toda persona que haya sido detenida o encarcelada debe ser informada, en el momento de su arresto o encarcelamiento, de las razones del mismo. Dicha información debe ofrecerse en un idioma que comprenda el interesado. En el caso en que el detenido necesite un intérprete y no haya uno disponible, deberá nombrarse un intérprete lo antes posible.

120. Asimismo, la Constitución estipula que, cuando una persona es detenida o encarcelada con el objeto de ser llevada ante un tribunal en cumplimiento de un auto judicial o por haber sospecha fundada de que ha cometido o se disponía a cometer un delito de orden penal, antes de transcurridas 48 horas deberá comparecer ante un tribunal o ser puesta en libertad incondicionalmente o en condiciones razonables, en particular las que sean razonablemente necesarias para garantizar su posterior comparecencia en juicio o en las actuaciones previas al juicio. Lo mismo se declara en el Código Penal en el artículo 355AJ 3). Asimismo, el artículo 355AL 2) establece que antes de que el funcionario jefe ordene la libertad de una persona, informará al funcionario investigador y a un magistrado, y la decisión final será tomada por el magistrado.

121. Si la policía detiene a alguien del que tenía sospechas objetivas razonables pero, después de transcurridas diez horas, concluye que el detenido es inocente, la sospecha inicial no significa que se pueda mantener al sospechoso en el cuartel de la policía durante 48 horas. Por ello, si durante esas 48 horas, desaparece esa sospecha razonable, la policía tiene el deber de poner en libertad al detenido (y este tiene derecho a quedar en libertad) aun cuando no hayan transcurrido todavía las 48 horas.

122. Ninguna norma contenida en una ley y ningún acto realizado en virtud de esta se considerarán incompatibles con el presente artículo o en contravención del mismo en la medida en que la ley en cuestión autorice, durante el período de emergencia pública, la adopción de medidas razonablemente adecuadas para resolver la situación planteada durante el período de referencia.

123. Cuando una persona es detenida, con o sin orden judicial, el oficial que efectúa la detención o su superior deberán notificar a un magistrado, lo antes posible y a no ser que la persona detenida haya sido puesta en libertad antes de transcurridas seis horas desde la detención, todos los detalles acerca del tiempo y lugar de retención de la persona en cuestión. El magistrado puede ordenar que la persona detenida sea trasladada a otro lugar, con efecto inmediato.

1. Fianza

124. Como ya se ha indicado, cuando se ordena la liberación de una persona, esta debe ser puesta en libertad de forma incondicional, a no ser que, durante el período de reclusión, el funcionario jefe considere que es necesario investigar más a fondo la cuestión que dio lugar a la detención o que se emprendan acciones judiciales pertinentes contra la persona en cuestión. La persona que va a quedar en libertad deberá firmar una declaración escrita en la que manifieste que no tratará ni hará nada para abandonar Malta sin autorización del funcionario investigador bajo cuya autoridad se llevó a cabo la detención, que se presentará en ese cuartel de policía con la periodicidad que indique el funcionario jefe y/o comparecerá ante el Tribunal de Magistrados en el momento y lugar que pueda indicar el tribunal. Cuando no están ya vigentes las condiciones establecidas en la fianza, el funcionario jefe puede notificar por escrito a esa persona que ya no son aplicables las condiciones que se le habían impuesto anteriormente.

125. Cuando una persona puesta en libertad no cumple algunas de las condiciones que se le han impuesto, será culpable de una infracción. Asimismo, un funcionario de policía puede detener sin orden judicial a una persona que haya sido puesta en libertad bajo fianza con la condición de no intentar ni hacer nada para abandonar Malta sin la debida autorización o de presentarse en el cuartel de policía o comparecer ante el Tribunal de Magistrados, si intenta o hace algo por abandonar Malta sin la debida autorización o no se presenta en el cuartel de policía o ante el Tribunal de Magistrados en el momento indicado.

126. Nuestro Código Penal, en virtud del artículo 355AL 8), estipula que "las condiciones de la fianza no estarán vigentes durante más de tres meses desde la fecha en que se impusieron a no ser que sean renovadas por un magistrado por períodos adicionales de tres meses previa solicitud de la policía, a la que se notificará la respuesta relativa a la persona a la que se impusieron las condiciones". Por otro lado, en cualquier momento mientras estén vigentes las condiciones de la fianza, la persona a la se impusieron dichas condiciones puede, mediante una solicitud de respuesta presentada a la policía, solicitar a un magistrado que se anulen o modifiquen esas condiciones.

127. El artículo 575 1) establece una excepción de la norma sobre la fianza. Solo se puede conceder una fianza a una persona acusada de un delito contra la seguridad del Estado o de un delito que puede ser sancionado con cadena perpetua después de tener en cuenta todas las circunstancias del caso, la naturaleza y gravedad del delito, la personalidad, antecedentes, asociaciones y vínculos comunitarios del acusado así como cualquier otra cuestión que parezca pertinente, y si se considera que, en caso de que sea puesto en libertad bajo fianza, no hay peligro de que el acusado:

- a) No comparezca cuando reciba una orden de la autoridad especificada en la caución;
- b) Se oculte o abandone Malta;
- c) No observe alguna de las condiciones que el tribunal considere oportuno imponer al conceder la fianza;
- d) Interfiera o trate de interferir con los testigos o perturbar de alguna otra manera el curso de la justicia en relación consigo mismo o con cualquier otra persona; o

- e) Cometa algún otro delito.

2. Indemnización

128. El artículo 409A del Código Penal de Malta ofrece al detenido la oportunidad de presentar una solicitud ante el Tribunal de Magistrados (investigación penal) si considera que ha sido detenido ilegalmente por decisión de la policía o cualquier otra autoridad pública. Dicha solicitud debe escucharse con urgencia y notificarse el mismo día de la solicitud, junto con la fecha de la audiencia, al demandante y al Comisionado de Policía o cualquier otra autoridad pública. El Comisionado de Policía o la autoridad pública pueden presentar una réplica no más tarde del día de la audiencia.

129. Por otro lado, cuando una persona detenida por un delito del que se le acusa o por el que se presenta ante el Tribunal de Magistrados alega que la prolongación de su detención no está en conformidad con la Ley puede solicitar en cualquier momento al tribunal su puesta en libertad. Esta solicitud debe escucharse con urgencia y notificarse el mismo día de la solicitud, junto con la fecha de la audiencia, al demandante y al Comisionado de Policía o/y al Fiscal General.

130. El artículo 34 4) de la Constitución de Malta dispone que "quien haya sido ilegalmente detenido o encarcelado por otro tendrá derecho a exigirle resarcimiento".

3. Conclusiones del silencio

131. Toda persona acusada tiene derecho a guardar silencio, lo que no debe interpretarse de ninguna manera como una admisión implícita de culpabilidad. Así ocurre tanto durante el interrogatorio como en el juicio. De la misma manera, cuando una persona no responde a la pregunta de si se declara "culpable" o "no culpable" de los cargos, el Tribunal debe suponer que el silencio equivale a una respuesta de "no culpable".

132. Nuestro Código Penal estipula que toda persona tiene derecho a solicitar asistencia letrada durante una hora antes del interrogatorio (pero no durante este). Si el sospechoso hace uso de este derecho, la decisión se hará constar por escrito en un registro que se mantendrá con ese fin.

133. En el Código Penal de 2002 se introdujo el concepto de "conclusiones del silencio". En otras palabras, una persona acusada no puede utilizar razonablemente ante el Tribunal hechos que no haya mencionado durante el interrogatorio. Si lo hace, puede extraerse una conclusión contra el acusado, que constituirá un elemento circunstancial de culpabilidad contra él. En otras palabras, si un sospechoso permanece en silencio durante el interrogatorio pero luego en el juicio declara como testigo y menciona algún hecho con el fin de demostrar su inocencia, el juez o el jurado podrán extraer conclusiones contra el acusado, pero solo si la persona acusada decidió solicitar asistencia letrada. Un sospechoso que se niegue a ser interrogado o, más bien, que opte por permanecer en silencio corre el riesgo de que se extraigan conclusiones contra él si posteriormente declara como testigo.

4. Prisiones

134. Los hombres y las mujeres permanecen separados, lo mismo que los jóvenes y los adultos. En cambio, no se separa a los presos convictos y no convictos. La norma 12 del Reglamento de Prisiones (Aviso Legal 118 de 1995) estipula que, en la medida de lo posible, haya dos divisiones o secciones diferentes para los hombres y mujeres, convictos y no convictos, condenados a prisión y otros presos, presos de menos de 21 y de más de 21 años de edad, presos condenados a prisión por primera vez y reincidentes y presos de corta y de larga duración.

135. Al 31 de diciembre de 2011 en el Centro Penitenciario de Corradino (CCF) había 562 hombres y 54 mujeres. Por lo que se refiere a la población juvenil, había un total de 14: 10 hombres y 4 mujeres (cuadro 11).

136. Los presos convictos pueden enviar y recibir una carta una vez a la semana y pueden recibir una visita semanal. La duración de la visita es de 45 minutos. En cambio, los presos no convictos pueden enviar y recibir un número razonable de cartas y recibir visitas de 15 minutos, cualquier día de la semana o distribuidos en varios días, con la debida autorización. Asimismo, en el caso de los presos no convictos, a diferencia de los convictos, los visitantes necesitan la autorización del Tribunal.

137. Los presos convictos y no convictos pueden ser visitados en el CCF. En ocasiones familiares especiales, puede autorizarse a los reclusos a visitar a sus familiares en su domicilio. En circunstancias normales, los presos pueden acogerse a un permiso de salida de la cárcel dos veces por año, con ocasión de alguna celebración familiar. Esta licencia puede otorgarse una vez al mes o una vez cada tres meses por motivos humanitarios, en circunstancias concretas especificadas en el Reglamento de Prisiones³⁸. Estas normas se aplican tanto a los presos adultos como a los de menos de 21 años de edad. Puede haber algunas restricciones o requisitos para los presos no convictos.

138. Los presos tienen acceso a la televisión y la radio. Además de las visitas, los presos pueden mantener contacto con familiares y/o amigos por teléfono y/o carta.

139. Los presos de menos de 21 años de edad permanecen separados del resto de la población penitenciaria. La Dependencia de Servicios de Rehabilitación para Menores Infractores tiene un régimen diferente. Cuenta en su plantilla con personal docente. El régimen de visitas de familiares y amigos depende de que se trate de presos convictos o no convictos.

140. Se alienta a los presos convictos con problemas de drogadicción interesados en rehabilitarse a que asistan a programas organizados con ese fin. Estos se llevan a cabo fuera de los locales del CCF. Los presos pueden asistir también a cursos de la Universidad o a otras actividades educativas o de formación profesional. Se ofrecen cursos internos de educación y formación profesional. En los tres últimos meses de la condena, los presos pueden tener un empleo, recibir instrucción o capacitación o alguna otra forma de ayuda para realizar la transición a la vida fuera del centro penitenciario.

141. Entre el 6 y el 9 de febrero de 2012, un grupo de unos 10 reclusos participó en un proyecto de London Shakespeare Workout (LSW), compañía de prestigio internacional. Era una representación teatral titulada "Cuando escuches mi voz". Se representó en St. James Cavalier, y sirvió de base a una película documental de distribución mundial. Como indicó Joanne Battistino, directora de operaciones en el CCF, el reparto era internacional, ya que la Dependencia cuenta actualmente con personas de Malta, el Reino Unido, Etiopía, los Estados Unidos, Estonia, España y Portugal. La Sra. Battistino explicó que el proyecto se llevó a cabo después de la celebración de un taller de LSW en dicha Dependencia el pasado mes de septiembre, en el contexto de la Conferencia anual de la Asociación europea de educación en prisiones.

5. Libertad condicional³⁹

142. En 1994, Alexander Paterson, Comisionado de Prisiones de Inglaterra y Malta, presentó al Gobierno de Malta un informe en el que proponía dos innovaciones

³⁸ S.L. 260 de 2003.

³⁹ Ministry of Justice and Home Affairs: Probation Order
<<http://www.mjha.gov.mt/page.aspx?pageid=136>> consulta realizada el 17 de febrero de 2012.

importantes: la introducción del régimen la libertad condicional y la creación de los servicios correspondientes. Esta última propuesta no se adoptó hasta 1955. Más adelante, en 1957, se promulgó la Ley de libertad condicional de los infractores. La primera orden de libertad condicional se dictó en agosto de 1961.

143. Posteriormente, se estableció el "Centru Hidma Socjali" y su director fue nombrado Jefe del sistema de libertad condicional. En 1993, la Universidad de Malta, tras recibir una propuesta del sistema judicial y el Gobierno de Malta, comenzó a ofrecer un diploma superior para capacitar a futuros funcionarios del servicio de libertad condicional. El primer curso permitió preparar a cuatro funcionarios. En 1994 se estableció la organización no gubernamental Probation Services Action Team (PSAT). Esta fue quizá la primera de una serie de medidas orientadas a corregir la falta de personal especializado en el ámbito de la libertad condicional. El PSAT tenía como objetivo convertirse en la piedra angular de los futuros servicios de libertad condicional, que se establecieron en el Departamento de Servicios Correccionales. De hecho, en 1996 un grupo de funcionarios del servicio de libertad condicional debidamente calificados intervinieron como trabajadores sociales dentro de este Departamento. En 1998, se tomó una medida importante, consistente en la inserción de un nuevo mecanismo de servicios de libertad condicional dentro de la estructura gubernamental, que una vez más se incorporó en el Departamento de Servicios Correccionales. Dicho mecanismo cuenta con los siguientes puestos: un jefe de los servicios, funcionarios superiores, funcionarios y funcionarios en formación. En 2002, la Ley de 1957 se revisó y recibió el nombre de Ley de libertad condicional. Esta nueva Ley representó la introducción de sanciones, como la orden de servicio comunitario y la orden de combinación de libertad condicional y servicio comunitario, mientras que en la fase previa a la sentencia se incluyó por primera vez la orden provisional de supervisión. El objetivo constante de los servicios de libertad condicional es el fortalecimiento y la ampliación de esos servicios en nuestro país.

144. Los Servicios de libertad condicional son un componente clave del sistema de justicia penal y colaboran estrechamente con el sistema judicial, la policía y varios organismos y departamentos gubernamentales, entre otros. Tienen en cuenta las necesidades de los infractores adultos y menores cuando así lo solicita un tribunal en la fase previa a la sentencia mediante el informe previo⁴⁰, el informe de investigación social⁴¹ y la orden provisional de supervisión⁴². En la fase posterior a la sentencia los servicios ofrecidos incluyen la orden de servicio comunitario⁴³, la orden de combinación de libertad

⁴⁰ El funcionario encargado de la libertad condicional prepara este informe, exigido por el Tribunal, una vez comprobada la culpabilidad y antes de que el tribunal tome su decisión. El informe contiene amplia información acerca de los antecedentes y situación del infractor, así como recomendaciones al tribunal con respecto a la sentencia.

⁴¹ El funcionario de los servicios de libertad condicional compila este informe en la forma solicitada por el Tribunal en cualquier fase de la acción penal antes de que se determine la culpabilidad. Dicho informe es de contenido semejante al informe previo a la sentencia pero no contiene ninguna recomendación al tribunal con respecto a la sentencia.

⁴² De conformidad con la nueva Ley de libertad condicional, el tribunal puede considerar necesario dictar una orden provisional de supervisión del acusado por un funcionario de los servicios de libertad provisional en cualquier momento de la acción penal.

⁴³ En virtud de esta nueva sanción, el infractor debe realizar entre 40 y 240 horas de trabajo no remunerado. La indemnización de la comunidad se considera prioritaria al utilizar una orden de servicio comunitario cuando el infractor trata de compensar el daño que ha infligido a la sociedad en general. Se prevé que el infractor realice el número de horas estipulado por el tribunal en su tiempo libre y se adoptan medidas para evitar que ese trabajo sustituya al trabajo remunerado.

condicional y servicio comunitario,⁴⁴ la orden de libertad condicional⁴⁵ y la orden de supervisión de la condena condicional.⁴⁶

145. La base de datos de Servicios de libertad condicional revela que los infractores entran en contacto con dichos Servicios en relación con diferentes tipos de delitos, entre ellos los siguientes: posesión de drogas; delitos contra las personas, como la agresión física y la violencia doméstica; delitos sexuales, como la prostitución y la corrupción de menores; delitos contra la propiedad, como la entrada ilegal, el robo de coches y la destrucción de bienes públicos y privados; la falsificación de documentos, el lavado de dinero y el fraude y la delincuencia en Internet. Los Servicios están a disposición tanto de los hombres como de las mujeres, pero hasta ahora la inmensa mayoría de los usuarios de los servicios han sido varones. En sus contactos con los infractores, los funcionarios del servicio de libertad condicional pueden mantener también contacto con las familias, los empleadores y los grupos más allegados a los infractores.

146. En 2009, el número medio de infractores/clientes fue de 657.

6. Detención de solicitantes de asilo

147. En la Ley de refugiados se ofrece la siguiente definición de "refugiado": "Nacional de un tercer país que, debido a temores bien fundados de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de ese país, o que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su anterior residencia habitual, como consecuencia de tales acontecimientos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él". Asimismo por "estatuto de refugiado" se entiende "el reconocimiento de un nacional de un tercer país o un apátrida como refugiado".

148. Un inmigrante en situación irregular puede solicitar el estatuto de refugiado a fin de recibir la protección ofrecida en esos casos. Antes de transcurridos 15 días desde que el solicitante de asilo presentó su solicitud, se le informa acerca de sus beneficios y obligaciones (es decir, medidas previstas en Malta para los solicitantes de asilo). Asimismo, el Oficial Principal de Inmigración facilita al inmigrante información acerca de las organizaciones o grupos de personas que ofrecen asistencia jurídica específica y organizaciones que podrían informarle acerca de sus derechos, en particular sobre la atención de salud, la escolarización y la educación de los menores de edad. Se ofrece alojamiento durante el examen de la solicitud del estatuto de refugiado, bien en centros de alojamiento que garantizan condiciones de vida adecuadas u otros locales adoptados para recibir a los solicitantes.

149. Un solicitante de asilo que se considera perjudicado por una decisión tomada contra él acerca de su solicitud o algunas otras condiciones de recepción, tiene derecho a recurrir ante la Junta de Apelaciones en materia de Inmigración⁴⁷. A finales de 2011, había 645

⁴⁴ Se trata de una fusión de esos dos tipos de orden. El elemento relacionado con la libertad provisional puede tener una duración de 1 a 3 años, mientras que el relativo al servicio comunitario puede durar entre 40 y 1.000 horas.

⁴⁵ La orden de libertad condicional es dictada por el tribunal y su vigencia puede ser de 1 a 3 años. Se trata de una alternativa de base comunitaria cuyo objetivo es contribuir a la rehabilitación del infractor, proteger a la sociedad y evitar la reincidencia.

⁴⁶ Se trata de una sentencia de prisión que se suspende por un mínimo de dos y un máximo de cuatro años. Este tribunal puede dictar una orden de supervisión aplicable a ese período. El funcionario de los servicios de libertad condicional que supervisa una sentencia condicional hace más hincapié en el aspecto de control.

⁴⁷ Acogida de solicitantes de asilo (criterios mínimos), Legislación subsidiaria 420.06.

solicitudes de apelación (cuadro 12). Existe también una Junta de Apelación de los Refugiados que entiende de los recursos de apelación interpuestos contra las recomendaciones de la Comisión y toma decisiones al respecto. Durante el examen del recurso, la Junta adopta medidas para poder contar con los servicios de un intérprete. La sesión se celebra a puerta cerrada. Además, el demandante tiene derecho a ayuda letrada gratuita. La decisión de la Junta es definitiva e irrefutable, y no puede ser impugnada ni puede recurrirse ante ningún tribunal. Una persona que haya solicitado asilo puede presentar al Comisionado para los Refugiados una solicitud ulterior después de la decisión final, pero dicha solicitud será examinada únicamente tras la presentación de nuevos elementos o comprobaciones.

7. Orden de expulsión y deportación

150. La expedición de una orden de detención no está prevista en la Ley de inmigración: es consecuencia automática de la orden de expulsión, de la denegación de la admisión en el territorio nacional o de la expedición de una orden de expulsión. El artículo 14 de la Ley de inmigración⁴⁸ establece que "... solo podrá dictarse una orden de expulsión después de una solicitud en ese sentido del Oficial Principal de Inmigración ". La orden se expide una vez que se ha comprobado que dicha persona puede ser expulsada porque se ha introducido o está presente en Malta sin el permiso necesario de las autoridades de inmigración. Cuando se efectúa una orden de expulsión, la persona contra la cual se dicta debe permanecer en reclusión hasta que es alejada de Malta. En tal caso, la persona es devuelta a su país de origen o a cualquier otro Estado donde tenga permiso de entrada⁴⁹.

151. La norma 1) del Reglamento sobre el estatuto de residentes de larga duración (nacionales de terceros países)⁵⁰ establece los motivos por los que un nacional de un tercer país (que haya adquirido el estatuto de residente de larga duración en Malta) puede ser expulsado de Malta mediante una orden de expulsión. El Oficial Principal de Inmigración emitirá dicha orden cuando el nacional de un tercer país constituya una amenaza real y suficientemente grave para el orden público o la seguridad pública de Malta⁵¹. Las consideraciones económicas o las enfermedades contraídas después de la expedición del primer permiso de residencia no pueden considerarse como motivos justificables de expulsión. Al dictar dicha orden se tienen en cuenta los siguientes factores:

- a) La duración de la residencia en el territorio;
- b) La edad de la persona implicada;
- c) Las consecuencias para él y los miembros de su familia;
- d) Los vínculos con Malta como país de residencia o la ausencia de vínculos con el país de origen.

152. El artículo 25A 5) de la Ley de inmigración prevé la posibilidad de recurrir la decisión de dictar una orden de expulsión. Dicho recurso se presenta ante la Junta de Apelaciones en materia de Inmigración antes de transcurridos tres días desde la fecha de expedición de la orden de expulsión. Si se revoca esta orden, el inmigrante queda automáticamente en libertad. Asimismo, el artículo 25A 9) de la misma Ley establece que la Junta tiene autoridad para conceder la libertad provisional a los inmigrantes afectados,

⁴⁸ Cap. 217 de la legislación de Malta.

⁴⁹ Detention in Europe: Malta http://detention-in-europe.org/index.php?option=com_content&view=article&id=150&Itemid=183 consulta realizada el 6 de febrero de 2012.

⁵⁰ S.L. 217.05.

⁵¹ Esos mismos motivos se encuentran en el art. 11 de la Ley de refugiados, cap. 420 de la legislación de Malta.

incluso tras una solicitud verbal, en espera de la determinación definitiva de su solicitud de asilo o de su deportación/expulsión de Malta, según el caso. Dicha liberación se ofrece en las condiciones que la Junta considere adecuadas. Asimismo, la puesta en libertad se otorgará únicamente cuando la Junta opine que no hay razones que justifiquen la duración de la reclusión, habida cuenta de las circunstancias del caso, o cuando no haya perspectiva verosímil de deportación en un tiempo razonable. Por otro lado, la Junta puede negar la puesta en libertad cuando las personas afectadas se hayan negado a cooperar con los intentos legítimos de alejarlos del territorio nacional. Las personas puestas en libertad en virtud de este recurso deben presentarse al menos una vez por semana ante las autoridades de inmigración. Además, en determinadas circunstancias, pueden ser recluidas de nuevo, en espera de su expulsión de Malta⁵². A finales de 2011 había 650 inmigrantes en centros de reclusión (cuadro 13).

153. En varios casos el Tribunal Constitucional de Malta justificó la reclusión de los inmigrantes por motivos de seguridad nacional. El Tribunal destacó la necesidad de "evitar una avalancha de personas en situación irregular en constante movimiento en Malta"⁵³. Se consideró que la reclusión era necesaria para la estabilidad del país.

154. Los nacionales de terceros países en situación irregular pueden impugnar también la legalidad de su detención en virtud del artículo 34 de la Constitución de Malta y el artículo 5 del primer apéndice de la Ley del Convenio Europeo. Asimismo, el artículo 1 del Protocolo N° 7 reconoce al extranjero que reside legalmente en el territorio de Malta el derecho a alegar razones contra su expulsión, a que se examine su caso y a estar representado ante la autoridad competente. No obstante, puede decretarse la expulsión de un extranjero antes de reconocerle dichos derechos cuando la expulsión es necesaria por razones de orden público o de seguridad nacional.

155. El artículo 23 de la Ley de inmigración hace referencia a la Directiva 2001/40/CE relativa al reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de expulsión de nacionales de terceros países. En virtud de ello, el Oficial Principal de Inmigración reconoce una decisión de expulsión de otro Estado Miembro y adopta las medidas necesarias para cumplir esas decisiones.

Artículo 10

1. Derechos de las personas detenidas: derechos de *habeas corpus*

156. La persona detenida tiene derecho a solicitar que se informe a un familiar o amigo acerca de su detención y su paradero. Esta información debe enviarse a los familiares o amigos sin dilaciones indebidas [a no ser que quepa sospechar razonablemente que dicho familiar o amigo está implicado en el delito objeto de investigación]. Asimismo, en el registro de detención se anotará el día y la hora en que se informó a la persona detenida acerca de su derecho, independientemente de que opte por acogerse a él o no, y, si la persona detenida decide hacer uso de ese derecho, los detalles del familiar o amigo a quien se haya informado acerca de la detención y paradero del detenido, junto con el día y la hora en que se facilita la información. Por otro lado, si no se informó a dicho familiar o amigo, deberán registrarse las razones de ello. La persona detenida o encarcelada deberá firmar el registro y, si se negara a ello, deberá hacerse constar en él.

⁵² Detention in Europe: Malta http://detention-in-europe.org/index.php?option=com_content&view=article&id=150&Itemid=183 consulta realizada el 6 de febrero de 2012.

⁵³ *Essa Maneh et c. Kummissarju tal-Pulizija et* (Sala Primera del Tribunal Civil (jurisdicción constitucional)), 16 de diciembre de 2009; *Mabrouk Mourad c. Ministru Ghall-Gustizzja u Affarijiet Interni et* (Sala Primera del Tribunal Civil (jurisdicción constitucional)), 4 de febrero de 2009.

157. Cuando el funcionario investigador considere conveniente retrasar la información al familiar o amigo, debe obtener aprobación del Magistrado. Para ello, presentará una solicitud en la que se acredite que hay motivos razonables para sospechar que la facilitación de dicha información puede redundar en perjuicio de la investigación.

158. La persona detenida puede consultar a un asesor médico elegido por él, si así lo desea.

159. Asimismo, una persona detenida o bajo custodia en el cuartel de policía u otro lugar autorizado de detención tiene derecho a consultar, lo antes posible, en forma privada a un abogado o procurador, en persona o por teléfono, durante no más de una hora. Esta solicitud se registra junto con el momento en que se realizó. Por otro lado, el superintendente o una persona de rango superior puede aplazar la petición. Si el derecho a asistencia letrada se autoriza posteriormente, dicha autorización debe formularse por escrito, y si se hace en forma oral deberá confirmarse por escrito lo antes posible. Cuando la persona detenida opte por no recabar asistencia letrada, el funcionario investigador registrará ese hecho por escrito en presencia de dos testigos, después de lo cual podrá procederse al interrogatorio de forma inmediata.

160. Las razones del aplazamiento están especificadas en el artículo 355AT 5) del Código Penal; la autorización podrá aplazarse si:

a) Dará lugar a una injerencia en las pruebas relacionadas con un delito grave que autoriza la privación de libertad, o un daño a dichas pruebas, o a una injerencia o un daño físico a otras personas;

b) Dará lugar a que se alerte a otras personas sospechosas de haber cometido ese delito, pero que aún no han sido detenidas;

c) Obstaculizará la recuperación de cualquier bien obtenido como resultado del delito; o

d) En el caso de una persona detenida por un delito de tráfico de drogas, soborno o lavado de dinero, obstaculizará la recuperación del valor de los beneficios obtenidos de ese delito por la persona en cuestión.

161. El aplazamiento mencionado en el apartado 3) no deberá ser nunca superior a 36 horas a partir del momento de la detención. Cuando se autorice el aplazamiento de la consulta a un abogado, la policía podrá proceder inmediatamente a interrogar a la persona detenida.

162. El derecho a recabar asistencia letrada entró en vigor en 2010. Conviene señalar dos fallos importantes, relacionadas con las causas *Il-Pulizija (La Policía) c. Alvin Privitera* (11 de abril de 2011) e *Il-Pulizija c. Mark Lombardi* (12 de abril de 2011). En ambas se pedía al Tribunal Constitucional que suprimiera las declaraciones formuladas por personas detenidas e interrogadas por la policía, ya que no se reconocía a esas personas el derecho a solicitar asistencia letrada antes de realizar su declaración. En ambos casos el Tribunal Constitucional consideró que el hecho de que no se reconociera a las personas detenidas el derecho a solicitar asistencia letrada constituía una grave infracción del derecho a un juicio justo proclamado en nuestra Constitución.

2. Tribunal de menores

163. El Tribunal de menores establecido en virtud de la Ley del Tribunal de menores⁵⁴, creado en 1980, es considerado por la legislación como un Tribunal de Magistrados. En ese tribunal, un magistrado normalmente actúa solo, pero cuando el tribunal se constituye como

⁵⁴ Ley del Tribunal de menores, cap. 287 de la legislación de Malta.

Tribunal de menores el magistrado cuenta con dos asistentes, uno de los cuales debe ser una mujer⁵⁵. El Tribunal de menores entiende de los casos presentados contra personas de menos de 16 años de edad⁵⁶. Conoce también de las apelaciones contra las órdenes de internamiento dictadas por el ministro responsable del bienestar social en virtud de la Ley sobre los niños y adolescentes (internamiento)⁵⁷. El Tribunal de menores celebra sesiones tanto en Malta como en Gozo⁵⁸. De hecho, el Código Penal, en virtud del artículo 28C 3) b), estipula que "se considerará que el Tribunal de menores es un Tribunal de Magistrados (Malta) o un Tribunal de Magistrados (Gozo), según el caso".

164. Las sesiones se celebran fuera de Valleta, a saber, en Santa Venera. Los tribunales entienden de los cargos formulados contra menores de 16 años, se ocupan de otras acciones relacionadas con ellos y pueden dictar también órdenes de internamiento para ellos. Dado el carácter confidencial de dichas sesiones, la participación está limitada a las personas mencionadas en la ley que establece el Tribunal⁵⁹.

165. El Tribunal de menores no tiene competencia para entender de los cargos, ni otras actuaciones conexas, contra un niño o joven de menos de 16 años de edad acusado conjuntamente con otra persona que no es un niño o un joven.

Artículo 11

166. Los contratos legalmente suscritos tienen fuerza de ley para las partes contratantes. Un contrato solo puede ser anulado por consentimiento mutuo de las partes o por motivos previstos en la ley. Los contratos deben ejecutarse de buena fe y son vinculantes no solo con respecto a su contenido sino también a las consecuencias resultantes de la obligación⁶⁰.

167. Se supone que la parte contratante estipula por sí mismo, sus herederos y las personas que reivindican a través de él o bajo su amparo. No obstante, una persona no puede, mediante un contrato suscrito en su propio nombre, obligar o estipular en nombre de alguien distinto de él. Los contratos solo son operativos entre las partes contratantes y no representan perjuicio ni ventaja para terceras partes. En otras palabras, el contrato suscrito no debe obligar a terceros ni tener repercusión en ellos.

168. El artículo 1125 del Código Civil establece que "cuando una persona no cumple la obligación asumida en un contrato, podrá ser declarada responsable de los daños resultantes". El Código estipula también que, en caso de incumplimiento de una obligación,

⁵⁵ Los dos asistentes son nombrados por el Presidente, a propuesta del Primer Ministro, entre las personas que, en opinión del Primer Ministro, tienen experiencia previa y están especialmente cualificados para resolver los problemas de los jóvenes.

⁵⁶ Art. 6 1) de la Ley del Tribunal de menores: "Cuando, en el curso de una acción judicial ante el Tribunal de menores, el tribunal considere que la persona acusada o a la que se refiere la acción judicial ha cumplido los 16 años de edad, dicho tribunal ... suspenderá el proceso y lo remitirá al Tribunal de Magistrados competente, que se ocupará del caso como si se hubiera iniciado ante dicho Tribunal de Magistrados ". Asimismo, el artículo 6 2) dispone lo siguiente: "Cuando, en el curso de una acción judicial ante el Tribunal de menores, el tribunal considere que la persona acusada o a la que se refiere la acción judicial no ha cumplido los 16 años de edad, dicho tribunal suspenderá el proceso y lo remitirá al Tribunal de menores, que procederá a la vista y determinación del caso como si se hubiera iniciado ante dicho Tribunal de menores".

⁵⁷ Ley sobre los niños y adolescentes (tutela), cap. 285 de la legislación de Malta.

⁵⁸ Il-Gudikatura Maltija: Court of Magistrates <<http://judiciarymalta.gov.mt/court-of-magistrates>> consulta realizada el 3 de febrero de 2012.

⁵⁹ The Law Courts: The Juvenile Court
<<http://www.mjha.gov.mt/page.aspx?pageid=145&printonly=true>> consulta realizada el 3 de febrero de 2012.

⁶⁰ Arts. 992 y 993 del Código Civil, cap. 16 de la legislación de Malta.

puede autorizarse al acreedor a que imponga él mismo el cumplimiento del contrato a expensas del deudor. Asimismo, además de poder solicitar daños, el acreedor puede exigir que se invaliden todos los actos realizados en infracción de la obligación y hacerlo él mismo a expensas del deudor.

169. Por otro lado, el deudor no puede ser declarado responsable de los daños si no pudo cumplir la obligación contractual en virtud de fuerzas insuperables.

Artículo 12

1. Libre circulación

170. La Constitución de Malta protege el derecho a circular libremente por Malta, el de residir en cualquier parte del país y el de salir o entrar en Malta⁶¹.

171. Puede incumplirse esta disposición cuando esa libertad puede redundar en contra de los intereses de la defensa, la seguridad pública, el orden público, la moral o el decoro públicos o la salud pública. La imposición de limitaciones a la libertad de circulación o de residencia de los funcionarios públicos en Malta no es incompatible con la libertad de circulación. Otra excepción es la imposición de limitaciones al derecho de cualquier persona a abandonar Malta si esas limitaciones resultan razonablemente necesarias para garantizar el cumplimiento de obligaciones impuestas a dicha persona por la ley.

172. En el contexto de la legislación de la Unión Europea, cabe señalar la Directiva 2004/38 en la que se establecen las condiciones en que los ciudadanos de la Unión y sus familias ejercen su derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, el derecho de residencia permanente y la limitación del derecho de circulación por razones de orden público o seguridad pública.

2. Pasaporte y visados

173. El Reglamento sobre los pasaportes⁶² estipula que deben expedirse pasaportes a:

- a) Los ciudadanos de Malta;
- b) Otros ciudadanos del Commonwealth;
- c) Otras personas que no son de nacionalidad maltesa y se encuentran en Malta sin un pasaporte válido.

174. La legislación de Malta establece una distinción entre las personas de más y de menos de 18 años de edad (esta última categoría se divide a su vez en varios niveles) y entre la renovación del pasaporte o la expedición de uno nuevo. En todas las circunstancias, la solicitud se realiza mediante el Formulario A, que debe ser entregado personalmente por el solicitante en la Oficina de Pasaportes junto con la tasa adecuada. En el caso de los solicitantes de más de 18 años de edad, los pasaportes son biométricos, es decir, contienen una imagen biométrica facial y las huellas dactilares. Por su parte, los solicitantes de menos de 18 años de edad deben entregar una foto de tamaño pasaporte y no se les toman las huellas dactilares. Los menores con edades comprendidas entre 16 y 18 años reciben un pasaporte válido para 10 años; la validez es de 5 años si tienen entre 10 y 15 años y solo 2 años si no han llegado todavía a los 10 años de edad. Lo mismo ocurre con la renovación del pasaporte.

⁶¹ Art. 44 1) de la Constitución de Malta.

⁶² S.L. 61.02.

175. Hay también pasaportes de refugiados, a los que se aplican las normas vigentes para los ciudadanos de Malta. No obstante, en este caso, el refugiado debe presentar el Certificado de refugiado expedido por la Comisión de Refugiados, que es la confirmación oficial de su estatuto de refugiado. Asimismo, si disponía de un documento de viaje, debe entregar su pasaporte anterior al solicitar el nuevo. Por otro lado, en el caso de los pasaportes de extranjeros, el interesado debe obtener el formulario de aplicación pertinente (Formulario H) de la Comisión de Inmigración (Dar l-Emigrant), que deberá ser cumplimentado por el Director de Dar l-Emigrant. Como en todos los tipos de pasaportes, la solicitud debe ser entregada en persona por el solicitante, aunque en este caso este debe presentar también el certificado humanitario/subsidiario expedido por la Comisión de Refugiados, que constituye la confirmación oficial de su situación.

176. En la actualidad hay 35 países, incluido Malta, designados como participantes en el Programa de exención de visados de los Estados Unidos. Este programa permite a los ciudadanos (de esos países) que tienen un pasaporte electrónico viajar a los Estados Unidos por un período de hasta 90 días sin solicitar un visado de turista o de negocios por adelantado. Los viajeros que tienen un pasaporte electrónico de Malta deben registrar previamente su visita a los Estados Unidos y recibir aprobación para viajar a ese país. El registro es sencillo y se realiza en línea a través del Electronic System for Travel Authorization (ESTA)⁶³, sistema automatizado que confirma que los visitantes reúnen los requisitos para desplazarse a los Estados Unidos de acuerdo con el Programa de exención de visados. La autorización del viaje es actualmente válida por dos años a no ser que el pasaporte caduque con anterioridad, en cuyo caso la fecha de vencimiento y la fecha de validez de la autorización de viaje será la misma.

3. Espacio Schengen

177. El espacio y la cooperación Schengen están basados en el Acuerdo de Schengen de 1985. El espacio Schengen representa un territorio en el que está garantizada la libertad de circulación de las personas. Los Estados signatarios del acuerdo han abolido todas las fronteras internas, sustituidas por una única frontera exterior. En ese espacio, se aplican normas y procedimientos comunes a los visados de breve duración, solicitudes de asilo y controles fronterizos. Simultáneamente, para garantizar la seguridad dentro del espacio Schengen, se han intensificado la cooperación y la coordinación entre los servicios policiales y las autoridades judiciales. La cooperación Schengen se ha incorporado en el marco jurídico de la UE mediante el Tratado de Amsterdam de 1997⁶⁴.

178. El 21 de diciembre de 2007, Malta se adhirió al Acuerdo de Schengen junto con otros ocho nuevos Estados miembros de la UE, con lo que Malta eliminó su control fronterizo por tierra y por mar. Ello tuvo lugar después de un proceso gradual de adaptación al régimen común de visados establecido por el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen.

179. Entre los preparativos de Malta se incluyó la construcción de un nuevo pabellón en el aeropuerto y el puerto marítimo de La Valleta para la llegada y salida de los pasajeros de Schengen. La policía introdujo una nueva dependencia, Sirene, encargada de la

⁶³ El ESTA no es un visado; de hecho, una persona de un país no participante en el programa de exención de visados no puede siquiera solicitar un ESTA. El sistema se limita a realizar un examen previo de los viajeros acogidos al programa a fin de autorizar su viaje a los Estados Unidos. La aprobación no garantiza el ingreso en los Estados Unidos, pero es un prerrequisito necesario para entrar en los Estados Unidos en un medio de transporte aéreo o marítimo.

⁶⁴ El espacio y la cooperación Schengen.
<http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_es.htm> consulta realizada el 3 de febrero de 2012.

administración del Sistema de información de Schengen, sistema de datos de tecnología de la información para toda la UE. Esta dependencia cuenta con 40 funcionarios de policía que mantienen un servicio continuado las 24 horas del día a lo largo de todo el año. Las misiones exteriores de Malta, que ahora comenzarán también a expedir visados en nombre de todos los Estados Miembros de la UE, tuvieron que modernizarse para cumplir las estrictas normas de la UE. Los nacionales de terceros países (extracomunitarios) que tienen la obligación de obtener visados pueden viajar con un único visado de Schengen en todo el espacio Schengen y ya no necesitan solicitar un visado nacional para los nuevos Estados miembros. Los nacionales de terceros países que poseen un permiso de residencia válido expedido por un Estado Miembro de Schengen pueden viajar con ese permiso de residencia válido y no necesitan solicitar un visado.

4. Refugiados

180. La Ley de refugiados prevé la concesión del estatuto de refugiado o de asilo a las personas que se ajustan a la definición de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, y el Gobierno colaboró con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. En la práctica, el Gobierno otorgó protección contra la devolución (es decir, la expulsión o repatriación de un refugiado de un Estado a otro donde corre peligro su vida o libertad), y otorgó el estatuto de refugiado y asilo. La ley prevé la concesión del estatuto de refugiado, acceso a servicios sociales gratuitos y la educación, permisos de residencia y documentos de viaje. Los permisos de trabajo para los refugiados son expedidos caso por caso. Las solicitudes de asilo son examinadas por una Comisión de Refugiados y una Junta de Apelaciones.

181. La Ley ofrece las debidas garantías procesales y protección a los refugiados que solicitan asilo. El Gobierno ofrece también protección humanitaria temporal a las personas que no pueden calificarse como refugiados o solicitantes de asilo. Desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre del mismo año, la Oficina del Comisionado de Refugiados recibió 1.862 solicitudes del estatuto de refugiado. Aceptó 72 de ellas, otorgó protección subsidiaria en 695 casos y ofreció protección humanitaria temporal en 129, mientras que rechazó 708; continúan pendientes 305 (cuadro 14).

182. La mayoría de los inmigrantes irregulares que vienen a Malta llegan en una embarcación. Se considera que Malta está algo alejada del resto de Europa, ya que se encuentra entre los países africanos y los europeos. El año pasado llegaron en embarcación 1.579 inmigrantes irregulares. El año con mayor número de inmigrantes irregulares llegados en embarcación fue 2008, con un total de 2.775 (cuadro 15). Varios Estados miembros de la UE así como países América ayudaron a Malta aceptando algunos inmigrantes irregulares y favorecieron su reincorporación en la sociedad ofreciéndoles empleo y alojamiento.

Artículo 13

183. Debe distinguirse entre extradición y deportación. La extradición se produce cuando una persona está físicamente presente en Malta (Estado requerido) y las autoridades de otro Estado (Estado requirente) quieren que sea extraditada a ese Estado porque se considera que ha cometido un delito en él. El artículo 43 de la Constitución de Malta establece que la extradición solo será permisible en cumplimiento de disposiciones establecidas en tratados y mediante resolución legal. En cambio, la deportación se produce cuando se comprueba que el deportado se encuentra en Malta ilegalmente y es devuelto a su país de nacionalidad.

184. El artículo 3 del Convenio Europeo prohíbe la expulsión de nacionales, sea en forma colectiva o individual. Asimismo, nadie podrá verse privado del derecho a entrar en el

territorio del Estado del cual sea nacional. El artículo 4 dispone lo siguiente: "Quedan prohibidas las expulsiones colectivas de extranjeros".

185. El Gobierno de Malta puede extraditar a un nacional maltés a otro país, pero no puede expulsar a un ciudadano maltés. El artículo 43 3) de la Constitución estipula que "ningún ciudadano de Malta será expulsado del país ...". El Tribunal no puede imponer la expulsión como castigo de un delito cometido por una persona.

Orden de expulsión y deportación

186. Véanse los párrafos 150 a 155.

Artículo 14

187. La Constitución establece un poder judicial independiente. La misión de los tribunales de justicia es "ofrecer tanto al público como al poder judicial servicios eficaces y eficientes, estructuras y conocimientos especializados para ayudar al público a comprender, seguir y recibir información sobre los procesos judiciales en los que puedan estar implicados y dotar al sistema judicial del personal, instrumentos y servicios necesarios a fin de que puedan impartir la justicia en la forma debida y con eficiencia".

1. Jueces

188. Los tribunales superiores están integrados por jueces. Estos son nombrados por el Presidente de Malta siguiendo las indicaciones del Primer Ministro. Hasta ahora no hay una junta o comité de nombramientos judiciales en Malta, y el Primer Ministro no está obligado a consultar a nadie antes de asesorar al Presidente. No obstante, en la práctica, consulta al Ministro de Justicia y a veces también al Gabinete. Por tradición, el Ministro de Justicia consulta al Presidente del Tribunal Supremo sobre los nombramientos propuestos para el cuerpo de jueces y el de magistrados. El Primer Ministro puede solicitar también asesoramiento a la Comisión para la Administración de Justicia sobre cualquier nombramiento para uno u otro cuerpo.

189. Los jueces gozan de seguridad en el cargo, lo que significa que un juez solo puede ser destituido por falta de ética profesional o incapacidad demostrada de desempeñar las funciones del cargo. La destitución es impuesta por el Presidente de Malta previa moción de la Cámara de Representantes aprobada en votación por mayoría de dos tercios de todos los miembros, y en la que se pida esa destitución. Antes de presentar a la Cámara una moción de destitución, esta debe ser enviada a la Comisión para la Administración de Justicia, para que realice las investigaciones pertinentes. La moción debe contener cargos concretos contra el juez o el magistrado, según el caso, que servirán de base para las investigaciones de la Comisión, así como una declaración en que se especifiquen los motivos en que están basados los cargos. Si la Comisión, después de realizadas las investigaciones, comunica que no hay falta de ética profesional ni incapacidad de desempeñar las funciones del cargo, no se toma ninguna otra medida con respecto a la moción propuesta. Si, por el contrario, la Comisión considera que hay indicios racionales de falta de ética profesional o de incapacidad, corresponderá a la Cámara de Representantes examinar la moción y votar al respecto.

190. Los salarios de los jueces se sufragan con cargo al Fondo Consolidado y no pueden reducirse.

191. Para que una persona pueda ser nombrada juez debe haber practicado como abogado en Malta al menos durante 12 años, o haber realizado esa práctica o servido como

magistrado durante un período que sume en total no menos de 12 años o haber realizado en parte esa práctica y en parte dicho servicio.

192. La Constitución establece la edad de jubilación obligatoria de los jueces (incluido el Presidente del Tribunal Supremo) y los magistrados. Actualmente esa edad son los 65 años, edad temprana en comparación con la que es habitual en el conjunto de Europa.

193. Antes de comenzar a ejercer sus funciones judiciales, un juez debe prestar el juramento de lealtad establecido en el tercer apéndice de la Constitución ante el Presidente de Malta, y el juramento del cargo previsto en el artículo 10 1) del Código de Organización y Procedimiento Civil (COPC)⁶⁵.

2. Magistrados

194. Lo mismo que los jueces, los magistrados son nombrados por el Presidente de Malta, con asesoramiento del Primer Ministro. Los magistrados son miembros de los tribunales inferiores, y gozan de la misma seguridad en el cargo que los jueces; su salario se sufraga también con cargo al Fondo Consolidado y tampoco puede reducirse.

195. Para que una persona pueda ser nombrada magistrado, debe haber practicado como abogado en Malta al menos siete años. Hasta hace poco, un magistrado debería abandonar el cargo al cumplir los 60 años de edad, lo que constituía una anomalía, ya que la edad de jubilación general de los funcionarios públicos eran los 61 años. Esta edad de jubilación obligatoria se ha elevado ahora a los 65 años, que es la misma que la de los jueces. Antes de comenzar a ejercer sus funciones judiciales, el magistrado debe pronunciar, ante el Presidente de Malta, el juramento de fidelidad y el juramento del cargo.

196. En la Isla de Gozo, los magistrados desempeñan las funciones de los jueces en muchas cuestiones civiles. De hecho, el Tribunal de Magistrados (Gozo) tiene una doble jurisdicción: una jurisdicción inferior en virtud de la cual se ocupa de todas las causas civiles que en Malta serían competencia del Tribunal de Magistrados (Malta), y una jurisdicción superior en virtud de la cual se ocupa, con algunas excepciones, de las causas que en Malta serían competencia de la Sala Primera del Tribunal Civil y del Tribunal Civil (Sala de Jurisdicción Voluntaria). Una excepción notable es la relativa a las solicitudes o referencias acerca de una violación de los derechos humanos fundamentales (sea en virtud de la Constitución o del Convenio Europeo de Derechos Humanos), que deben tramitarse en primera instancia ante la Sala Primera del Tribunal Civil de Malta. Los recursos contra los fallos del Tribunal de Magistrados (Gozo) en su jurisdicción superior son tramitados en Gozo por un único juez.

197. De acuerdo con el artículo 7 2) del COPC, el Presidente del Tribunal Supremo puede designar a uno de los magistrados como magistrado superior. La persona designada, que no tiene que ser la de mayor antigüedad en el cargo entre los magistrados, debe desempeñar las funciones asignadas a él por el Presidente del Tribunal Supremo o en las leyes vigentes.

3. Sistema judicial de Malta⁶⁶

a) Tribunal Constitucional

198. El Tribunal Constitucional está constituido por tres jueces. Interpreta la Constitución y la invalidez de las leyes, tiene jurisdicción en primera instancia en las causas relacionadas con violaciones de los derechos humanos y denuncias relativas a acusaciones de fraude

⁶⁵ Código de Organización y Procedimiento Civil, cap. 12 de la legislación de Malta.

⁶⁶ Il-Gudikatura Maltija: Court of Magistrates <<http://judiciarymalta.gov.mt/court-of-magistrates>> consulta realizada el 3 de febrero de 2012.

electoral, y decide las cuestiones relativas a la composición de la Cámara de Representantes y las referencias a la votación para elegir a los miembros de la Cámara de Representantes.

b) Tribunal de Apelación

199. Este Tribunal está compuesto por tres jueces cuando tramita los recursos referentes a fallos del Tribunal Civil. Se ocupa también de los recursos contra las decisiones de varios tribunales administrativos, en la mayoría de los casos sobre asuntos de derecho.

c) Tribunal Penal

200. En este Tribunal el juez actúa acompañado de un jurado de nueve personas para ocuparse, sobre la base de un escrito de acusación, de los delitos que desbordan la competencia del Tribunal de Magistrados en calidad de tribunal de jurisdicción penal. En casos excepcionales, este tribunal puede prescindir del jurado.

d) Tribunal Civil

201. El Tribunal Civil tiene tres salas: la Sala de Familia, la Sala de Jurisdicción Voluntaria y la Sala Primera del Tribunal Civil. Un juez preside las tres salas. La Sala Primera se ocupa de todas las causas de carácter civil y comercial que desbordan la jurisdicción de los tribunales de magistrados. Reviste especial importancia el hecho de que se ocupa de todas las solicitudes de desagravio en relación con presuntas violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales protegidos tanto por la Constitución de Malta como por el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

e) Tribunal de Magistrados

202. Este Tribunal está integrado por un magistrado y tiene jurisdicción tanto civil como penal. En las cuestiones civiles, el Tribunal de Magistrados tiene una jurisdicción inferior de primera instancia, limitada a las reclamaciones de 3.494,06 a 11.646,87 euros⁶⁷. En las cuestiones penales, el Tribunal tiene una doble jurisdicción: en calidad de tribunal de jurisdicción penal enjuicia los delitos que caen dentro de su jurisdicción, y como tribunal de investigación se ocupa de los delitos que incumben a la jurisdicción de un tribunal superior. En el segundo caso, realiza la investigación preliminar de los delitos procesables y transmite el expediente pertinente al Fiscal General. Este puede pedir al tribunal que enjuicie a cualquier persona acusada de un delito sancionable con pena de prisión de al menos seis meses pero no más de diez años, si no hay ninguna objeción por parte de dicha persona. El tribunal pregunta al acusado si se opone a que su caso sea tramitado en forma sumaria y, si el acusado no tiene objeción, el tribunal es competente para procesar al acusado y procede a emitir un fallo.

f) Tribunales de Gozo

203. El Tribunal de Magistrados de Gozo para cuestiones civiles tiene una doble jurisdicción: jurisdicción inferior comparable a la ejercida por el tribunal homólogo de Malta, y jurisdicción superior, tanto civil como comercial, en relación con las causas que en Malta son tramitadas por la Sala Primera del Tribunal Civil. Dentro de los límites de su jurisdicción territorial, este tribunal goza también de las facultades de un tribunal de jurisdicción voluntaria.

⁶⁷ Código de Organización y Procedimiento Civil, cap. 12 de la legislación de Malta, art. 47 1).

g) *Tribunal de demandas de menor cuantía*

204. El Tribunal de demandas de menor cuantía está presidido por un árbitro, que decide en los casos relativos a los principios de equidad de acuerdo con la ley. Los árbitros son nombrados entre los abogados y su mandato es de cinco años. Deciden sin demora sobre los casos que se les presentan. El objetivo es resolver en forma sumaria las demandas no superiores a 3.494,06 euros⁶⁸. Las sesiones de este Tribunal se celebran en Malta o en Gozo. Los recursos contra una de sus decisiones se presentan al Tribunal de Apelación en los casos específicos enumerados en la Ley que establece el Tribunal.

h) *Proceso europeo de escasa cuantía*

205. El Reglamento (CE) N° 861/2007 estableció un proceso europeo de escasa cuantía. Las disposiciones de dicho Reglamento entraron en vigor el 1 de enero de 2009. Su objetivo es simplificar y acelerar los litigios de escasa cuantía en asuntos transfronterizos. Se aplica a los asuntos civiles o mercantiles de cuantía no superior a los 2.000 euros. Este proceso es un procedimiento escrito. El demandante inicia el proceso cumplimentando el formulario estándar, incluida una descripción de los elementos probatorios. Se envía al demandado una copia del formulario dentro de un plazo de 14 días. El demandado envía su respuesta dentro de un plazo de 30 días a partir de la fecha en que le hayan sido notificados los formularios. El formulario se presenta en la lengua o una de las lenguas del tribunal. En Malta, el Tribunal de demandas de pequeña cuantía conoce de las demandas presentadas en el marco del Reglamento sobre el proceso europeo de escasa cuantía y toma decisiones al respecto.

i) *Tribunales locales*

206. Algunas infracciones de pequeña importancia, relacionadas por ejemplo con el tráfico (estacionamiento, etc.), vertidos de basura, arrendamiento, etc., están penalizadas y son tramitadas por los comisionarios de justicia de los tribunales locales situados en varias localidades. Los comisionados son elegidos entre personas con un título de derecho y su nombramiento dura tres años. Cuando las infracciones se han despenalizado, el caso puede ser decidido incluso en ausencia del acusado. Las apelaciones solo son posibles sobre cuestiones legales.

j) *Tribunal de Examen Administrativo*

207. El 1 de enero de 2009 (Aviso Legal 345 de 2008) entraron en vigor las disposiciones de la Ley de justicia administrativa⁶⁹. El objetivo de la Ley es instaurar la justicia administrativa en Malta. Contiene disposiciones acerca del Tribunal de Examen Administrativo, su constitución, Presidente, salas, grupos de asistentes, registro, procedimiento y recursos contra sus decisiones. Este es un tribunal independiente e imparcial que aplica los principios de la buena conducta administrativa.

208. El Tribunal tiene como objetivo examinar las medidas administrativas. Está integrado por un Presidente, con un mandato de cuatro años, nombrado por el Presidente de Malta siguiendo las indicaciones del Primer Ministro. El Tribunal cuenta con la ayuda de dos asistentes y celebra sus sesiones en Malta y Gozo. Entre las medidas administrativas se incluye la expedición por la Administración Pública —es decir, el Gobierno de Malta, con inclusión de sus ministerios y departamentos, las autoridades locales y cualquier persona jurídica establecida en virtud de la Ley— de cualquier orden, licencia, permiso, garantía, autorización, concesión, decisión o denegación de una solicitud de un miembro del público.

⁶⁸ Tribunal de demandas de menor cuantía (cap. 380 de la legislación de Malta), art. 3 2).

⁶⁹ Cap. 490 de la legislación de Malta.

209. Todas las partes en los procedimientos incoados ante el Tribunal que se sientan perjudicadas por una decisión del mismo pueden recurrir al Tribunal de Apelación constituido en su jurisdicción superior o inferior.

k) Instrucción previa

210. Cuando se asigna una causa a un juez, este dictará lo antes posible las órdenes conducentes a la rápida conclusión de los alegatos escritos. Una vez concluidos estos, el juez puede dictar las órdenes oportunas para que se proceda a la instrucción previa o al juicio. Si no se especifica una causa para el juicio, se procederá a la instrucción previa. La causa para la celebración de esta se determinará antes de transcurridos dos meses desde la conclusión de los alegatos escritos.

211. Uno de los objetivos de la instrucción previa, presidida por un juez o un auxiliar siguiendo las orientaciones e indicaciones del juez, es identificar las cuestiones objetivas y jurídicas implicadas en el caso, analizar la posibilidad de encontrar una solución de mutuo acuerdo o la aplicación del proceso de conciliación y mediación antes de continuar con la causa e identificar a los testigos y los documentos necesarios. El procedimiento de instrucción previa no se aplica al Tribunal Civil (Sala de Familia), al Tribunal de Magistrados (Malta) ni al Tribunal de Magistrados (Gozo) en su jurisdicción inferior.

l) Referencia al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

212. El artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea estipula lo siguiente:

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse, con carácter prejudicial:

- a) sobre la interpretación de los Tratados;
- b) sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión.

Cuando se plantee una cuestión de esta naturaleza ante un órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros, dicho órgano podrá pedir al Tribunal que se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo.

Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la cuestión al Tribunal.

4. Artículo 39 de la Constitución

213. El artículo 39 1) hace referencia al derecho general a un juicio justo en las causas penales, con inclusión de las contravenciones, mientras que el apartado 2 del mismo artículo trata del derecho general a un juicio justo en las causas civiles. Ambos apartados estipulan que la causa debe escucharse en un plazo de tiempo razonable. La principal diferencia entre los dos es que las causas penales deben tramitarse ante un tribunal independiente e imparcial, mientras que las civiles pueden tener lugar en un tribunal independiente e imparcial o ante otro órgano decisorio. De conformidad con el artículo 39 2), deben determinarse también la existencia y el alcance de los derechos y obligaciones civiles.

214. El artículo 39 3) establece que todos los procedimientos, sean civiles o penales, deben celebrarse en público. No obstante, hay excepciones a esta norma. El artículo 39 4) trata de las causas que se tramitan a puerta cerrada, que son las siguientes: a) jurisdicción voluntaria y otros procedimientos y b) impuesto sobre la renta.

215. En resumen, la Constitución de Malta en virtud del artículo 39 estipula que las causas deben celebrarse en público salvo en los casos presentados al Tribunal de menores y otros procedimientos relacionados con los menores y el impuesto sobre la renta. Esas causas se celebran a puerta cerrada por razones de justicia, defensa, seguridad pública, orden público, moralidad o decoro públicos y bienestar de las personas. Los casos en que una causa se celebra a puerta cerrada son los siguientes:

a) El tribunal, por propia iniciativa o por solicitud de una de las partes en los procedimientos, determina que las pruebas sobre cualquier persona que vaya a presentarse como testigo deban tomarse ante un auxiliar de fiscalía en un determinado lugar y momento en determinadas condiciones especificadas en la orden;

b) Previa solicitud de una de las partes que desee confirmar un hecho declarado en la demanda, o en una observación que la acompañe, mediante una declaración jurada de una persona nombrada por la parte, ordenar que la persona de ese nombre aparezca con tal fin ante un auxiliar de fiscalía en un determinado lugar y momento especificado en la orden;

c) Por propia iniciativa o tras una observación presentada por una de las partes en los procedimientos, indicar que estos se prolonguen durante el tiempo que se considere adecuado y remitir a las partes a un mediador⁷⁰.

216. Asimismo, el código estipula que el juicio debe ser justo en todas las causas, es decir tanto civiles como penales, y en todos los tribunales, que deben ser independientes e imparciales. Como se observará más adelante, la tramitación de un caso en un plazo razonable es fundamental aunque no siempre se consigue, sobre todo en las causas civiles.

217. Nuestra Constitución considera luego algunos derechos específicos que son aplicables únicamente en los procedimientos penales. Así, mientras que en las causas civiles hay solo procedimientos generales, en las causas penales la Constitución prevé procedimientos tanto generales como específicos. Estos últimos hacen referencia al derecho a saber en qué consiste la acusación, el derecho a un abogado, el contrainterrogatorio y el derecho a un intérprete y el hecho de que el acusado debe estar siempre presente.

5. Autoridad competente

218. Conforme a la Constitución de Malta, una persona acusada de un delito tiene derecho a ser juzgada de forma equitativa "por un tribunal independiente e imparcial establecido por la ley ". En las causas civiles, podrá decidir "todo tribunal u otro órgano decisorio instituido por la ley ". Asimismo, el Convenio Europeo reconoce el derecho de toda persona a ser oída en forma equitativa "por un tribunal independiente e imparcial establecido por ley ". Así, en virtud de nuestra legislación, una causa penal solo puede ser decidida por un juez o un magistrado mientras que, en las causas civiles, la decisión puede ser tomada no solo por un juez o un magistrado sino también por un tribunal.

6. Presunción de inocencia

219. El artículo 39 5) trata de la presunción de inocencia. Corresponde al artículo 6 2) del Convenio en el que se dispone que "toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada". Ello implica indirectamente que el acusado tiene derecho a guardar silencio, ya que no está obligado a demostrar su inocencia⁷¹.

⁷⁰ Código de Organización y Procedimiento Civil, cap. 12 de la legislación de Malta, art. 173.

⁷¹ Véanse los párrs. 131 a 133 del presente informe.

7. Derecho a ser informado sin demora

220. Tanto la Constitución (art. 34 2)) como el Código Penal (art. 355AC 1)) establecen que una persona detenida o arrestada debe ser informada, en el momento de su arresto o prisión, de las razones de su detención o encarcelamiento, aun cuando quizá sean obvias. Asimismo, dicha información debe ofrecerse en un idioma que comprenda la persona. Cuando el detenido necesita un intérprete y no haya uno disponible, deberá nombrarse un intérprete lo antes posible.

8. Plazo razonable

221. El artículo 6 del Convenio y el artículo 39 1) de la Constitución garantizan que, cuando una persona es detenida o arrestada para llevarla ante un tribunal en ejecución de un auto judicial o cuando existe sospecha fundada de que el detenido ha cometido o iba a cometer un delito, comparecerá ante el tribunal "en un plazo razonable" para todos los acusados incluidos los que están en espera de juicio. Es obvio que el plazo razonable puede variar de acuerdo con las circunstancias del caso.

222. El artículo 34 de la Constitución establece que toda persona detenida o encarcelada deberá comparecer ante los tribunales antes de transcurridas 48 horas o ser puesta en libertad incondicionalmente o en condiciones razonables, en particular las que sean razonablemente necesarias para garantizar su posterior comparecencia en juicio o en las actuaciones previas al juicio. Lo mismo se establece en el artículo 355AJ 3) del Código Penal. El artículo 355AL 2) especifica además que, antes de que el funcionario jefe ordene la liberación de una persona, deberá informar al funcionario investigador y a un magistrado, y la decisión final será tomada por el magistrado.

223. Si la policía detiene a alguien del que tenía sospechas objetivas razonables pero, después de transcurridas diez horas, concluye que el detenido es inocente, la sospecha inicial no significa que se pueda mantener al sospechoso en el cuartel de la policía durante 48 horas. Por ello, si durante esas 48 horas, desaparece esa sospecha razonable, la policía tiene el deber de poner en libertad al detenido (y este tiene derecho a quedar en libertad) aun cuando no hayan transcurrido todavía las 48 horas. Es importante en ese sentido el fallo de la causa *Frank Mifsud c. Comisionado de Policía et* (Tribunal Constitucional)⁷². Frank Mifsud fue puesto en libertad después de 46 horas, pero el Tribunal Constitucional estimó que podría haber sido liberado antes porque era evidente que la sospecha existente en el momento de la detención había desaparecido y, dado que el Código Penal establece que la puesta en libertad debe hacerse sin retrasos indebidos y en ningún caso después de transcurridas más de 48 horas, el Tribunal dictaminó que la detención era ilegal aun cuando no superara el período de las 48 horas.

9. Presencia del acusado

224. En la causa *Regina c. Vella*⁷³, el Tribunal Penal de Malta afirmó el principio indiscutido de que la legislación maltesa no admite juicios *in absentia* en las cuestiones penales. El Código Penal no lo reconoce en esos términos, pero en varias de sus disposiciones postula claramente la presencia necesaria del acusado, además de establecer una sanción en caso de incomparecencia. De hecho en el artículo 443 se establece que en el día y la hora especificados para la vista de una causa o de una cuestión relacionada con ella el acusado debe encontrarse, sin ningún tipo de sujeción, en el lugar señalado con ese fin. Si está detenido, será llevado al tribunal "de la manera necesaria para evitar su fuga ". Si no

⁷² *Frank Mifsud c. Commissioner of Police et* (Tribunal Constitucional), 7 de marzo de 1990.

⁷³ *Regina c. Vella* (Tribunal Penal), 18 de noviembre de 1898.

está detenido, deberá presentarse en virtud de una orden de comparecencia y, en el caso de no presentarse, se dictará una orden de arresto.

225. En la legislación maltesa la presencia del acusado en su juicio no es solo un derecho sino también una obligación, que va acompañada de una sanción. Según la norma, el acusado debe aparecer personalmente, pero esa exigencia se flexibiliza en el caso de las infracciones. Los artículos 375 b) y 374 b) del Código estipulan que, en tales casos, el Tribunal podrá, por motivos justificados, eximir al acusado de aparecer personalmente y permitir que comparezca el esposo o la esposa, o un familiar próximo por consanguinidad o afinidad, o cualquier otra persona encargada o autorizada por escrito por el acusado. Si no se trata de una infracción y no está personalmente presente el propio acusado, tanto el juicio como los procedimientos son nulos.

226. En caso de incomparecencia del acusado en su juicio, una vez que ha sido convocado debidamente, el Código Penal de Malta no prevé ninguna alternativa a la orden de detención ni ninguna excepción, reserva o cláusula restrictiva.

227. La necesidad de que el acusado esté presente se aplica también en la fase de apelación. De hecho, en el Código Penal (art. 422) se establece que, si en la fecha establecida para la vista de la apelación, el apelante no se presenta, se considera que ha renunciado a su apelación y se aplica el fallo recurrido. No obstante, el apelante tiene derecho a presentar una solicitud en el plazo de cuatro días, junto con una declaración jurada de que, debido a una enfermedad o a cualquier otra razón independiente de su voluntad, específicamente expresada en la solicitud, no pudo estar presente en la fecha mencionada y el tribunal fijará otra fecha para la vista de la apelación.

228. Resulta interesante señalar que la Constitución de Malta, que entró en vigor en 1964 y cuyas disposiciones sobre los derechos humanos están inspiradas en gran parte en el Convenio, aborda expresamente la importante cuestión de la presencia del acusado en el juicio, y lo hace en general de acuerdo con el artículo 6 del Convenio. Establece que, si no es con consentimiento de la persona acusada, el juicio no puede tener lugar en su ausencia a no ser que se comporte de tal manera que haga imposible la continuación de los procedimientos en su presencia y el tribunal haya ordenado que sea desalojada de la sala y el juicio continúe en su ausencia⁷⁴.

10. Derecho a un abogado

229. El artículo 39 6) de la Constitución de Malta establece que la persona acusada tiene derecho a un representante legal; este derecho no puede ser objeto de restricciones. El apartado 11 del mismo artículo entiende por representante legal a "la persona autorizada a ejercer como abogado en Malta o, salvo en relación con los procedimientos incoados ante un tribunal en los que un procurador no tenga derecho de audiencia, un procurador judicial". En cuanto al derecho de representación legal, el Convenio Europeo, en el artículo 6 3) c) del Primer Apéndice, confirmó que la libertad de elegir el propio abogado no está garantizada cuando el acusado recibe ayuda letrada: "Todo acusado tiene [derecho]... a defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor de su elección o, si no dispone de los recursos necesarios, a poder ser asistido gratuitamente por un abogado de oficio, cuando los intereses de la justicia lo exijan".

230. El derecho a un abogado significa que, si una parte en una causa no dispone de suficientes medios económicos para pagar a un representante legal, el abogado para la

⁷⁴ J.J. Cremona, *Selected Papers 1990 - 2000*, Volume 2 Human Rights and Constitutional Studies (Publishers Enterprises Group PEG Ltd, 2002).

asistencia jurídica se encarga de la defensa de dicha parte⁷⁵. El decreto correspondiente se aplicará a todos los tribunales y órganos decisorios. El nombramiento de la asistencia letrada se hace en forma rotatoria. El COPC establece que "es legítimo que esa parte, por un motivo justificado, solicite al tribunal, a través del abogado para la asistencia jurídica, que sustituya al abogado o procurador por otro abogado o procurador del turno rotativo"⁷⁶. A finales de 2011 había 16 abogados de asistencia jurídica y 25 procuradores de asistencia jurídica (cuadro 16). El derecho a un representante de asistencia jurídica no se limita a las causas penales, incluye también las causas civiles. Por ejemplo, el año pasado 282 personas se valieron de este derecho durante causas civiles (cuadro 17).

11. Interrogatorio y contrainterrogatorio⁷⁷

231. Cuando un testigo no está presente en una sesión a pesar de haber recibido una orden de comparecencia, el testigo es culpable de desacato al tribunal y sancionado en consecuencia (normalmente con una multa). Puede ocurrir también que el tribunal (por medio de una orden de detención o escolta) obligue a un testigo a estar presente para dar testimonio. Si se comprueba que hay razones fundadas para no comparecer ante el tribunal, la sanción puede condonarse.

232. El testigo presta juramento antes del interrogatorio y normalmente da testimonio de viva voz en audiencias públicas; no obstante, puede ocurrir que los testigos den testimonio mediante declaración jurada por escrito. En estos casos, el tribunal puede también obligar al testigo a comparecer. Durante el interrogatorio, el testigo no puede recibir ayuda ni asesoramiento de ninguna otra persona.

233. El COPC considera dos formas de examinar a los testigos: el interrogatorio principal y el contrainterrogatorio. Durante el interrogatorio principal no pueden formularse preguntas capciosas o tendenciosas (aunque un abogado puede formular dichas preguntas con permiso especial del tribunal). La parte opuesta tiene derecho a interrogar (es decir, contrainterrogar) a un testigo y pueden formularse preguntas capciosas y tendenciosas. Durante el contrainterrogatorio, solo pueden formularse al testigo preguntas acerca de los hechos declarados en su interrogatorio o sobre cuestiones que pueden poner en tela de juicio su credibilidad. En otras palabras, una parte que llama a un testigo no puede impugnar la credibilidad de este alegando problemas de personalidad, pero puede contradecir su testimonio o el testimonio de otro testigo y puede también demostrar que en otros momentos ha hecho afirmaciones que contradicen su testimonio actual. No obstante, cuando el abogado que realiza el contrainterrogatorio desea demostrar una cuestión de hecho que no se ha planteado en el interrogatorio, puede presentar al mismo testigo como su propio testigo. Asimismo, en cualquier momento del interrogatorio o el contrainterrogatorio, el tribunal puede formular preguntas al testigo. Cuando se han realizado el interrogatorio y el contrainterrogatorio, ninguna de las partes puede formular ya más preguntas, pero el tribunal o la parte, con permiso del tribunal, pueden hacer preguntas sobre las respuestas dadas durante el interrogatorio o contrainterrogatorio.

234. Además, con respecto al interrogatorio del acusado, el Código Penal⁷⁸ autoriza al tribunal a preguntarle, sin amenazas ni promesas, su nombre y apellido, edad, lugar de nacimiento y residencia, oficio, profesión u ocupación, nombre y apellido de su padre y si su padre vive o ha fallecido. La siguiente pregunta trascendental es si quiere declararse

⁷⁵ Código de Organización y Procedimiento Civil, cap. 12 de la legislación de Malta, art. 911 y ss.; Normas de procedimiento y práctica y mantenimiento del orden de los tribunales (Código Penal), Legislación subsidiaria 9.11 Norma 2 2).

⁷⁶ Código de Organización y Procedimiento Civil, cap. 12 de la legislación de Malta, art. 918.

⁷⁷ Código de Organización y Procedimiento Civil, cap. 12 de la legislación de Malta, arts. 577 y ss.

⁷⁸ Código Penal, cap. 9 de la legislación de Malta, arts. 390 y 392.

culpable o no. No obstante, antes de formular esta última pregunta, el tribunal explica al acusado el carácter de los cargos formulados contra él y le comunica que no está obligado a responder a ninguna pregunta ni a autoincriminarse, que puede recibir ayuda de un abogado o procurador y que todo lo que diga puede ser utilizado en su contra.

12. Intérprete

235. Tanto el COPC como el Código Penal dan importancia al servicio de intérpretes cuando se presenta la necesidad de esos servicios. El COPC estipula que el idioma del tribunal es el idioma maltés, pero si una de las partes no entiende el idioma de los procedimientos orales, estos serán interpretados para él por el tribunal o por un intérprete jurado. Lo mismo ocurre cuando el testimonio se presenta en un idioma que el tribunal no entiende⁷⁹. Asimismo, el artículo 649 8) del Código Penal establece lo siguiente: "El magistrado presidirá la audiencia y, en caso necesario, nombrará un intérprete que prestará la asistencia necesaria. El magistrado presente se encargará de que se identifique a la persona que va a declarar y que el procesamiento tenga lugar y continúe en todo momento en conformidad con los principios fundamentales de la legislación de Malta".

13. Autoincriminación

236. Los testigos tienen el privilegio de guardar silencio y no responder a ninguna pregunta incriminante. El tribunal puede determinar libremente cuándo una pregunta es degradante o cuándo la respuesta a una pregunta puede revelar información que pueda ser nociva para el interés público. Este privilegio se amplía a los hechos conocidos como *ratione officii*, es decir, información resultante o relacionada con cualquier documento perteneciente o que se encuentre en posesión de un departamento público civil o de las fuerzas militares, navales o aéreas.

14. Tribunal de menores

237. El Tribunal de menores establecido en virtud de la Ley del Tribunal de menores, creado en 1980, es considerado por la legislación como un Tribunal de Magistrados. En ese tribunal, un magistrado normalmente actúa solo, pero cuando el tribunal se constituye como Tribunal de menores el magistrado cuenta con dos asistentes, uno de los cuales debe ser una mujer⁸⁰. El Tribunal de menores entiende de los casos presentados contra personas de menos de 16 años de edad⁸¹. Conoce también de las apelaciones contra las órdenes de internamiento dictadas por el ministro responsable del bienestar social en virtud de la Ley sobre los niños y adolescentes (internamiento). El Tribunal de menores celebra sesiones tanto en Malta como en Gozo⁸². De hecho, el Código Penal, en virtud del artículo 28C 3)

⁷⁹ This is regulated by Judicial Proceedings (Use of English Language) Act, cap. 189 de la legislación de Malta.

⁸⁰ Los dos asistentes son nombrados por el Presidente, a propuesta del Primer Ministro, entre las personas que, en opinión del Primer Ministro, tienen experiencia previa y están especialmente cualificados para resolver los problemas de los jóvenes.

⁸¹ Art. 6 1) de la Ley del Tribunal de menores: "Cuando, en el curso de una acción judicial ante el Tribunal de menores, el tribunal considere que la persona acusada o a la que se refiere la acción judicial ha cumplido los 16 años de edad, dicho tribunal ...suspenderá el proceso y lo remitirá al Tribunal de Magistrados competente, que se ocupará del caso como si se hubiera iniciado ante dicho Tribunal de Magistrados". Asimismo, el artículo 6 2) dispone lo siguiente: "Cuando, en el curso de una acción judicial ante el Tribunal de menores, el tribunal considere que la persona acusada o a la que se refiere la acción judicial no ha cumplido los 16 años de edad, dicho tribunal suspenderá el proceso y lo remitirá al Tribunal de menores, que procederá a la vista y determinación del caso como si se hubiera iniciado ante dicho Tribunal de menores".

⁸² Il-Gudikatura Maltija: Court of Magistrates <<http://judiciarymalta.gov.mt/court-of-magistrates>> consulta realizada el 3 de febrero de 2012.

b), estipula que "se considerará que el Tribunal de menores es un Tribunal de Magistrados (Malta) o un Tribunal de Magistrados (Gozo), según el caso".

238. Las vistas se celebran en Santa Venera. Los tribunales conocen de las acusaciones u otros procedimientos relacionados con niños o jóvenes de menos de 16 años de edad y puede también dictar órdenes de internamiento. Dado el carácter confidencial de esas sesiones, solo pueden estar presentes en las audiencias las personas mencionadas en la ley que establece el Tribunal.⁸³

239. El Tribunal de menores no tiene competencia para conocer los cargos u otros procedimientos relacionados con un niño o un joven de menos de 16 años acusado conjuntamente con otra persona que no es un niño o un joven.

240. El tribunal *ex officio* o los abogados pueden solicitar que no se dé a conocer el nombre, dirección o escuela del joven en la prensa, la radio o la televisión. Lo mismo cabe decir de otras informaciones que puedan permitir la identificación del niño, por ejemplo, el nombre de los padres. Asimismo, no se publican fotos del mismo en ningún periódico ni en la televisión. Esta limitación se aplica a todo joven implicado en un proceso, independientemente de que sea el acusado o la persona implicada en los procedimientos o un testigo⁸⁴.

15. Derecho de apelación

241. El Tribunal de Apelación Penal⁸⁵ se divide en dos: Tribunal de Apelación Penal (Jurisdicción Inferior) y el Tribunal de Apelación Penal (Jurisdicción Superior). El Tribunal de Apelación Penal (Jurisdicción Inferior) está presidido por un juez y conoce de los recursos contra el Tribunal de Magistrados (Jurisdicción Penal), mientras que el Tribunal de Apelación Penal (Jurisdicción Superior), está presidido por tres jueces (el Presidente del Tribunal Supremo, que es el Presidente del tribunal, y otros dos jueces) y conoce de las apelaciones contra el Tribunal Penal. El acusado puede elegir libremente el objeto de la apelación y puede apelar en uno de esos tribunales, de acuerdo con el tribunal que dictó la sentencia. En otras palabras, el acusado puede apelar contra su condena en todos los casos o apelar contra la sentencia dictada sobre su condena. La apelación nunca puede dar lugar a una sentencia más grave. Una persona acusada puede apelar también contra un veredicto de no culpabilidad por problemas de salud mental. En algunos casos el tribunal puede ordenar también un nuevo juicio. Por otro lado, el Fiscal General, que es el fiscal ante el Tribunal Penal, solo puede apelar contra las causas tramitadas por el Tribunal de Magistrados, independientemente de que dependan de su competencia o de que el caso se haya tramitado en forma sumaria (es decir, cuando acusado se declara culpable y el delito no puede ser sancionado con más de 10 años de prisión). El Fiscal General no dispone de la misma libertad que el acusado. El derecho de apelación del Fiscal General se limita, en la mayoría de los casos, a apelaciones por cuestiones de derecho, aunque, cada vez más, algunas leyes otorgan al Fiscal General un derecho de apelación general en relación con algunos delitos (por ejemplo, en virtud de la Ley de armas y de la Ley de caza). En los casos relacionados con los procedimientos sumarios, cuando se trata de delitos que son competencia del Tribunal de Magistrados en calidad de Tribunal de Jurisdicción Penal, el Fiscal General puede apelar únicamente por los siguientes motivos:

- a) El tribunal inferior no tiene competencia en la causa;

⁸³ The Law Courts: The Juvenile Court

<<http://www.mjha.gov.mt/page.aspx?pageid=145&printonly=true>> consulta realizada el 3 de febrero de 2012.

⁸⁴ Ley del Tribunal de menores. Cap. 287 de la legislación de Malta, art. 8.

⁸⁵ Código Penal, cap. 9 de la legislación de Malta, art. 498.

- b) El acusado ha sido condenado a una pena que supera la competencia de ese tribunal;
- c) La condena dictada por el tribunal inferior es diferente de la establecida por la legislación para el delito por el que se ha condenado al acusado;
- d) El acusado ha sido absuelto debido a que el hecho no reúne las características de un delito, a la prescripción de la acción o una condena o absolución anterior;
- e) El acusado ha sido declarado libre de castigo;
- f) La policía o el demandante no han recibido autorización para presentar en el juicio alguna prueba indispensable que era admisible en virtud de la Ley.

242. En cuanto al Tribunal de Apelación Penal (Jurisdicción Superior), el Fiscal General solo puede hacer una referencia en virtud del artículo 500 2) del Código Penal. No obstante, dicha referencia no repercutirá en el juicio en relación con el que se hace la referencia o en una posible absolución en dicho juicio⁸⁶.

243. El Tribunal conoce también de las apelaciones del acusado y del Fiscal General contra las decisiones sobre excepciones preliminares y contra las decisiones de excepciones relativas a la admisibilidad de las pruebas.

16. Indemnización

244. El artículo 409A del Código Penal de Malta ofrece al detenido la oportunidad de presentar al Tribunal de Magistrados una solicitud si considera que está detenido ilegalmente por orden de la policía o de otra autoridad pública. Dicha solicitud debe tramitarse con carácter urgente y, junto con la fecha de la audición, se comunica el mismo día de la solicitud al solicitante y al Comisionado de Policía o a otra autoridad pública. El Comisionado de Policía o la autoridad pública pueden presentar una respuesta no más tarde del día de la vista.

245. Por otro lado, cuando una persona detenida por un delito del que ha sido acusada ante el Tribunal de Magistrados alega que la prolongación de su detención no está en conformidad con la ley, puede en cualquier momento dirigirse al tribunal y pedir su puesta en libertad. Esta solicitud debe tramitarse con urgencia y, junto con la fecha de la vista, comunicarse el mismo día de la solicitud al Comisionado de Policía o/y el Fiscal General.

246. La Constitución de Malta, en su artículo 34 4), dispone lo siguiente: "Quien haya sido ilegalmente detenido o encarcelado por otro tendrá derecho a exigirle resarcimiento".

247. En la causa *Sabeur Ben Ali c. Malta*⁸⁷ el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que una persona detenida por posesión de drogas tiene derecho a indemnización por detención ilegal, con intereses. Ello ocurrió después de que el acusado pidiera que se revisara su detención debido a que había problemas de ilegalidad y los magistrados que se habían ocupado del caso no tenían competencia para determinar si la sospecha contra él era razonable. Se determinó que ello constituía un incumplimiento de la obligación de proceder sin demora. El tribunal señaló que el objetivo del párrafo 5 3) del Convenio Europeo de Derechos Humanos "era ofrecer a las personas detenidas o detenidas bajo sospecha de haber cometido un delito una garantía frente a la privación de libertad arbitraria o injustificada". Como los magistrados que examinaron el caso no tenían realmente

⁸⁶ *Ibid.*, art. 500B (3).

⁸⁷ *Sabeur Ben Ali c. Malta*, N° 35892/97, ECtHR, 2000.

facultades para liberar al acusado al comprobar la falta de sospecha razonable de culpabilidad, el examen no cumplía el objetivo previsto⁸⁸.

17. Principio de la cosa juzgada

248. Asimismo, el artículo 39 9) de la Constitución trata de la norma *ne bis in idem*:

Nadie que demuestre que ha sido juzgado por un tribunal competente por un delito, y haya sido declarado culpable o absuelto, puede volver a ser juzgado por ese mismo delito o cualquier otro por el que hubiera podido ser condenado en el juicio por aquel delito, salvo si lo ordena un tribunal superior en el curso de apelación o revisión de la condena o absolución; y nadie será juzgado por un delito por el que demuestre que ha sido indultado:

Nada de lo dispuesto en virtud de cualquier ley se considerará incompatible o en contravención con este apartado únicamente por el hecho de que autorice a un tribunal a juzgar a un miembro de las fuerzas del orden por un delito a pesar de la existencia de un proceso o una decisión condenatoria o absolutoria de esa persona con arreglo al código disciplinario de esa fuerza, de modo que todo tribunal que enjuicie y condene a esa persona deberá tener en cuenta, al dictar sentencia, toda pena que se le haya impuesto bajo dicho código disciplinario.

249. El acusado no puede ser condenado dos veces por el mismo delito. Si un tribunal condena a una persona, esta no puede ser condenada de nuevo por el mismo delito. Además, si hubiera un delito por el que podría haber sido procesada pero no lo ha sido, tampoco podrá serlo con posterioridad. El artículo 527 del Código Penal aclara este punto todavía más: "Cuando en un juicio se dicta una sentencia que absuelve a la persona acusada, será ilícito someter a esa persona a otro juicio por el mismo hecho".

Artículo 15

Las leyes penales no son retroactivas

250. El artículo 39 8) de la Constitución especifica que las leyes penales no son retroactivas: *lex non abet oculus retro*:

Ninguna persona podrá ser declarada culpable de un delito por un acto u omisión que, en el momento en que se cometió, no constituía tal delito, y no podrá imponerse ninguna pena que sea de grado o naturaleza más grave de la que podría haber supuesto por ese delito en el momento en que se cometió.

251. Otras leyes, por ejemplo las leyes civiles o fiscales, pueden ser retroactivas. Si el delito es una infracción en virtud de la ley pero, cuando comienza el juicio, el delito se ha derogado, el infractor puede volver a ser procesado si, cuando cometió el delito, ese acto era considerado ilegal/ilícito. Ello no va en contra del principio de retroactividad. Por otro lado, no se puede acusar a nadie de un delito que cometió cuando no constituía tal delito en el pasado. En la causa *Policía c. Lawrence Cuschieri*⁸⁹ se examinó la constitucionalidad de la norma general relativa a la aplicación de la ley del procedimiento en el momento del juicio. Cuschieri estaba acusado de un delito de soborno de funcionario público por efectuar un pago a cambio de la expedición de licencias. En este delito, el código exigía la

⁸⁸ Robert Bliss, "Memorandum for the International Criminal Court - Article 85: if someone is wrongfully detained or convicted, what recourse does he have? What compensation is he entitled to? Is this monetary, and if do, where does the money come from? What should the court take in into consideration when deciding on compensation?" (Case Western Reserve University School of Law International War Crimes Research Lab), 46.

⁸⁹ *Il-Pulizija c. Lawrence Cuschieri* (Tribunal Constitucional), 8 de enero de 1992.

corroboración de las pruebas de un cómplice. Un cómplice solo puede dar testimonio contra el acusado si la corroboración es confirmada por un testigo independiente. Cuando Cuschieri cometió el delito, esa norma era todavía aplicable. Durante el juicio se aprobó una ley que revocaba la norma de la corroboración y un cómplice podía dar testimonio sin necesidad de esta. En otras palabras, durante los procedimientos se produjo la derogación de la norma general (y no de la norma específica, a saber la de corrupción), por lo que se examinó la conformidad de dicha norma general con la Constitución y la Convención. Los alegatos de Cuschieri se rechazaron debido a que esta norma general no infringía la Constitución ni la Convención. La Constitución establece que ninguna persona puede ser castigada por una infracción que no constituya un delito cuando se cometió y una persona no debe recibir una sanción más grave que la que se habría impuesto en el momento en que se cometió el delito. Las enmiendas del artículo 639 3) del Código Penal no afectaban en absoluto a esos dos principios. Ello no representa un cambio de normas sustantivo, ya que la corrupción fue siempre un delito. Se trata de una norma de procedimiento, ya que lo que cambió fue la norma relativa a las pruebas. Por ello, la no retroactividad de las leyes penales en la Constitución no incluye la no retroactividad de las normas de procedimiento.

Artículo 16

1. Persona jurídica

252. Nuestra legislación establece una distinción entre persona física y persona jurídica. El artículo 4 d) de la Ley de interpretación de Malta establece que, cuando la expresión "persona" se encuentra en cualquier Ley del Parlamento, debe interpretarse, salvo indicación en contrario, en el sentido de que incluye un cuerpo u otra asociación de personas independientemente de que ese cuerpo o asociación se haya constituido o no en sociedad.

253. Hasta 1925 el Derecho mercantil de Malta no reconocía expresamente la personalidad jurídica de las asociaciones comerciales. El profesor Cremona mantiene que este carácter jurídico se derivaba implícitamente de un análisis atento de los principios generales que regulan el contrato de asociación en general y la asociación comercial en particular.

254. Así pues, la sociedad pasa a ser una persona jurídica distinta de sus promotores, directores, miembros y empleados. Se convierte en una persona que la ley reconoce por derecho propio, una entidad con un carácter jurídico independiente y autónomo. Así lo confirma el artículo 4 4) de la Ley de sociedades⁹⁰:

Una asociación comercial tiene una personalidad jurídica distinta de la de su miembro o miembros, y dicha personalidad jurídica se mantendrá hasta que el nombre de la asociación comercial se elimine del registro, en cuyo caso la asociación comercial dejará de existir.

2. Persona física

255. Por otro lado, la legislación de Malta no contiene una definición de "persona física" y, por lo tanto, no es claro si un niño no nacido debe considerarse como persona física o no. Es una persona potencial pero no tiene capacidad de actuar por cuenta propia, por lo que la ley no contempla a ese niño. Para que un niño goce de protección debe ser una persona efectiva y no una persona potencial.

256. El Código Civil establece una distinción entre los niños nacidos viables y los que no son viables al nacer. El artículo 601 1) considera que los nacidos no viables no podrán

⁹⁰ Ley de sociedades, cap. 386 de la legislación de Malta.

sucedan por testamento; por otro lado, los que nacen vivos serán considerados viables. Así pues, ello podría interpretarse en el sentido de que los derechos de sucesión comienzan únicamente al nacer, y solo cuando el recién nacido está suficientemente desarrollado como para ser considerado viable.

257. El artículo 9 h) de la Ley del Comisionado para la Infancia establece que una de las funciones del Comisionado es "promover la máxima calidad en los servicios sanitarios y sociales para las mujeres durante el embarazo y la atención y protección especial, incluida la protección jurídica adecuada, para los niños tanto antes como después del nacimiento". Aparentemente, podría decirse que el niño no nacido está protegido en virtud de esta disposición, pero los debates parlamentarios revelan lo contrario, ya que los legisladores no incluían al niño no nacido en su concepto de niño. Cuando la disposición menciona la "protección jurídica adecuada" para el niño no nacido, cabe hacer referencia a los curadores *ad ventrem* nombrados en los casos en que, en el momento de la defunción del marido, la esposa declara que está embarazada. El curador es nombrado por el tribunal, a petición de cualquier persona interesada, con el fin de impedir la supresión del nacimiento, o la sustitución del hijo y para administrar los bienes hasta el momento del nacimiento, según las orientaciones que el tribunal considere apropiadas⁹¹.

3. Inscripción del nacimiento

258. El artículo 272 del Código Civil dispone que "en el caso de todos los niños nacidos, el padre o la madre, y en defecto de ellos, el médico, cirujano, partera o cualquier otra persona que asiste al parto o en cuya casa haya tenido lugar el parto, deberán notificar dicho parto, antes de transcurridos cinco días, al funcionario encargado de redactar el acta de nacimiento". Esta debe contener la siguiente información:

- a) Fecha del acta;
- b) Hora, día, mes, año y lugar del nacimiento;
- c) Sexo del niño;
- e) Nombre dado al niño;
- f) Nombre, apellido, documento de identidad, edad, lugar de nacimiento y residencia del padre del niño, de la madre y de la persona que realiza la declaración.

259. Así pues, los padres tienen la obligación de inscribir a su niño y también de darle un nombre. El niño recibe el apellido del padre, al que se puede agregar el de la madre.

260. El artículo 283 3) afirma que, en caso de aborto, solo se realizará un acta de nacimiento si el feto ha asumido por completo forma humana. Cuando se trata de un mortinato, debe redactarse un acta de nacimiento e indicarse que nació muerto.

Artículo 17

261. El punto de partida de un análisis de la legislación maltesa sobre el derecho a la privacidad es la Constitución de Malta. Su artículo 38 se titula "Protección de la inviolabilidad del domicilio y otros bienes. El derecho a tener un lugar seguro para vivir es uno de los elementos fundamentales de la dignidad humana, la salud física y mental y la calidad general de vida, que permiten el propio desarrollo. La violación de este derecho ha sido siempre objeto de sanciones legales.

⁹¹ Código Civil, cap. 16 de la legislación de Malta, art. 170 1).

262. Los funcionarios de policía con rango de inspector o superior pueden dictar una orden de registro basada en motivos razonables que permiten sospechar la existencia de irregularidades. En virtud de la ley, los servicios de seguridad pueden recurrir a facultades especiales, como las escuchas telefónicas, solo con autorización específica por escrito del Ministro del Interior o del Primer Ministro; esas acciones solo están permitidas en los casos relacionados con la seguridad nacional, incluida la lucha contra la delincuencia organizada.

1. Registro de bienes

263. El artículo 38 1) de la Constitución de Malta establece lo siguiente: "Salvo con su consentimiento o en virtud del ejercicio de la patria potestad, no se podrá practicar el registro de la persona ni de los bienes de nadie ni se podrá entrar en su propiedad ". No obstante, el registro de las personas y los bienes y el ingreso en las propiedades están autorizados en los siguientes casos:

- a) Por motivos de defensa, de seguridad, de salud, orden, moralidad o decoro públicos, de ordenamiento urbano o rural y de desarrollo y aprovechamiento de los recursos minerales o de cualquier otro bien con fines de utilidad pública;
- b) Para proteger los derechos y libertades de otras personas;
- c) Cuando se recibe autorización de un departamento del Gobierno de Malta o un órgano de gobierno local o una persona jurídica constituida en virtud de la Ley con fines de utilidad pública para entrar en la propiedad de una persona a fin de inspeccionar dicha propiedad o su contenido a efectos de recaudar tributos, tasas o deudas o para realizar trabajos relacionados con un bien que se encuentre legalmente en dicha propiedad y pertenezca a ese Gobierno, órgano local o persona jurídica, según proceda; o
- d) Para ejecutar una sentencia u orden de un tribunal, el registro de una persona o de sus bienes por orden judicial o el ingreso en una propiedad en virtud de dicha orden, o para prevenir o descubrir delitos.

264. Este artículo encuentra confirmación en otros artículos del Código Penal. El allanamiento y registro de una propiedad, casa, edificio o recinto solo puede realizarse después de obtener la necesaria autorización de un magistrado mediante una orden con ese fin. No obstante, dicha orden no es necesaria en caso de descubrimiento de un bien sobre el que se haya introducido una alerta en el Sistema de información de Schengen y que pueda ser ocultado, perdido, dañado, modificado o destruido.

265. El allanamiento y registro no pueden ejecutarse después de la puesta del sol, a no ser que el magistrado lo haya autorizado en la orden o que el funcionario de policía responsable tenga motivos razonables para considerar que será imposible conseguir el objetivo de la operación si se retrasa la ejecución de la orden. Debe entregarse una copia de la orden a la persona que ocupa y está presente en el lugar objeto de registro o a cualquier otra persona encargada de ese lugar y que esté presente en él. Si no hay nadie presente, se deja una copia de la orden en un lugar fácilmente visible de la propiedad. El registro solo puede llevarse a cabo con el objetivo previsto en la orden, pero, si durante el registro, se descubren delitos diferentes del mencionado en la orden, el registro podrá ampliarse en la medida necesaria de acuerdo con ese delito. Asimismo, el registro puede llevarse a cabo en el local donde una persona está detenida, aunque sea en forma temporal, si la policía tiene motivos razonables para sospechar que hay pruebas relacionadas o vinculadas con el delito.

266. La facultad de allanamiento y registro puede ser ejercida por un funcionario de policía de rango no inferior al de inspector o por funcionarios de rango inferior si reciben autorización por escrito de un funcionario de la primera categoría. No obstante, si en el lugar hay funcionarios de categoría inferior y la cuestión no admite demora y la persona que ocupa o controla el local está presente y su presencia es necesaria para una

investigación eficaz del delito, los funcionarios presentes pueden entrar en el local y registrarlo sin autorización.

267. La policía puede incautar todos los bienes que se encuentren en la propiedad si tiene motivos razonables para considerar que se han obtenido como consecuencia de la comisión de un delito o que son una prueba de tal delito y que es necesario encontrarla para evitar que se oculte, pierda, dañe, modifique o destruya, para lo cual se expedirá un recibo de todos los bienes incautados. Estos pueden retenerse todo el tiempo que sea necesario.

2. Interpelación y registro

268. El Código Penal otorga a los funcionarios de policía el derecho a interpelar y registrar en un lugar público o en un lugar accesible al público, incluidos los lugares que son accesibles únicamente previo pago. El registro puede ser de la persona o del vehículo. No obstante, para interpelar y registrar a alguien la policía debe tener una sospecha razonable de que el registro descubrirá la posesión de bienes que están prohibidos, se han robado o adquirido como consecuencia de un delito o pueden utilizarse para cometerlo. Asimismo, la policía tiene facultades para incautar todos los bienes descubiertos durante el registro y cuya posesión esté prohibida o que puedan estar relacionados con un delito. Los bienes incautados se retienen y el policía que realizó el registro debe redactar un informe en el que se especifiquen los bienes incautados. El registro de la persona debe ser realizado por un funcionario de policía del mismo sexo, a no ser que el infractor sea sorprendido *in fraganti* y no haya disponible un funcionario del mismo sexo.

269. Para que la policía registre un vehículo, debe estar presente el propietario. No obstante, puede haber situaciones en que el propietario no pueda estar presente, en cuyo caso el funcionario de policía solo podrá proceder al registro si tiene una orden de registro recibida de un oficial de categoría no inferior a la de inspector.

270. Por otro lado, la policía puede realizar controles de carretera, pero únicamente previa autorización por escrito de un funcionario de policía de categoría no inferior a la de inspector. Esta facultad está reconocida en el artículo 355 del Código Penal. Los controles de carretera se llevan a cabo cuando haya motivos razonables para considerar que el control de un vehículo que se encuentra o atraviesa una localidad puede dar lugar a:

- a) La detención de una persona que ha cometido o se sospecha razonablemente que ha cometido o está a punto de cometer un delito grave [es decir, sancionable con prisión];
- b) El descubrimiento de algo cuya posesión está prohibida o limitada en virtud de la ley o que está asociado de alguna manera con la comisión de un delito grave o que puede servir de prueba de la comisión de dicho delito;
- c) La detención de una persona cuyo encarcelamiento haya sido ordenado por un tribunal o cualquier otra autoridad legal o que esté en libertad de forma ilegal;
- d) La comprobación de que una persona no cumple una condición legítimamente impuesta por un tribunal;
- e) La comprobación de infracciones de alguna ley relacionada con los vehículos de motor o el código de circulación;
- f) La detención, o comprobación del paradero, de una persona sobre la que se ha introducido una alerta en el Sistema de información de Schengen; o
- g) El descubrimiento de un bien sobre el que se ha introducido una alerta en el Sistema de información de Schengen.

271. Durante el control de carretera el policía puede interceptar todos o cualquiera de los vehículos y, cuando intercepta uno de ellos, este puede ser registrado por la policía. Como en el caso de interceptación y registro en los controles de carretera, el policía puede recoger pruebas que contengan indicios de la comisión de un delito. No obstante, la policía tiene también facultades para recoger pruebas que no sean exactamente las que han dado lugar al control de carretera. La policía deberá investigar ese delito y, cuando corresponda, iniciar los procedimientos correspondientes.

3. Registro personal y corporal

272. Por exploración de las partes íntimas el Código Penal entiende un registro consistente en el examen físico de los orificios personales de una persona distintos de la boca. No se incluiría en esa categoría la búsqueda de:

- a) Una muestra de pelo distinto del pelo público;
- b) Una muestra tomada de una uña o de debajo de una uña;
- c) Una muestra obtenida por frotación de cualquier parte del cuerpo de una persona, incluida la boca pero ningún otro orificio corporal;
- d) Orina o saliva;
- e) Una huella o impresión semejante de una parte del cuerpo de una persona distinta de su mano.

273. Sólo pueden realizarse tomas de muestras íntimas con el consentimiento de la persona detenida. Si esta se niega a dar su autorización, el funcionario investigador informa al magistrado de dicha negativa y este último decidirá si la solicitud es justificable o no. Si es justificable, el magistrado visita a la persona detenida para solicitar su consentimiento; antes de ello, el magistrado explicará al detenido la naturaleza de la solicitud y las razones de la misma y las consecuencias de su aceptación o rechazo (si la rechaza, los jueces pueden extraer deducciones de esa negativa o considerarla como equivalente de la corroboración de una prueba contra la persona con respecto a la cual la negativa resulta importante) y le especificará que tiene derecho a consultar a un abogado o procurador antes de decidir si da o no su consentimiento.

274. La exploración de las partes íntimas solo se lleva a cabo después de que el magistrado haya dictado una orden de registro, lo que significa que el funcionario de policía encargado de la detención o el funcionario jefe debe solicitar al magistrado que ordene dicha exploración de las personas detenidas. Luego, el magistrado nombra a un experto (que no puede ser una persona del sexo opuesto, a no ser que sea un profesional de la medicina y la persona que va a ser objeto de registro dé su consentimiento por escrito) para que realice una exploración con las salvaguardias consideradas necesarias por motivos de decoro y comunique al magistrado sus comprobaciones. Dicho informe se remitirá sin demora al funcionario encargado de la detención o al funcionario principal.

4. Vigilancia, interceptación de cualquier forma de comunicación, escuchas telefónicas y grabación de conversaciones

275. La protección jurídica con respecto a la vigilancia e interceptación de las comunicaciones se remonta en Malta a antes de la introducción de la Ley de protección de los datos. Esta protección fue introducida por la Ley de servicios de seguridad (1996). En ella se introduce un nuevo concepto con respecto a la privacidad de las comunicaciones entre personas. Más recientemente, el Reglamento de elaboración de datos personales (sector de comunicaciones electrónicas) promulgado de conformidad con la Ley de protección de los datos, regula específicamente este aspecto dentro del sector de las comunicaciones electrónicas.

276. La Ley de comunicaciones electrónicas (Reglamento) hace referencia a la privacidad en el artículo 4. En el artículo 4 c) iii), entre los objetivos del Organismo de Comunicaciones de Malta se incluyen la promoción de los intereses de los usuarios dentro de la comunidad contribuyendo a garantizar un alto nivel de protección de los datos personales y de la privacidad. El artículo 47 1) k) hace también referencia a la privacidad en el contexto de la Ley de protección de los datos:

1) El Ministro, por recomendación del Organismo o por propia iniciativa previa consulta con este, podrá elaborar reglamentos para dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley y, en particular:

k) Establecer las obligaciones de retención de datos y normas relativas al acceso del Organismo y la policía a los datos en poder de las empresas y dictar las medidas que deberá adoptar una persona para garantizar la inviolabilidad de las comunicaciones electrónicas transmitidas y su confidencialidad y la protección de la privacidad en relación con los servicios de comunicaciones electrónicas, incluidas medidas de protección de los datos en el sector de las comunicaciones electrónicas y relacionadas con el uso de la información que puede obtenerse en el sector de las comunicaciones electrónicas para actividades de comercialización directa.

277. La privacidad y la protección de los datos se contemplan también tanto en la Ley del Organismo de Comunicaciones de Malta como en la Ley de servicios postales. El Artículo 34 de la Ley del Organismo de Radiodifusión, por su parte, enumera varios casos en los que la Autoridad tiene la facultad y el deber de examinar las denuncias relativas a la "violación injustificada de la privacidad en los programas radiofónicos o televisivos transmitidos, o en conexión con la obtención del material incluido en ellos".

278. Puede encontrarse una referencia importante a la privacidad en la Ley de protección de datos. La primera mención aparece en la frase inicial de la Ley, en la que se declara que su objetivo es "garantizar la protección de las personas contra la violación de su privacidad como consecuencia del procesamiento de datos personales y las cuestiones conexas ". La misma ley dispone que los datos personales de carácter no delicado pueden ser procesados cuando dicho procesamiento es necesario para un objetivo que responda a intereses legítimos del contralor o de un tercero a quien se faciliten datos personales, a menos que ese interés deba supeditarse al interés de proteger los derechos y libertades fundamentales del titular de los datos y, en particular, el derecho a la privacidad ". Asimismo, la Ley de protección de los datos esboza nueve principios para garantizar la protección de la información personal⁹², en concreto, para garantizar que:

- a) los datos personales se procesen de forma equitativa y legítima;
- b) los datos personales se procesen siempre de conformidad con las buenas prácticas;
- c) los datos personales solo se recopilen con fines específicos, expresamente indicados y legítimos;
- d) los datos personales no se procesen con un objetivo que sea incompatible con el que motiva la recopilación de la información;
- e) los datos personales que se procesen sean adecuados y pertinentes en relación con los objetivos del procesamiento;
- f) no se procesan más datos personales de los necesarios, teniendo en cuenta los objetivos del procesamiento;

⁹² Ley de protección de los datos, cap. 440 de la legislación de Malta, art. 7.

g) los datos personales que se procesen sean correctos y, en caso necesario, estén actualizados;

h) se tomen todas las medidas necesarias para completar, corregir, bloquear o eliminar datos en la medida en que sean incompletos o incorrectos, teniendo en cuenta los objetivos del procesamiento;

i) los datos personales no se conserven más tiempo del necesario, teniendo en cuenta los objetivos que motivaron su procesamiento.

279. Además, se establecen varios criterios teniendo en cuenta únicamente qué datos personales pueden procesarse justificadamente cuando el titular de los datos:

a) ha dado consentimiento expreso al procesamiento; o

b) ha hecho públicos los datos⁹³.

13) Los datos personales de carácter delicado pueden procesarse si se adoptan salvaguardias adecuadas y el procesamiento es necesario para que:

a) el contralor pueda cumplir sus funciones o ejercer sus derechos en virtud de la ley que regule las condiciones de empleo; o

b) los intereses vitales del titular de los datos o de alguna otra persona puedan estar protegidos y el titular de los datos sea incapaz, física o jurídicamente, de dar su consentimiento; o

c) puedan presentarse, ejercerse o defenderse reclamaciones legales.

280. Esos criterios son más estrictos cuando se trata del procesamiento de datos personales de carácter delicado que de los otros datos personales.

281. La Ley de seguridad prohíbe la interceptación de comunicaciones ("escuchas telefónicas"). Esta prohibición aparece en su artículo 15 1)⁹⁴. No obstante, la misma Ley dispone de autoridad para mantener la seguridad nacional de Malta estableciendo excepciones de esa regla general. En virtud de ella, los servicios de seguridad gozan de facultades especiales, por ejemplo de interceptación de comunicaciones, únicamente si han recibido una autorización específica por escrito del Ministro del Interior o del Primer Ministro y dichas acciones solo están permitidas en casos relacionados con la seguridad y defensa nacional y pública, incluida la lucha contra la criminalidad organizada. Asimismo, se permite la interceptación cuando la persona cuya comunicación se va a interceptar la ha autorizado. Por interceptación se entiende la obtención, posesión, deformación, destrucción, apertura, interrupción, supresión, detención, incautación, escucha oculta, vigilancia, grabación, copia, escucha y visión de comunicaciones y la extracción de información de dichas comunicaciones".

282. El Reglamento sobre el procesamiento de datos personales (sector de las comunicaciones electrónicas) aplica las disposiciones de la Directiva 2002/58/CE. La norma 5 1) establece lo siguiente: "... ninguna persona distinta del usuario escuchará, grabará, almacenará o realizará ninguna otra forma de intervención o vigilancia de las comunicaciones y los datos de tráfico asociados a ellas sin el consentimiento del usuario en cuestión". No obstante, la norma 11 admite excepciones cuando la información afecta a la

⁹³ *Ibid.*, art. 12 2).

⁹⁴ "Toda persona que intercepte o interfiera intencionadamente una comunicación durante su transmisión por correo o por un sistema de radiocomunicación o telecomunicación o por cualquier otro medio será culpable de un delito y, tras ser condenada, podrá ser sancionada, por cada delito, con pena de prisión no superior a dos años o con una multa no superior a 11.646,76 euros, o con prisión y multa".

seguridad nacional, la defensa, la seguridad pública, la prevención, la investigación, la detección y procesamiento de delitos penales o administrativos o de falta de ética profesional en las profesiones reguladas, un interés económico o financiero importante, con inclusión de las cuestiones monetarias, presupuestarias y fiscales, una función de supervisión, inspección o reglamentación asociada, incluso ocasionalmente, con el ejercicio de la autoridad oficial, la protección del suscriptor o usuario o los derechos y libertades de otros".

283. Se hace también referencia a la privacidad en la legislación subsidiaria. Se incluyen consideraciones que van desde la legislación en el sector de los servicios de salud (Tribunal de Revisión de Salud Mental (Reglamento)) a la administración y funciones de secretaría (Reglamento de consejos locales (finanzas)), la privacidad personal (Reglamento sobre la marina mercante (alojamiento de la tripulación)) o los reglamentos que hacen simplemente referencia a otras leyes que tratan de la privacidad, como la protección de los datos (Reglamento sobre los sistemas de cable (aspectos generales)).

Artículo 18

284. La iglesia ocupó una posición predominante en la estructura social de Malta. Así fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, solo la Iglesia tenía una presencia universal y funcionaba eficazmente en todos los niveles de la vida social. En la actualidad, aunque ya no se puede hablar de predominio de la Iglesia Católica en Malta, esta tiene todavía una gran influencia en la vida de la población, y la práctica religiosa continúa estando todavía relativamente generalizada.

285. El artículo 2 de la Constitución proclama la religión católica apostólica romana como religión estatal. De hecho, la religión predominante es el catolicismo romano y la mayoría de los malteses se confiesan católicos y participan en los servicios religiosos católicos. Además, el catolicismo está también presente en varios elementos de la cultura maltesa. El artículo 2 mantiene también que las autoridades de la Iglesia Católica Romana tienen el derecho y el deber de enseñar a distinguir entre el bien y el mal, y en todas las escuelas estatales se imparte la enseñanza religiosa de la confesión católica romana como parte de la educación obligatoria. No obstante, los estudiantes pueden decidir no asistir a esas clases de religión. En 2009 un total de 867 estudiantes de las escuelas públicas estaban exentos de las clases de religión⁹⁵.

286. Malta suscribió el Protocolo N° 1 al Convenio Europeo de Derechos Humanos y realizó una declaración en la que afirmaba que acepta el artículo 2 del Protocolo N° 1 (es decir, los derechos del progenitor a que sus hijos sean educados de acuerdo con sus creencias religiosas o filosóficas) solo en la medida en que ello sea compatible con los requisitos de una instrucción y capacitación eficiente y se eviten gastos públicos injustificados, teniendo debidamente en cuenta el hecho de que la abrumadora mayoría de la población de Malta es católica romana.

287. Malta, junto con los otros nueve Estados, respaldó plenamente a las autoridades italianas y presentó observaciones por escrito en el fallo *Lautsi c. Italia*, causa vista por la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la presencia del crucifijo en las aulas.

288. Tres artículos del Código Penal de Malta hacen referencia a los "Delitos contra el sentimiento religioso". El artículo 163 estipula que la denegación pública o mofa del

⁹⁵ 867 exempted from attending religion classes, *Times of Malta* (Malta, 10 de noviembre de 2009) <<http://www.timesofmalta.com/articles/view/20091110/local/867-exempted-from-attending-religion-classes.281153>> consulta realizada el 17 de febrero de 2012.

catolicismo y de sus creyentes, ministros u objetos de culto con palabras, gestos, en forma escrita (impresa o no), imágenes o medios visibles se sanciona con prisión de uno a seis meses. El artículo 164 amplió el artículo anterior a otros cultos tolerados por la ley pero con una prisión máxima de tres meses. El artículo 165 hace referencia a las acciones que impiden o perturban una función, ceremonia o servicio, sea católico o de cualquier otra religión tolerada por la ley, lo que conlleva una pena máxima de prisión de un año prorrogable por otro en el caso de amenaza de violencia. El artículo 338 o) del Código Penal tipifica como perturbación del orden público la utilización no autorizada de la indumentaria o el hábito eclesiástico.

289. Según una encuesta del Eurobarómetro realizada en 2005, el 95% de los encuestados de Malta "creen en la existencia de Dios". Otro 3% "cree que hay alguna forma de espíritu o fuerza vital", y solo el 2% "no cree que haya alguna forma de espíritu, Dios o fuerza vital"⁹⁶.

290. Según datos del Vaticano de 2006, el 93,89% de la población maltesa es católica romana, lo que hace de esta nación uno de los países más católicos del mundo. En un informe publicado el mismo año, se observó que el 52,6% de los malteses van a misa los domingos (frente al 75,1% en 1982 y el 63,4% en 1995). Aproximadamente una quinta parte de los fieles que iban a misa se declaraban miembros de una iniciativa, grupo o movimiento religioso⁹⁷.

291. Durante el período incluido en el informe no se recibieron denuncias de abusos sociales o discriminación basados en la afiliación, creencia o práctica religiosa. Tampoco se presentaron denuncias de abusos, con inclusión de los presos o detenidos por motivos religiosos en el país.

292. La mayoría de los miembros de las iglesias protestantes locales son británicos retirados que viven en el país o personas de otros países que se encuentran de vacaciones. Hay también miembros de la Iglesia Ortodoxa griega y copta, la Iglesia Baptista de la Biblia, una unión de 16 grupos de Iglesias evangélicas integradas por pentecostales y fieles de otras iglesias no confesionales, así como testigos de Jehová, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones), los adventistas del séptimo día, budistas zen y baha'ís. De un total estimado de 6.000 musulmanes, unos 5.250 son extranjeros, 600 son ciudadanos naturalizados y 150 son ciudadanos de nacimiento. Hay solo una mezquita (y dos mezquitas officiosas) y una escuela primaria musulmana. Una congregación judía cuenta con unos 100 miembros. Residen en Malta unos 4.500 migrantes en situación irregular, aproximadamente dos tercios de los cuales son musulmanes (incluidos en el total de 6.000 antes mencionado). El resto de los migrantes son miembros de varias confesiones protestantes, católicos, cristianos coptos y seguidores de formas africanas indígenas de culto o no practica ninguna religión⁹⁸.

293. A pesar de que el artículo 2 de la Constitución declara que la religión católica es la religión del Estado, las personas tienen libertad para elegir y cambiar su religión y manifestar sus creencias religiosas públicamente como consideren oportuno. La Constitución establece lo siguiente: "Toda persona tendrá en Malta entera libertad de conciencia y gozará de libre ejercicio de su respectivo culto religioso". Así pues, si el

⁹⁶ Eurobarometer Poll 2005: Social values, science and technology (enero y febrero de 2005) <http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_225_report_en.pdf> consulta realizada el 21 de febrero de 2012.

⁹⁷ <<http://www.clerus.org/clerus/dati/2008-12/05-6/proportioncathos08.htm>> consulta realizada el 21 de febrero de 2012.

⁹⁸ International Religious Freedom Report 2010 - Malta, Bureau of Democracy, Human Rights and Labour, United States Department of State <<http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2010/148961.htm>> consulta realizada el 21 de febrero de 2012.

artículo 2 es incompatible con los derechos garantizados en virtud este artículo, es decir el artículo 40, prevalecen las disposiciones de este último. Los ciudadanos tienen derecho a demandar al Gobierno si se producen infracciones de la libertad religiosa. Estas protecciones se aplican también en los casos de discriminación o persecución religiosa por particulares o por funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones.

294. No hay restricciones de las publicaciones o transmisiones religiosas ni para los grupos religiosos que poseen o gestionan medios de comunicación. La ley no sanciona ni limita de ninguna otra manera la importación, posesión o distribución de obras, prendas o símbolos religiosos. Tampoco hay restricciones del uso de atuendos religiosos. Todas las organizaciones religiosas tienen los mismos derechos jurídicos. Las organizaciones religiosas pueden poseer bienes, incluidos edificios, y sus líderes pueden celebrar matrimonios y realizar otras funciones. Los grupos religiosos no están obligados a obtener licencias ni a inscribirse. Las afiliaciones religiosas no se mencionan en los pasaportes ni en otros documentos oficiales. No hay ninguna limitación para la formación de partidos políticos basados en una fe o creencia religiosa determinada o en la ausencia de creencias o en la interpretación de doctrinas religiosas⁹⁹.

Artículo 20

295. La Constitución no prohíbe la propaganda a favor de la guerra, pero la legislación maltesa califica los crímenes de guerra como delitos penales. El artículo 54D de Código Penal enumera los delitos que pueden considerarse como crímenes de guerra. Son los siguientes:

- a) Infracciones graves de los Convenios de 1949 (homicidio intencional, tortura o tratos inhumanos, el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud, etc.);
- b) Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales dentro del marco del derecho internacional (dirigir intencionalmente ataques contra la población civil, u objetos civiles, dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, material, unidades o vehículos participantes en una misión de mantenimiento de la paz, etc.);
- c) Violaciones graves de los cuatro Convenios de Ginebra, cometidas contra personas que no participan activamente en las hostilidades (miembros de la Fuerzas Armadas que han depuesto las armas) y los que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, lesiones, detención o cualquier otra causa, actos de violencia contra la vida de una persona, los ultrajes contra la dignidad personal, la toma de rehenes y las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin sentencia previa. No se incluyen situaciones de disturbios o tensiones interiores, como motines, actos esporádicos y aislados de violencia u otros actos análogos;
- d) Otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados que no sean de índole internacional, dentro del marco establecido del derecho internacional, como dirigir intencionadamente ataques contra edificios, material, unidades y medio de transporte sanitarios y contra el personal, instalaciones, material, unidades o vehículos participantes en misiones de mantenimiento de la paz, dirigir intencionadamente ataques contra edificios dedicados al culto religioso, la educación, las artes, las ciencias o la benevolencia, los monumentos históricos, los hospitales y otros lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, saquear una ciudad o una plaza, etc. En cambio, no se aplica a

⁹⁹ *Ibid.*

situaciones de disturbios o tensiones interiores, como motines, actos esporádicos y aislados de violencia u otros actos análogos.

296. Toda persona que públicamente tolere, niegue o trivialice ofensivamente los crímenes de guerra, será castigado con pena de prisión de 8 meses a 2 años.

297. El artículo 82A del Código Penal dice lo siguiente. "Toda persona que emplee cualquier amenaza, expresión o comportamiento abusivo o insultante, exhiba cualquier material escrito o impreso que sea amenazante, abusivo o insultante o se comporte de cualquier otro modo que, teniendo en cuenta todas las circunstancias, pueda fomentar la violencia o el odio raciales podrá ser condenada a una pena de prisión de entre 6 y 18 meses". Por violencia u odio raciales se entenderá la violencia o el odio contra un grupo de personas de Malta en razón de su color, raza, religión, ascendencia, nacionalidad (incluida la ciudadanía) u origen étnico o nacional, o contra un miembro de ese grupo.

298. Durante el período incluido en el informe no se produjo ningún crimen de guerra.

Artículos 19, 21 y 22

299. El derecho a la libertad de asamblea y asociación se incluye en el ámbito del derecho a la libertad de palabra o, en sentido más amplio todavía, a la libertad de expresión.

300. El derecho de expresión, asociación y asamblea tiene derogaciones permisibles, es decir, excepciones a las normas de derechos humanos. La derogación debe cumplir cinco requisitos:

- a) La excepción debe estar contenida en una ley;
- b) La interferencia debe estar en conformidad con la legislación, es decir, autorizada por la ley;
- c) La acción realizada en virtud de esa ley debe responder a motivos razonables;
- d) Debe responder a motivos razonables en aras de un interés público expresamente mencionado en la Constitución; y
- e) La excepción (derogación), además de limitarse únicamente a las cuatro derogaciones mencionadas, debe estar razonablemente justificada en una sociedad democrática.

1. Libertad de expresión

301. El artículo 41 de la Constitución establece lo siguiente: "Salvo con su consentimiento o en virtud del ejercicio de la patria potestad, ninguna persona podrá ser obstaculizada en el ejercicio de su libertad de expresión, incluyendo la libertad de expresar opiniones sin interferencia de nadie, la libertad de recibir ideas e información asimismo sin interferencias, la libertad de comunicar ideas e información sin interferencias (tanto si la comunicación se destina al público en general como si se destina a una persona o clase determinada de personas) y la libertad frente a toda intervención de su correspondencia ". Así pues, este artículo garantiza que haya libertad de palabra y de prensa, en otras palabras, libertad de mantener opiniones y comunicarlas. Una prensa independiente, un poder judicial eficaz y un sistema político democrático se combinan en Malta para asegurar la libertad de palabra y de prensa, incluida la libertad académica.

302. En Malta gozan de libertad de expresión no solo los malteses sino también toda persona que se encuentre en el país. Dicha libertad incluye el derecho a intervenir en las reuniones públicas.

303. En febrero de 2012¹⁰⁰, el Ombudsman, Presidente Emérito del Tribunal Supremo Joseph Said Pullicino, presentó recomendaciones sobre las composiciones y funciones de una nueva junta de Clasificación de películas que sustituirá a la Junta de Clasificación de obras cinematográficas y teatrales. Esta recomendación se presentó después de que la distribuidora KRS denunciara que el 28% de las películas distribuidas localmente recibían una clasificación más alta que en el Reino Unido. En la legislación propuesta, el Ombudsman sugería la abolición de la antigua Junta y la creación de una nueva, con funciones semejantes a las de la Junta actual.

304. El Ombudsman dijo que las personas nombradas deberían representar a la comunidad maltesa e incluir una combinación de hombres y mujeres de diferentes edades. La junta debería contar con personas que:

- a) Pueden evaluar la calidad y las preocupaciones de las personas vulnerables y con necesidades especiales;
- b) Conozcan bien las cuestiones que afectan a los niños y los jóvenes, bien en calidad de progenitores o gracias al empleo u otras actividades anteriores.

305. Asimismo, los miembros deberían poder expresar sus opiniones, valorar las opiniones de otros y ser lo bastante flexibles como para cambiar de opinión a raíz de las conversaciones con los otros encargados de la clasificación.

306. La Junta puede decidir examinar junto con el solicitante la película que se va a clasificar antes de concretar la certificación. La legislación propuesta establece que la Junta de Películas, además de la clasificación, publique avisos que contengan información adicional acerca del contenido de las películas clasificadas (por ejemplo, expresiones malsonantes, violencia, uso de drogas, desnudos, etc.), práctica que todavía no se ha instaurado en Malta. Esta propuesta representa un cambio en la política, pues en vez de estar basada exclusivamente en la censura hace hincapié en la autorregulación, que supone necesariamente un público adulto, lo bastante maduro como para evaluar el contenido de una obra teatral o una película y decidir en consecuencia si asiste a la representación o no. Aunque la nueva propuesta prescinde de la censura, la Junta conservará cierto grado de control, y podrá proyectar previamente las películas para clasificar su contenido de acuerdo con la edad del público. La principal razón de conservar este nivel de control es proteger a los niños y personas vulnerables así como el bien común.

307. En su informe el Ombudsman escribió lo siguiente:

En la actualidad, no tiene ya sentido que el Estado imponga en términos absolutos sus propias normas de moralidad o conducta a los adultos. Por ello, más que en la censura, los nuevos reglamentos deben hacer hincapié en una evaluación objetiva que sirva de orientación y ayude a lograr una sociedad bien informada capaz de tomar decisiones, en vez de imponer una protección no deseada que limite obligatoriamente la libertad de decisión de los adultos¹⁰¹.

2. Calumnia y difamación

308. Las disposiciones sobre la calumnia y la difamación están recogidas en la Ley de prensa¹⁰². Su artículo 3 establece que "los delitos mencionados en esta parte (es decir, la

¹⁰⁰ Joseph Said Pullicino, "The ombudsman on the role, functions and policies of the Board of Film and Stage Classifiers"
<<http://c256.r56.cf3.rackcdn.com/8bd7007efa408dcacbe789da69bd9c031554461705.pdf>> consulta realizada el 20 de febrero de 2012.

¹⁰¹ *Ibid.* 17.

¹⁰² Cap. 248 de la legislación de Malta.

parte II) de la Ley se cometen mediante la publicación o distribución en Malta de material impreso, cualquiera que sea el lugar de origen, o mediante emisiones de radio o televisión". Entre los delitos que se incluyen en esa parte figuran la incitación a atentar contra la vida o la libertad del Presidente, etc., el menosprecio de la bandera, el racismo y delitos semejantes, los libelos obscenos, la divulgación de secretos profesionales, los libelos difamatorios, etc.

309. La Ley de prensa de Malta no define la calumnia ni la difamación. No obstante, los tribunales han adoptado la norma de *in medio stat virtus*, que hace referencia al modo de pensar del hombre medio. El significado de las palabras puede depender de la opinión pública y de las circunstancias o el contexto en que se publicaron. Si se comprueba que una persona es culpable de calumnia, podrá ser sancionada con una multa. No obstante, la Ley establece lo que se conoce con el nombre de privilegio condicional. Este concepto se agregó mediante las enmiendas de 1996 de la Ley de prensa. Entre 1974 y 1996 se había observado que se necesitaban ciertas disposiciones generales para algunas publicaciones o transmisiones que debían gozar de inmunidad de esos procedimientos, naturalmente siempre que se cumplieran las disposiciones de la ley. El artículo 12A puede ser invocado por los editores. En concreto, dicha disposición establece lo siguiente:

En las actuaciones incoadas en virtud de esta Ley, el editor podrá esgrimir como defensa que la información publicada era una reproducción exacta de las palabras pronunciadas en un acto público importante por una persona identificada que sabía o podía saber razonablemente que el contenido de esas palabras podían publicarse en un periódico o en un medio de difusión y que la publicación de dichas palabras estaba razonablemente justificada en una sociedad democrática.

310. Por otro lado, el artículo 21 establece el derecho de réplica y, por lo tanto, toda persona cuyas acciones o intenciones se hayan interpretado indebidamente o que haya visto vulnerado su honor, dignidad o reputación o haya sufrido una injerencia en su vida privada en un periódico o una transmisión tiene derecho a interponer una demanda y a hacer que se publique una declaración que permita rechazar esas afirmaciones o explicar la situación. La réplica debe aparecer en un artículo independiente y sin ninguna interpolación ni comentario u otro material que no forme parte de la misma. Se considera ilícito abreviar o corregir esa respuesta de manera que impida el ejercicio eficaz del derecho de réplica reconocido en el artículo. La prohibición de comentar o corregir la réplica se introdujo en 1996. La situación es semejante en las transmisiones, teniendo debidamente en cuenta el momento en que se efectuó la transmisión para que llegue al mismo público. Este derecho caduca una vez transcurrido un mes desde la fecha en que se publicó el periódico o se efectuó la transmisión. Asimismo, no se reconoce el derecho de réplica en el caso de comunicaciones privilegiadas.

311. El artículo 32 contiene la siguiente lista de documentos privilegiados:

- a) publicaciones realizadas en cumplimiento de una Ley del Parlamento o con autorización del Presidente de Malta o de la Cámara de Representantes;
- b) publicaciones consistentes en comunicaciones entre funcionarios públicos o entre estos y contratistas de la Administración Pública o funcionarios de sociedades públicas, informes de investigaciones llevadas a cabo de acuerdo con una ley o declaraciones de funcionarios públicos formuladas de buena fe en pro de la seguridad nacional, la integridad territorial, la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención de la delincuencia o la protección de la salud o la moral;
- c) publicaciones de informes bienintencionados sobre los debates de la Cámara de Representantes;

d) publicaciones de informes de los procedimientos de un tribunal de justicia en Malta.

3. Libertad de reunión y de asociación pacífica

312. El derecho a asociarse libremente con cualquier persona es reconocido y proclamado en el artículo 42 de la Constitución de Malta: "1) A no ser con su propio consentimiento o en virtud del ejercicio de la patria potestad, no se podrá impedir a nadie el disfrute de su derecho de reunión y asociación pacífica, es decir, del derecho a reunirse libremente y en paz y a asociarse de modo pacífico con terceros y en especial a formar sindicatos u otras asociaciones o uniones para la salvaguardia de sus intereses y a pertenecer a los mismos". Como puede observarse, hay una estrecha vinculación entre este artículo y el artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos: "1) Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación, incluido el derecho a fundar, con otras, sindicatos y de afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses". Ambos artículos hacen especial referencia a aplicaciones determinadas del derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos y a crear asociaciones para la protección de los intereses, como un partido político, y de asociarse a ellas.

313. La Constitución de Malta incluye en su artículo 117 1) una disposición importante que limita el ejercicio del derecho a la libertad de asociación con fines políticos: "No será lícito fundar ni mantener ninguna asociación de personas organizadas y entrenadas o equipadas para el despliegue de fuerza física destinada a promover objetivos políticos, ni pertenecer a tales asociaciones ". Así pues, este artículo prohíbe las asambleas ilícitas cuya finalidad es promover objetivos políticos por medio de la violencia y el uso o exhibición de fuerza física.

314. Cuando una persona convoca ilegalmente una asamblea de 10 o más personas, puede ser sancionada con pena de uno a tres meses de cárcel o una multa. Por otro lado, toda persona que participa activamente en una asamblea de 10 o más personas podrá ser sancionada con pena de prisión de 3 días a 3 meses o una multa.

315. Esta infracción debe distinguirse de la asamblea ilegal con ánimo de sedición. Si tres o más personas se reúnen ilegalmente y, con discursos públicos, exhibición de banderas, inscripciones u otros medios o instrumentos, incitan al odio o al desprecio hacia la persona del Presidente de Malta o el Gobierno, cada una de esas personas podrá ser sancionada con pena de prisión de 6 a 18 meses.

4. Sindicatos

316. La Constitución de Malta no garantiza meramente el derecho de asociación sino que especifica también el derecho a crear sindicatos, siempre con un objetivo legítimo. La Constitución reconoce a los trabajadores el derecho a asociarse libremente, y los trabajadores ejercen este derecho en la práctica. El primer sindicato se constituyó en Malta el 15 de julio de 1945.

317. Según el informe anual del Director del Registro de Sindicatos, a finales de junio de 2011 había 50 organizaciones inscritas, a saber 32 sindicatos y 18 asociaciones de empleadores (cuadro 18). Al 30 de junio de 2011 había 95.369 empleados miembros de esas organizaciones¹⁰³. Los dos mayores sindicatos son el Sindicato General de Trabajadores, con 43.002 afiliados, y el Sindicato Haddiema Maghqudin, con 26.592. La

¹⁰³ Industrial and Employment Relations: Report 2010/11
 <http://industrialrelations.gov.mt/industryportal/publications_and_archives/archives1/trade_union_reports.aspx> consulta realizada el 8 de febrero de 2012.

principal asociación de empleadores es la Asociación de Comerciantes y Minoristas Generales, con 7.863 miembros. La afiliación a los sindicatos y las asociaciones de empleadores está igualmente abierta a las personas de ambos sexos.

318. Malta es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en varios convenios de la OIT, entre los que figuran el Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921 (Nº 11), el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (Nº 87), el Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971 (Nº 135) y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (Nº 98). En el cuadro 19 del anexo I puede encontrarse la lista completa de los convenios ratificados por Malta.

319. Las normas y procedimientos necesarios para fundar un sindicato o asociación de empleadores figuran en la Ley de empleo y relaciones laborales. En ella se dispone que basta un mínimo de siete personas para registrar el estatuto de un sindicato o una asociación de empleadores ante el Director del Registro de Sindicatos. A los fines de la inscripción, el estatuto debe contener determinados detalles que se establecen en la ley. Son, entre otros, los siguientes: nombre del sindicato o asociación de empleadores, fines y forma aplicables para autorizar el destino o la inversión de los bienes o recursos económicos pertenecientes al sindicato o asociación, procedimiento de elección de un órgano rector y su renovación periódica e infracciones por las que el sindicato o asociación puede expulsar a un afiliado o adoptar otras medidas disciplinarias.

320. El Director del Registro de Sindicatos, después de verificar la licitud de los objetivos del sindicato o asociación, lo inscribe y expide un certificado que así lo atestigua. Antes del registro, ningún afiliado ni dirigente del sindicato puede cumplir acto alguno en su nombre, y la infracción respectiva puede sancionarse con una multa de no más de 1.164,69 euros. Si el Director del Registro de Sindicatos, por cualquier razón, se niega a llevar a cabo la inscripción, puede recurrirse ante el Tribunal de Apelación, que decidirá al respecto.

321. Los miembros de las fuerzas del orden, de acuerdo con la definición del artículo 47 de la Constitución de Malta, están excluidos del título II (relativo a los sindicatos) de la Ley de empleo y relaciones laborales. Según el artículo 47 de la Constitución, las fuerzas del orden están integradas por los siguientes componentes:

- a) La marina, el ejército de tierra y el ejército del aire del Gobierno de Malta;
- b) La Fuerza de Policía de Malta;
- c) Cualquier otra fuerza de policía establecida mediante la legislación en Malta;
- d) El servicio de Prisiones de Malta.

322. Según el artículo 34 de la Ley sobre la Policía, 1961, constituye infracción disciplinaria que cualquier funcionario de policía sea miembro de cualquier sindicato o cualquier órgano u asociación adherido a un sindicato. El Reglamento de la Fuerza de Policía de Malta¹⁰⁴ dispone el establecimiento de la Asociación de Policía de Malta. Esa Asociación tiene por propósito principal señalar a las autoridades de policía todas las cuestiones que afectan al bienestar y la eficacia de la fuerza de policía. La Asociación también puede ocuparse de cuestiones relativas a la disciplina, los traslados, los ascensos individuales y demás cuestiones que afectan a las personas. La Asociación está formada por todos los miembros de la fuerza de policía con grado inferior al de superintendente.

323. El artículo 67 de la Ley de empleo y relaciones laborales enumera, además, otros dos casos en que se limita la participación en sindicatos. El primero se refiere a las situaciones en que el Primer Ministro declara que el titular de determinado puesto no puede

¹⁰⁴ S.L. 164.01.

formar parte de un sindicato respecto del cual pueda tener que representar o asesorar al Gobierno en las relaciones laborales con el sindicato que representa a los empleados. El segundo caso es el de las personas que ocupan puestos de dirección o ejecutivos en cualquier empresa, órgano creado por la ley, sociedad o asociación o cualquier otro organismo con personalidad jurídica propia (en adelante, "empleador institucional ") cuando ese puesto obligaría a su titular a representar o asesorar a su empleador institucional en sus relaciones con el sindicato o los sindicatos que representan a los otros empleados. Constituye una condición implícita en el contrato de trabajo que el titular de ese puesto no debe estar afiliado a ningún sindicato mientras ocupe el puesto. El número de personas que tienen restringida la posibilidad de afiliarse a sindicatos debido a esta disposición no puede exceder de tres respecto de cada empleador institucional con un máximo de 200 empleados, ni de siete en el caso de un empleador institucional con más de 200 empleados. El empleador, además, debe dar aviso escrito de este hecho a los sindicatos.

324. Los controladores de tráfico aéreo, el personal de la Sección de Extinción de Incendios del aeropuerto y otras categorías de profesiones cuyo derecho de huelga está excluido o limitado por tratarse de servicios esenciales conforme al artículo 64 4) de la Ley de empleo y relaciones laborales tienen, sin embargo, pleno derecho a fundar sindicatos y adherirse a ellos.

325. No existe ninguna restricción impuesta por la ley ni por la práctica administrativa al derecho a formar federaciones y asociarse a sindicatos u organizaciones sindicales internacionales.

5. Derecho a la huelga y restricciones de ese derecho

326. Como se establece en la Ley de empleo y relaciones laborales, todos los trabajadores, con escasas excepciones, tienen derecho a la huelga en virtud de una decisión dictada por un sindicato como consecuencia de un conflicto laboral. El artículo 64 4) de dicha Ley establece claramente que, siempre que una persona esté en huelga como consecuencia de un conflicto laboral, tal acto no podrá dar lugar a una acción por incumplimiento del contrato de trabajo a menos que viole un acuerdo laboral, una transacción, una decisión o un acuerdo vinculante. El empleador no puede despedir al trabajador en huelga y no puede discriminar contra él. Además, el período durante el cual el trabajador ha estado en huelga no constituye interrupción de los servicios que ha prestado.

327. El artículo 64 4) establece lo siguiente:

Todo acto realizado por una persona como consecuencia de un conflicto de trabajo y en cumplimiento de una decisión dictada por un sindicato, independientemente de que la persona pertenezca o no a él, solo dará lugar a acción de daños y perjuicios si constituye un incumplimiento del contrato de trabajo; y cualquier acto de esa clase que no constituya incumplimiento de un contrato colectivo, transacción, decisión o acuerdo ... o una decisión o sentencia judicial, no dará derecho, por sí solo, a que el empleador rescinda el contrato de trabajo ni a que discrimine contra cualquier persona que realice el acto mencionado, y no constituirá interrupción de los servicios prestados por esa persona.

328. Ciertas profesiones están excluidas del derecho de huelga, mientras que otras tienen limitaciones de ese derecho debido a que prestan servicios esenciales a la comunidad. El derecho de huelga está prohibido en el caso de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía.

329. Otra categoría se refiere a las profesiones sujetas a limitaciones por su vinculación con servicios esenciales. De acuerdo con la enumeración exhaustiva del artículo 64 6) de la Ley de empleo y relaciones laborales, la limitación afecta a las siguientes personas:

- a) Los controladores de tráfico aéreo en el Aeropuerto Internacional de Malta y los miembros de su Sección de Extinción de Incendios;
- b) Los miembros de la Fuerza de Asistencia y Rescate;
- c) Las personas que trabajan en servicios de pilotaje y fondeo, remolque, extinción de incendios, atención médica y lucha contra la contaminación que se requieran en casos de emergencia portuaria;
- d) El número mínimo de personas necesario para evitar que se pongan vidas en peligro debido a la falta de importación o descarga en Malta de trigo, cereales, gas de uso doméstico, combustible de aviación, combustible para el funcionamiento de los servicios de transporte, generación de energía y distribución de agua potable, en la forma convenida con el empleador respectivo y el sindicato reconocido o, a falta de tal acuerdo, en la forma decidida por el órgano de control competente o, de no existir tal órgano, por el Tribunal de Trabajo;
- e) El número mínimo de personas que se requiera para garantizar la producción, suministro y distribución de agua y electricidad en la forma convenida por el respectivo empleador y el sindicato reconocido o, a falta de tal acuerdo, según resuelva el Tribunal de Trabajo;
- f) El número de personas que se requiera para mantener los servicios permanentes e ininterrumpidos que se enumeran en la Lista adjunta a esta Ley y que se requieran para atender permanentemente el suministro público de servicios esenciales a la comunidad;
- g) El número de personas de los puestos que el Ministro responsable del transporte, mediante aviso en la Gaceta, pueda considerar necesarios para prestar la mitad de los servicios habituales de transporte de pasajeros en Malta y Gozo y la mitad de los servicios públicos regulares de transbordadores entre Malta y Gozo, dándose por supuesto como condición implícita del contrato laboral de todo trabajador empleado en los servicios de transporte público de pasajeros y servicios de transporte regular por transbordador que dicho empleado estará obligado a desempeñar las funciones establecidas por su empleador a fin de poder disponer del número de empleados designados en la forma antes indicada, y todo empleado que no desempeñe esas funciones sin justificación podrá ser despedido.

330. La Ley sobre las Fuerzas Armadas de Malta estipula que toda persona sujeta a la ley militar que realice huelga incurre en insubordinación y comete un delito. La sanción no puede ser superior a dos años si el delito no se cometió durante el servicio activo ni supuso el empleo de la violencia contra un superior. Así se indica expresamente en el artículo 46 1) de dicha Ley, en el que se dispone lo siguiente: "Toda persona sujeta a la ley militar que realice huelga o recurra a la violencia, o la oponga, a su superior... podrá ser condenado a pena de prisión o cualquier pena menor establecida por la presente Ley".

Artículo 23

1. Significado de "familia" en la sociedad maltesa

331. La sociedad de Malta concede gran importancia a la familia como unidad formada en gran medida por la unión de un hombre y una mujer en matrimonio, y comprende a los hijos que tengan como descendencia natural o hayan adoptado. Las familias monoparentales también están reconocidas, pero no lo están los matrimonios entre personas del mismo sexo ni los matrimonios polígamos. Baldacchino¹⁰⁵ describe la familia de Malta

¹⁰⁵ Godfrey Baldacchino, *Introducing Social Studies: A Maltese Reader*.

como una "familia nuclear modificada", porque no son pocos los casos en que los padres viven con sus hijos después de que estos se han casado y tienen sus propios hijos. Tampoco es extraño que los padres vivan muy cerca de sus hijos casados y colaboren en diversas tareas del hogar, incluido el cuidado de los niños.

332. El artículo introductorio (art. 2) del Código Civil especifica que "la ley promueve la unidad y estabilidad de la familia", pero el Código no contiene ninguna definición del término familia. Otros artículos del mismo libro del Código Civil indican que la ley tiene el objetivo de proteger el matrimonio y que la idea básica de la familia es la de una pareja casada y sus hijos. El Código Civil reglamenta los derechos y obligaciones entre los cónyuges, sus derechos y obligaciones respecto de sus hijos y sus derechos sucesorios recíprocos. En cambio, con arreglo a la Ley de Seguridad Social, la familia comprende a dos o más personas que, en opinión del Director de Seguridad Social del Gobierno de Malta, conviven constituyendo una familia.

333. El derecho a la vida privada y familiar está reconocido en el artículo 32 c) de la Constitución, sin ningún condicionamiento por motivos de raza, lugar de origen, opiniones políticas, color, ni sexo.

334. El matrimonio sigue contando con gran aceptación en Malta y Gozo, y el número de matrimonios ha sido más bien constante durante el último decenio. El Estado reconoce tanto el matrimonio civil como el religioso. En 2011 se celebraron 824 matrimonios civiles (36,5%) y 1.436 (63,5%) matrimonios religiosos, lo que significa que hubo un total de 2.260. Los matrimonios religiosos siguen siendo más numerosos que los civiles (véase el cuadro 20 del anexo).

335. La edad media del primer matrimonio en Malta en 2010 fue de 28,0 años en las mujeres y 30,6 en los varones¹⁰⁶. Está en aumento el número de jóvenes que optan por casarse a una edad más avanzada porque prefieren continuar sus estudios superiores y casarse una vez terminados estos.

336. El referendo sobre el divorcio se celebró en Malta el 28 de mayo de 2011 para consultar al electorado sobre la introducción del divorcio, y la mayoría de los votantes aprobaron la legislación del divorcio (el 53,2% votaron a favor y el 46,8% en contra). Como consecuencia del referendo, se promulgó el mismo año una ley que autoriza el divorcio en determinadas condiciones. Por ejemplo, una de las condiciones es que los cónyuges hayan vivido separados al menos durante cuatro años, en otras palabras, los cónyuges que solicitan el divorcio deben estar separados jurídicamente o de hecho. Otra condición es que no haya ninguna perspectiva razonable de reconciliación entre los cónyuges. La última condición es que los cónyuges y sus hijos reciban una pensión alimenticia suficiente¹⁰⁷. A finales del mismo año de entrada en vigor del proyecto de ley, es decir 2011, se habían recibido 166 solicitudes de divorcio y otras 13 solicitudes de divorcio de personas que habían obtenido ya la separación. Asimismo, la cohabitación no solo es cada vez más habitual entre las personas separadas legalmente o de hecho, sino también entre personas que nunca contrajeron matrimonio. En 2011 el Tribunal Civil aprobó al menos¹⁰⁸ 491 decretos de separación.

¹⁰⁶ Malta in Figures 2011: General Statistics, NSO Publication
<http://www.nso.gov.mt/statdoc/document_file.aspx?id=3192> consulta realizada el 9 de febrero de 2012.

¹⁰⁷ Código Civil, cap. 16 de la legislación de Malta, art. 66B.

¹⁰⁸ Se utiliza la expresión "al menos" debido a que las estadísticas solo tienen en cuenta a las mujeres que recuperaron el apellido de soltera.

2. Derechos del hombre y la mujer a contraer matrimonio con pleno y libre consentimiento

337. El matrimonio se celebra entre un hombre y una mujer que se presentan por su voluntad propia y libre y que gozan de la capacidad de comprender los derechos y obligaciones derivados del matrimonio.

338. La edad mínima para contraer matrimonio es de 16 años para ambos sexos. El consentimiento pleno y libre de ambas partes para el matrimonio es indispensable, y si está viciado determina la nulidad del matrimonio. Si cualquiera de los contrayentes no ha alcanzado la mayoría de edad, el matrimonio no puede contraerse sin el consentimiento de la persona que ejerce la patria potestad. En ausencia de ese consentimiento, el Tribunal de Jurisdicción Voluntaria puede conceder su autorización para el matrimonio cuando así se solicita.

339. No puede contraerse matrimonio entre las siguientes personas:

- a) Un ascendiente y un descendiente en línea directa;
- b) Un hermano y su hermana o su media hermana;
- c) Personas vinculadas por afinidad en línea directa;
- d) El adoptante y el adoptado, o un descendiente o cónyuge de la persona adoptada.

340. Además, los contrayentes no deben estar vinculados por un matrimonio anterior. Si cualquiera de ellos contrae segundo matrimonio en vigencia del primero, el segundo es nulo¹⁰⁹ y la persona que incurre conscientemente en el delito de bigamia puede ser sancionada con pena de prisión de 13 meses a 4 años¹¹⁰.

341. El matrimonio se rige en Malta por la Ley del matrimonio de 1975 en lo que respecta a las formalidades de su celebración, mientras que el Código Civil establece los derechos y obligaciones derivados del matrimonio. En Malta el matrimonio puede contraerse en forma civil o religiosa. Ambas tienen igual jerarquía ante la ley. Para que sean válidos, deben estar en conformidad con los procedimientos establecidos por la ley. De lo contrario, el matrimonio puede anularse mediante demanda promovida dentro de los dos años siguientes a su celebración.

3. Formalidades previas al matrimonio

342. Las personas que desean contraer matrimonio deben solicitar por escrito, por lo menos seis semanas antes de la fecha de celebración, que el encargado del Registro de Matrimonios publique los edictos correspondientes. La solicitud debe ser firmada por ambos contrayentes y debe contener una declaración jurada de ambos en el sentido de que no tienen conocimiento de ningún impedimento legal para que el matrimonio pueda realizarse. Los edictos de matrimonio deben recogerse en el registro de matrimonios, expuesto al público, y en otro lugar en que los avisos oficiales se exhiban habitualmente en la ciudad, aldea o parroquia del domicilio de cada uno de los contrayentes. Los edictos son accesibles al público durante ocho días consecutivos, sin contar los sábados y domingos ni los días festivos públicos, y deben contener el nombre, apellido, lugar de nacimiento y domicilio de cada uno de los contrayentes, el lugar en que se celebrará el matrimonio y los nombres de los progenitores de los contrayentes. Es nulo el matrimonio celebrado antes del sexto día de exhibición de los edictos o después de transcurridos tres meses desde su primera exhibición. Vencido este plazo, la publicación de los edictos debe iniciarse

¹⁰⁹ Ley sobre el matrimonio, cap. 255 de la legislación de Malta, art. 6.

¹¹⁰ Código Penal, cap. 9 de la legislación de Malta, art. 196.

nuevamente. En circunstancias excepcionales el encargado del Registro puede abreviar el plazo de publicación de los edictos, por ejemplo cuando uno de los contrayentes se encuentra en peligro inminente de muerte.

343. Después de la publicación de los edictos, el encargado del Registro, si considera que no existe impedimento legal para la celebración del matrimonio, expide un certificado de la publicación de los edictos y a partir de entonces puede celebrarse el matrimonio. En caso de que los contrayentes consideren que el encargado del Registro ha denegado injustamente la expedición del certificado, pueden recurrir al Tribunal de Jurisdicción Voluntaria, y este decide si corresponde o no publicar los edictos.

4. Celebración del matrimonio

344. El matrimonio se celebra ante el oficiante o el encargado del Registro, según el caso, y en presencia de dos testigos, que deben ser mayores de 18 años. Se pregunta a cada uno de los contrayentes si desea tomar al otro como legítimo cónyuge; y tras la declaración de su consentimiento sin reservas se les declara marido y mujer.

345. El matrimonio surte efectos para todos los fines legales cuando se ha otorgado, y entregado para su inscripción, la partida de matrimonio correspondiente.

5. Disolución del vínculo matrimonial

346. El vínculo matrimonial se disuelve por la muerte de cualquiera de los cónyuges o la declaración de nulidad del matrimonio. También existe la posibilidad de registrar en Malta una sentencia de divorcio dictada por un tribunal extranjero cuando uno de los cónyuges está domiciliado o es nacional del país en que se dictó esa sentencia. A partir del año pasado (2011), el divorcio puede obtenerse también de los tribunales locales.

347. Cuando se anula un matrimonio, se considera siempre que han existido los efectos de un matrimonio válido respecto de los hijos nacidos o concebidos durante el matrimonio declarado nulo.

348. Las causas que dan lugar al vicio de consentimiento y, en consecuencia, a la nulidad del matrimonio tienen que haber existido durante su celebración. Así se declaró en *MM c. JM*, sentencia dictada por el Tribunal de Apelación el 9 de marzo de 1994. El Tribunal declaró que el esposo tenía capacidad intelectual suficiente para contraer matrimonio en el momento en que se celebró; la circunstancia de que hubiera comenzado a sufrir una enfermedad mental después de la celebración del matrimonio no era fundamento suficiente para anularlo. En otra sentencia, *E c. F*, dictada por la Primera Sala del Tribunal Civil el 1 de julio de 1994, el Tribunal declaró que la circunstancia de que la esposa, al contraer matrimonio, excluyera la posibilidad de tener hijos mostraba que había simulado su propósito de contraer matrimonio y, en consecuencia, este era nulo.

349. Malta reconoce las anulaciones tanto civiles como religiosas, que están reguladas por diferentes leyes y son tramitadas por diferentes tribunales. Las anulaciones civiles se rigen por la Ley del matrimonio¹¹¹ y son competencia de los tribunales civiles. En cambio, las anulaciones religiosas están reguladas por el Derecho Canónico y son decididas por el Tribunal Eclesiástico. El año pasado hubo 30 anulaciones religiosas y 163 anulaciones civiles (cuadro 21).

350. Hasta 1975 el matrimonio se rigió en Malta por el Derecho Canónico, y el Tribunal Eclesiástico tenía competencia para decidir en las cuestiones relacionadas con su validez. Al dictarse la Ley del matrimonio, se reconoció a los tribunales civiles competencia exclusiva en todos los asuntos referentes a la validez del matrimonio y la separación

¹¹¹ Cap. 255 de la legislación de Malta.

personal. El Estado solo reconoce las sentencias dictadas por los tribunales civiles. En 1995 se introdujeron modificaciones en la Ley del matrimonio para establecer el reconocimiento civil de las sentencias dictadas por los tribunales eclesiásticos. Siempre que una de las partes en el proceso sea ciudadano de Malta, el registro es efectuado por el Tribunal de Apelación, que comprueba que se hayan cumplido determinados procedimientos y que las partes hayan gozado de determinados derechos. El Tribunal tiene jurisdicción para examinar lo siguiente:

- La competencia del Tribunal para entender en la causa;
- La legitimación de las partes demandante y demandada;
- Que no haya adquirido calidad de cosa juzgada ninguna sentencia contraria que obligue a las partes, dictada por un tribunal por los mismos fundamentos de nulidad.

351. El artículo 33 de la Ley del matrimonio reconoce un pronunciamiento dictado en el extranjero que repercuta en la situación de una persona casada, si la decisión ha sido dictada por un tribunal competente del país en el que esté domiciliada cualquiera de las partes en las actuaciones o del cual sea ciudadano cualquiera de las partes. De esa manera, al incorporar en sus leyes el reconocimiento de los decretos de divorcio extranjeros, el Estado maltés reconoció la disolubilidad de los matrimonios. Este artículo es un reflejo del contenido de Reglamento Bruselas II bis (CE 2201/2003). El artículo 3 de dicho Reglamento determinó la jurisdicción sobre el divorcio, la separación judicial y la anulación en la forma siguiente:

1) En los asuntos relativos al divorcio, la separación judicial y la nulidad matrimonial, la competencia recaerá en los órganos jurisdiccionales del Estado miembro:

- a) en cuyo territorio se encuentre:
 - la residencia habitual de los cónyuges; o
 - el último lugar de residencia habitual de los cónyuges, siempre que uno de ellos aún resida allí, o
 - la residencia habitual del demandado; o
 - en caso de demanda conjunta, la residencia habitual de uno de los cónyuges; o
 - la residencia habitual del demandante si ha residido allí durante al menos un año inmediatamente antes de la presentación de la demanda; o
 - la residencia habitual del demandante en caso de que haya residido allí *al menos los seis meses* inmediatamente anteriores a la presentación de la demanda *y de que sea nacional* del Estado miembro en cuestión *o*, en el caso del Reino Unido e Irlanda, tenga allí su "*domicile*";
- b) de la nacionalidad de ambos cónyuges o, en el caso del Reino Unido y de Irlanda, del "*domicile*" común.

352. No obstante, el Reglamento establece que las resoluciones en materia de divorcio, separación judicial o nulidad matrimonial no se reconocerán si el reconocimiento fuere manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro requerido.

6. Disposiciones del Código Civil sobre la familia

353. El Código Civil contiene varias disposiciones destinadas a proteger la unidad familiar y regula los derechos y obligaciones que los miembros de la familia tienen entre sí,

incluidos los ascendientes y los descendientes. Las modificaciones introducidas en 1993 suprimieron el concepto de que el marido era el jefe del hogar y colocaron a ambos cónyuges en un plano de igualdad. Los hijos tienen derecho a ser mantenidos por sus padres. Estos, y los demás ascendientes de los cónyuges, también tienen derecho a ser mantenidos, pero este derecho está subordinado al de los hijos y los del otro cónyuge. El Código también establece disposiciones sobre la patria potestad, la guarda de los menores, la adopción, la tutela y la curaduría.

354. En virtud de otra modificación introducida en 1993, en caso de discrepancia, los cónyuges pueden pedir la asistencia del tribunal de jurisdicción voluntaria. El juez, después de oídas las partes y cualquier otra persona mayor de 14 años, procura solucionar la diferencia de forma amistosa. Si así lo piden los cónyuges y el asunto de que se trata es de importancia fundamental, el juez resuelve la cuestión por sí mismo.

355. La Sala de Familia del Tribunal Civil se constituyó en diciembre de 2003. Antes, era la Sala Primera del Tribunal Civil la que entendía de las cuestiones asociadas con las relaciones y los derechos familiares, pero en algunos procedimientos preliminares lo hacía la Sala de Jurisdicción Voluntaria del Tribunal Civil. Así, por ejemplo, si los cónyuges querían separarse debían obtener primero el consentimiento del Tribunal Civil (Sala de Jurisdicción Voluntaria). El Juez Presidente de ese tribunal trataría de reconciliar a las partes y, si no lo conseguía, les autorizaría a acudir al tribunal de jurisdicción contenciosa, es decir, la Primera Sala del Tribunal Civil, donde el demandante comenzaría la litigación con un auto de comparecencia. En diciembre de 2003 la Sala de Jurisdicción Voluntaria dejó de tener competencia en los procedimientos de separación, y se introdujo un sistema de mediación obligatoria ante mediadores especialmente capacitados en el marco de la Sala de Familia del Tribunal Civil.

356. La Sala de Familia del Tribunal Civil se ocupa de los casos de anulación de matrimonios, separaciones personales, custodia y manutención de los hijos (nacidos del matrimonio o fuera del matrimonio), paternidad y filiación y las cuestiones reguladas por la Ley sobre el secuestro y la tutela de niños. En cambio, la adopción es competencia de la Sala de Jurisdicción Voluntaria del Tribunal Civil. El juez Presidente de la Sala de Familia debe aprobar también los documentos de separación personal, es decir, cuando los cónyuges aceptan la "separación de mutuo acuerdo". No obstante, incluso en este tipo de separación los cónyuges deben primero acudir ante un mediador de ese tribunal. Los procedimientos de separación pueden ser incoados por uno de los cónyuges contra el otro. Asimismo, el artículo 38 establece que "cualquiera de los cónyuges puede solicitar la separación por motivos de adulterio cometido por el otro cónyuge".

357. En las cuestiones relacionadas con los hijos, el Tribunal Civil (Sala de Familia) puede nombrar un mediador encargado de representar y promover el interés superior de los niños afectados, a pesar de que, a los efectos de la litigación en curso, estos pueden estar representados por uno de los padres.

358. Si surgen dudas acerca de si una cuestión concreta debe ser resuelta por la Sala de Familia o por alguna otra sala del Tribunal Civil, el encargado del Registro remite la cuestión al Presidente del Tribunal Supremo. Este toma una decisión, que no puede ser recurrida.

359. En Gozo, las cuestiones que en Malta serían resueltas por el Tribunal Civil (Sala de Familia) son tramitadas por la Sala de Familia del Tribunal de Magistrados (Gozo) en calidad de jurisdicción superior, con la misma estructura, incluidos los mediadores, que en Malta.

360. La obligación de manutención sigue recayendo sobre los cónyuges después de que se decreta la separación; el cónyuge contra el que se dicta la separación sigue estando obligado a ocuparse de la manutención del otro cónyuge (teniendo en cuenta su capacidad

laboral y sus necesidades) y los hijos (habida cuenta de sus necesidades, discapacidad, enfermedades, educación, necesidades de alojamiento, etc.). La manutención debe pagarse en la forma que el tribunal considere suficiente para que el cónyuge que debe recibir la manutención sea financieramente independiente o menos dependiente del otro cónyuge. Corresponde al tribunal decidir si debe pagarse una suma única o si la manutención deberá pagarse en plazos iguales o desiguales, de acuerdo con las circunstancias del caso.

361. Además de la manutención, cabe señalar la cuestión de la custodia. Durante la tramitación de la demanda, el tribunal puede dictar las directrices relativas a la custodia de los hijos que considere necesarias, teniendo siempre como consideración principal el interés superior de los hijos. Cuando el tribunal considera que la medida es estrictamente necesaria, puede ordenar que los hijos se coloquen bajo la custodia de terceros o reciban alguna forma alternativa de atención. No obstante, en este caso los cónyuges conservan el derecho a supervisar su manutención y educación y siguen estando obligados a contribuir a ellas. Puede ocurrir también que el tribunal prive a uno de los progenitores por completo o en parte de los derechos de la patria potestad. En cualquier momento, el tribunal puede anular o modificar las medidas adoptadas con respecto a los hijos.

362. El cónyuge al que no se confió la atención y custodia de los hijos o ambos cónyuges, cuando aquellos se confían a la atención de terceros, tienen derecho de acceso a sus hijos. El momento, lugar y modalidad es determinado por el tribunal. No obstante, puede ocurrir que se prohíba el acceso a los menores de edad si de esa manera sufre detrimento su bienestar.

7. Cohabitación

363. La legislación de Malta no reconoce hasta ahora la cohabitación. Así pues, los derechos y deberes de las parejas que cohabitan no están recogidos de forma explícita en la legislación maltesa. El Código Civil hace referencia al hogar matrimonial y tiene en cuenta únicamente el hogar establecido mediante el matrimonio, por lo que esos artículos no pueden aplicarse a las parejas que cohabitan. En consecuencia, se aplica a estas la legislación normal sobre la propiedad. Por otro lado, las parejas no casadas tienen deberes morales mutuos y deben subvenir a su familia y tienen deberes para con los hijos, aun cuando estos quizá no se especifiquen en la ley. Independientemente de la situación concreta -madres solteras, parejas no casadas, etc.-, toda persona tiene el deber de cuidar a sus hijos. Así han establecido los tribunales de Malta en la causa *Melissa Micallef c. Konrad Sant*¹¹². Asimismo, la ruptura de la cohabitación de los padres no interrumpe ni elimina la obligación de manutención ni la patria potestad con respecto a los hijos, sean o no fruto del matrimonio. Sin duda, la obligación de los padres de ocuparse de la manutención de sus hijos y de ayudarles sigue vigente aun cuando cese la cohabitación de los padres.

364. El artículo 16 del Código Civil obliga a los cónyuges a mantenerse mutuamente, por lo que un miembro de la pareja cohabitante no tiene ninguna protección en virtud de la ley para solicitar la manutención aun cuando durante varios años hayan contribuido al hogar de la familia. En otras palabras, las parejas casadas están obligadas a mantenerse mutuamente durante la relación e incluso cuando se rompe esta. Las parejas que cohabitan no gozan de la misma protección ni siquiera durante la relación, ya que las leyes que consideran la relación económica entre las parejas solo se aplican al matrimonio. Esa relación no está regulada por ningún régimen financiero. Las parejas casadas pueden aceptar o no el régimen automático de comunidad de bienes y, si no lo aceptan, elegir entre la separación de bienes o la comunidad de bienes residuales bajo administración separada.

¹¹² *Melissa Micallef c. Konrad Scott* (Sala Primera del Tribunal Civil), 27 de junio de 2002.

365. La ley que se ocupa de la custodia hace referencia a la separación personal, y se aplica automáticamente a las parejas casadas. Como no hay leyes que se ocupen por separado de la custodia de los hijos de las parejas que cohabitan, parecería que, por analogía, se aplica también a estas.

366. Una causa relativa a parejas cohabitantes enfrentadas por la custodia es la de *Lourdes Magro c. Carmelo Bonnett*¹¹³. La pareja vivió junta durante 12 años antes de que finalizara la relación y surgiera el conflicto acerca de la custodia del hijo. En esta causa se hizo hincapié en la salvaguardia del interés superior del niño. Al decidir si la custodia del hijo debía otorgarse a uno u otro de los progenitores, el tribunal debía tener en cuenta exclusivamente lo que resultara más beneficioso para el niño. Tras escuchar la opinión del experto, el tribunal consideró que el niño tendría una vida más tranquila con la madre, mientras que el padre gozaría de derechos de visita. Así pues, cuando la ley no contempla explícitamente las controversias por la tutela entre las parejas cohabitantes, se aplican las mismas disposiciones y los tribunales se ocupan de ambos casos, es decir, las parejas casadas y no casadas, teniendo en cuenta el interés superior del niño.

367. En cuanto a la sucesión, de acuerdo con la ley no se reconocen derechos a la pareja cohabitante tras el fallecimiento del otro miembro de la pareja. Los cohabitantes de hecho ni siquiera se mencionan con respecto a la sucesión intestada ya que el artículo de la ley menciona una lista exhaustiva, con inclusión de descendientes, ascendientes, parientes colaterales y el cónyuge del fallecido y el Gobierno de Malta.

368. Los cohabitantes no pueden suscribir un testamento *unica charta*, ya que la ley especifica que un testamento válido suscrito por el esposo y la esposa es un único instrumento, y se conoce normalmente con el nombre de *unica charta*. El cónyuge superviviente y los descendientes tienen a favor de ellos una parte reservada, pero el miembro de la pareja que sobrevive no goza de esa protección, aun cuando, gracias a las enmiendas recientes, el niño nacido fuera del matrimonio tiene derecho todavía a una parte reservada. Así pues, aunque el miembro de la pareja no tenga derecho a ello, los niños nacidos de parejas cohabitantes tienen los mismos derechos que los nacidos fuera del matrimonio.

Artículo 24

1. Protección y asistencia a los niños y jóvenes

369. El Código Penal contiene diversas disposiciones para la protección del niño en general. Entre ellas figuran las siguientes:

- a) Los padres y los encargados de la guarda de un menor que le instigan o le fuerzan a la prostitución cometen un delito sancionable con pena de prisión (art. 197);
- b) La corrupción de menores es un delito que da lugar a la pena de prisión (art. 203);
- c) El que alienta a un menor a la prostitución, colabora para ella o la facilita comete un delito sancionable con pena de prisión (art. 204);
- d) La instigación con violencia a personas menores de edad para que practiquen la prostitución o participen en espectáculos pornográficos (art. 204A);
- e) Inducir a las personas menores de edad a la prostitución o a participar en un espectáculo pornográfico (art. 204B);

¹¹³ *Lourdes Magro c. Carmelo bonnet* (Sala Primera del Tribunal Civil), 11 de diciembre de 2003.

- f) Participación en actividades sexuales con personas menores de edad (art. 204C);
- g) Actividades sexuales ilícitas con personas menores de edad (art. 204D);
- h) Fotografías, películas u otros registros visuales de carácter deshonesto (art. 208A);
- i) Solicitación de servicios sexuales de personas menores de edad (art. 208AA).
- j) El secuestro o la ocultación de un niño, o la alteración, el ocultamiento o el anuncio falso de su nacimiento constituyen un crimen sancionable con pena de prisión (art. 210);
- k) El descuido de un niño menor de 7 años puede sancionarse con pena de prisión (art. 246);
- l) La persona que encuentra a un recién nacido abandonado tiene el deber de hacer todo lo necesario para salvar al niño e informar a la policía antes de transcurridas 24 horas; la omisión puede dar lugar a la pena de prisión (art. 247).

370. Con arreglo al Código Civil, el tribunal está facultado, por motivos fundados, a impartir instrucciones sobre la persona o los bienes de un menor según lo estime conveniente para el interés superior del niño.

2. Edad a la que finaliza la patria potestad

371. La mayoría de edad se alcanza en Malta a los 18 años. A partir de esa edad, los jóvenes dejan de estar sujetos a la patria potestad y adquieren todos los derechos y obligaciones legales conforme al derecho de Malta. De conformidad con el Código Penal, la patria potestad se extingue cuando fallecen los dos progenitores, cuando se casa el hijo y si este, con consentimiento de los padres, ha abandonado la casa paterna y vive de forma independiente. Asimismo, el Código Penal, en virtud del artículo 154, establece que la autoridad paterna desaparece si el progenitor, superando los límites de un castigo razonable, maltrata al hijo o descuida su educación, si la conducta del progenitor es tal que pone en peligro la educación del hijo, si ha sido objeto de interdicto o está incapacitado para realizar determinados actos, si el progenitor no gestiona debidamente los bienes del hijo y si el progenitor no cumple su obligación de cuidar, mantener, instruir y educar a los hijos del matrimonio teniendo en cuenta sus actitudes, inclinaciones naturales y aspiraciones.

3. Modalidades alternativas de cuidado de los niños

372. Los niños pueden verse privados de su entorno familiar por varias razones. El alejamiento del entorno familiar y el consiguiente internamiento pueden ser voluntarios o involuntarios. Se habla de alejamiento temporal voluntario cuando los padres deben enviar a su hijo a un centro de acogimiento residencial o confiarlo al cuidado de otra persona por diversas razones, como la enfermedad de uno o ambos progenitores, cuando uno de los progenitores o ambos se sienten incapaces de cuidar a un hijo con problemas de comportamiento, o en casos de desmembramiento de la familia, violencia familiar o encarcelamiento de uno de los padres. Puede ocurrir también que los padres decidan que no pueden ocuparse de los hijos y renuncien a ellos definitivamente. Esta situación es muy excepcional y son muy pocos los casos en que los padres renuncian por su propia voluntad a un hijo de manera permanente.

373. En Malta los niños que necesitan servicios de atención alternativa normalmente son enviados a un centro de acogimiento residencial, a no ser que se encuentre un hogar de guarda. Otro método disponible en Malta es la adopción.

4. Hogares de guarda

374. La Ley de hogares de guarda define a estos como un servicio que se ofrece durante un determinado período y en virtud del cual un niño se confía de manera continuada a la atención de una madre o padre de guarda que permite al niño crecer en un entorno familiar teniendo en cuenta su interés superior. El padre o madre de guarda es toda persona autorizada por la Junta de Servicios de Guarda, independientemente de que sea soltera o casada, siempre que esté dispuesta a ayudar al niño. Según la Ley de hogares de guarda se entiende por niño toda persona de menos de 18 años de edad.

375. El Servicio de Hogares de Guarda trata de ofrecer una experiencia familiar a los niños que, por una u otra razón, no pudieron vivir con sus padres biológicos. Las situaciones familiares que pueden dar lugar a la utilización de estos servicios son las siguientes: progenitores, fallecimiento, crisis familiares, conflictos entre los padres, dificultades de estos para cumplir las obligaciones hacia los hijos, enfermedad, uso indebido de drogas y/o alcohol, encarcelamiento de los padres y los abusos físicos, sexuales y emocionales o el descuido.

376. Asimismo, si se determina que el interés superior del niño aconseja que este regrese con sus padres biológicos, la utilización de las familias de guarda puede ayudar a los niños a reintegrarse en su familia natural. Mientras estén con la familia de guarda, los niños tendrán la oportunidad de vivir en un entorno familiar y recibir el cariño y la seguridad que necesitan. Esta oportunidad puede ofrecer la estabilidad que tanto necesitan los niños para poder desarrollar sus aptitudes y personalidad. Por ello, los beneficios resultantes de la experiencia de vivir en una familia de guarda pueden ser duraderos.

377. El artículo 23 de la Ley dispone que las personas interesadas en actuar como familias de guarda deben realizar un curso de capacitación previa. Luego se realiza una evaluación, antes de la compilación de un informe sobre el hogar, que se utilizará para determinar si los solicitantes recibirán la aprobación definitiva. Los miembros de las familias de guarda reciben toda la información necesaria para el bienestar del niño, incluida la información médica. Un equipo de trabajadores sociales calificados ofrece servicios de seguimiento, supervisión, orientación y apoyo a esas familias. Los trabajadores sociales presentan un informe al menos una vez cada dos años para poder determinar si las familias de guarda cumplen las obligaciones previstas en la Ley y si pueden continuar ocupándose del niño.

378. La estancia del niño en una familia de guarda puede concluirse si:

- a) La familia de guarda no cumple el acuerdo previo, o
- b) La Junta decide que la familia no reúne ya las condiciones para ofrecer ese servicio, o
- c) Esa solución no es ya la más indicada para el niño.

379. El niño que se encuentra en una familia de guarda tiene derecho a recibir manutención, instrucción y educación de acuerdo con sus aptitudes, aspiraciones e inclinaciones naturales. Además, el niño debe tener acceso al trabajador social que se ocupa de su situación.

380. En 2009, había 160 niños en familias de guarda: 81 niños y 79 niñas: 65 niños reciben esa atención de miembros de la familia extensa mientras que 91 se encuentran en familias con las que no están relacionados biológicamente¹¹⁴.

¹¹⁴ *Children in alternative care (National Survey January 2010, 2nd edn)* 133 <http://www.eurochild.org/fileadmin/user_upload/Publications/Eurochild_Reports/Eurochild%20Publication%20-%20Children

5. Adopción

381. Cuando los niños que se encuentran en familias de guarda o están acogidos en instituciones no pueden regresar a sus padres biológicos, se puede recurrir a la adopción para ofrecerles un hogar permanente y un entorno familiar. A diferencia de las familias de guarda, la adopción es una solución permanente, en la que los padres adoptivos asumen todas las responsabilidades de un padre natural y el niño es considerado como hijo de la persona que lo adoptó.

382. El artículo 114 del Código Civil establece lo siguiente: "La adopción solamente puede tener lugar con autorización del tribunal competente... otorgada mediante decreto... en respuesta a una solicitud de una persona de uno u otro sexo... El decreto de adopción se puede dictar cuando los dos cónyuges, que deben estar casados y haber vivido juntos, presentan una solicitud en la que autorizan conjuntamente a una persona a adoptar al hijo, pero no cuando la solicitud es realizada por solo uno de los cónyuges". Puede hacerse una excepción cuando la persona que va a ser adoptada es hijo natural de uno de los dos cónyuges.

383. El Código considera que el decreto de adopción solo puede dictarse cuando uno de los solicitantes o uno de los padres adoptivos ha cumplido los 28 años de edad y es al menos 21 años, pero no más de 45, mayor que el hijo que se va a adoptar; en el caso de adopción de hermanos, se considera que se cumple este requisito si existe esa diferencia de edad al menos con respecto a uno de los niños, y si la adopción redundará en beneficio de todos los hermanos implicados.

384. Asimismo, no puede aprobarse el decreto de adopción de una persona que ha cumplido los 18 años de edad a no ser que el solicitante sea la madre o el padre de la persona que se va a adoptar o si esta ha vivido con ese progenitor al menos 5 años consecutivos y la persona adoptada no se opone a la adopción; puede aprobarse también en favor de una familia de acogida que haya adoptado al niño al menos durante cinco años consecutivos. Tampoco puede aprobarse la adopción en favor de una persona que haya recibido las sagradas órdenes o contraído votos religiosos solemnes. Un tutor no pueda adoptar a la persona sometida a su tutela.

385. En el caso de adopción de un niño nacido fuera del matrimonio, se necesita el consentimiento de la madre aun cuando esta no haya cumplido los 18 años de edad, mientras que en el de los niños nacidos dentro del matrimonio se necesita el consentimiento de ambos padres si no han alcanzado los 18 años de edad. Por otro lado, ambos padres deben aprobar la adopción de su hijo. Cuando el niño ha alcanzado los 11 años de edad, este debe dar su consentimiento a la adopción después de recibir orientación del Defensor del Niño.

386. Antes de que se dicte un decreto de adopción, el tribunal escucha a todas las personas a quienes haya confiado la atención o la custodia del niño que se va a adoptar. Cuando este ha nacido fuera del matrimonio, el tribunal debe escuchar al padre biológico si ha reconocido como hijo suyo a la persona que se va a adoptar, y ha mantenido y demostrado interés auténtico y continuado en el niño. En el caso de un niño bajo tutela o que viva en una familia de guarda, el tribunal debe escuchar al tutor y a los miembros de la familia de guarda. Asimismo, debe escuchar al defensor del niño y al trabajador social nombrado por el tribunal para proteger el interés superior del niño y garantizar su representación.

%20in%20Alternative%20Care%20-%202nd%20Edition%20January2010.pdf> consulta realizada el 24 de febrero de 2012.

387. El Código Civil faculta al tribunal a hacer caso omiso de las disposiciones sobre las personas que deben dar su consentimiento o a las que debe escuchar si:

- a) La persona que debe dar su consentimiento no puede hacerlo;
- b) No se puede encontrar al progenitor o este ha abandonado, descuidado o maltratado reiteradamente a la persona que se va a adoptar o ha descuidado reiteradamente o se ha negado a contribuir a la manutención de dicha persona;
- c) Uno de los progenitores se resiste de forma irracional a dar su consentimiento;
- d) Uno de los progenitores quizá no tenga la patria potestad sobre el hijo que se va a adoptar;
- e) El niño que se va a adoptar no está confiado a la atención y custodia de uno de los progenitores y la Junta de adopción declara que no hay esperanza razonable de que el niño pueda reunirse con su madre y/o padre;
- f) El progenitor o los progenitores no han mantenido contacto al menos durante 18 meses con el niño que se va a adoptar, sin que haya una razón que lo justifique; o
- g) En aras del interés superior del niño que se va a adoptar, conviene prescindir de ese consentimiento.

388. Una vez que ha tenido lugar la adopción, se considera que el niño adoptado es hijo de quienes lo han adoptado, nacido dentro de un matrimonio legítimo e hijo solo suyo y de ninguna otra persona. Por otro lado, los familiares del niño que se va a adoptar perderán todos los derechos y quedarán libres de todas las obligaciones con respecto a dicha persona. Los tutores, si los hubiere, pondrán fin a su administración y, antes de transcurridos 3 meses de la fecha del decreto de adopción, rendirán cuentas al adoptante. Si el tribunal decide conceder una adopción abierta, los progenitores conservarán el derecho a mantener contacto con el niño.

389. El niño recibirá el apellido de la familia que lo adopta. Al cumplir los 18 años, la persona adoptada tiene derecho a solicitar al tribunal una copia del decreto de adopción pertinente que contiene información acerca de su familia biológica así como el derecho a solicitar al tribunal autorización para obtener del Registro Público una copia de su certificado de nacimiento original.

390. El Director del Registro Público recibe información acerca de dicha adopción y se realiza una inscripción en el Registro de personas adoptadas.

391. El Código Civil especifica claramente que:

Nadie realizará, dará, aceptará u ofrecerá realizar, dar o recibir o aceptar recibir o tratar de obtener ningún pago ni ninguna otra recompensa por:

- a) La adopción de cualquier persona;
- b) La concesión del consentimiento necesario en relación con la adopción de una persona;
- c) La transferencia de la atención y posesión de la persona que se va a adoptar con vistas a su adopción;
- d) La realización de ningún arreglo para la adopción de una persona.

392. Asimismo, nadie puede publicar por ningún medio, sin autorización de un organismo acreditado, que un niño puede ser adoptado o que una persona está realizando trámites para adoptar a un niño. Tampoco puede publicarse por ningún medio el nombre del solicitante, el nombre de la persona que se adopta o se va a adoptar, el nombre del padre, la

madre, el curador o el tutor del niño adoptado o cualquier detalle que pueda ayudar a identificar al niño. Toda persona que publique esa información podrá ser condenada a prisión por un período no inferior a 3 meses pero no superior a 6 meses o/y al pago de una multa comprendida entre 1.164,69 y 2.329,37 euros. Se dictará la misma pena para toda persona que utilice o amenace con utilizar la fuerza o algún medio de restricción o provoque o amenace con provocar daños o haga o amenace con hacer algo que redunde en detrimento de un progenitor de un niño con la intención de inducir a un progenitor a ofrecer o abstenerse de ofrecer al niño en adopción.

393. En caso de falsificación de documentos relacionados con una adopción, suplantación de identidad o falsa declaración, podrá dictarse pena de prisión de no menos de 3 meses pero no más de 6 meses o/y una multa de no menos de 582,34 pero no más de 1.164,69 euros.

394. Cuando los documentos se falsifican o se obtienen mediante fraude o coacción, la persona responsable podrá ser condenada a prisión por un período no inferior a 6 meses y no superior a un año y/o a multa de no menos de 1.164,69 y no más de 2.329,37 euros.

395. Un progenitor que da su consentimiento a la adopción de su hijo y decide alejar a este de la atención o custodia de las personas que lo adoptaron, puede ser condenado a prisión por un período de 2 meses a 4 meses o/y a multa de 582,34 a 1.164,68 euros.

Artículo 25

1. La ciudadanía en la legislación maltesa

396. La Ley de ciudadanía de Malta, en su artículo 3, distingue entre las personas nacidas antes del 21 de septiembre de 1964 (es decir, el Día de la Independencia) y las nacidas después de esa fecha. Ello se debe al hecho de que, junto con el capítulo III (sobre la ciudadanía) de la Constitución de la Independencia, debía determinar qué personas asumirían la nueva condición de ciudadanos de Malta a partir del Día de la Independencia. Con respecto a las personas nacidas antes del 21 de septiembre de 1964, distingue a su vez entre los nacidos dentro y fuera de Malta.

397. Para que las personas nacidas en Malta antes del día designado (Día de la Independencia) adquirieran automáticamente la ciudadanía maltesa en esa fecha, debían ser ciudadanos del Reino Unido y sus colonias el día anterior a la fecha designada y uno de sus padres debía haber nacido en Malta. Esta disposición introduce los conceptos tanto de *jus soli* como de *jus sanguinis*, ya que la adquisición automática de la ciudadanía maltesa el Día de la Independencia no dependía solo del nacimiento dentro del territorio de Malta sino también del hecho de que uno de los padres hubiera nacido en Malta.

398. Las disposiciones relativas a las personas nacidas en el extranjero antes del día designado eran diferentes. Para que dichas personas pasaran a ser ciudadanos de Malta en esa fecha, debían ser ciudadanos del Reino Unido y sus colonias el día anterior al Día de la Independencia y su padre debía convertirse en ciudadano de Malta por nacimiento en Malta en dicho día. Por consiguiente, hasta la entrada en vigor de la Ley N° X de 2007, una persona nacida fuera de Malta antes de la independencia de un padre extranjero y una madre nacida en Malta no adquiría la ciudadanía de Malta al nacer.

399. La Ley N° X de 2007 permitía a las personas nacidas fuera de Malta antes de 1964 de madres que habían adquirido o adquirirían, salvo en casos de fallecimiento, la ciudadanía de Malta el día de designado debido a que habían nacido en Malta, presentar una solicitud e inscribirse como ciudadanos de Malta. Así, mientras que, en el caso de las personas nacidas de un padre maltés, la adquisición de la ciudadanía maltesa es *ipso jure*, en el caso de las personas nacidas de madres maltesas fuera de Malta se necesita un acto

voluntario consistente en la presentación de la solicitud. No obstante, esas personas pueden aspirar a la ciudadanía maltesa por derecho propio y una vez que han presentado la solicitud prevista se les concede la ciudadanía maltesa.

400. En relación con las personas nacidas después del Día de la Independencia, la Ley de ciudadanía de Malta establece una distinción entre las personas nacidas en Malta no más tarde del 31 de julio de 1989 y las nacidas a partir del 1 de agosto de 1989. Las personas nacidas en Malta entre el 21 de septiembre de 1964 y el 31 de julio de 1989 son consideradas ciudadanos de Malta de nacimiento. Durante ese período, la adquisición de la ciudadanía maltesa dependía meramente del *jus solis*, es decir del nacimiento en territorio maltés. Muchas personas sin ninguna vinculación con Malta adquirirían la ciudadanía maltesa simplemente por el hecho de haber nacido en Malta. Por otro lado, para que las personas nacidas en Malta a partir del 1 de agosto de 1989 sean consideradas ciudadanos de Malta, su padre o madre debe ser ciudadano de Malta, independientemente de la modalidad de adquisición de la ciudadanía.

401. Los artículos 3 3) y 5 3) de la Ley N° X de 2007 introdujeron un principio amplio y muy liberal. Según estas nuevas disposiciones, toda persona nacida fuera de Malta en cualquier fecha tendrá derecho a ser inscrita como ciudadano de Malta si demuestra que descende por línea directa de un antecesor nacido en Malta de un progenitor nacido igualmente en Malta. Ello significa, por consiguiente, que todas las personas nacidas fuera de Malta que puedan demostrar su descendencia de una persona nacida en Malta serán consideradas ciudadanos de Malta. Esta enmienda amplió también la ciudadanía maltesa, ya que hacía posible que las personas nacidas fuera de Malta que demostraran su descendencia de una persona nacida en Malta pasaran a ser ciudadanos de Malta sin necesidad de adquirir la residencia en Malta. No obstante, esta disposición basada en el *jus sanguinis* no se aplica a todos indiscriminadamente, ya que la ley estipula que la persona solicitante debe demostrar que al menos dos de sus antecesores habían nacido en Malta. Por consiguiente, se establece como requisito la existencia de un vínculo fuerte y estrecho con Malta.

402. La ciudadanía puede adquirirse también a través del matrimonio. El derecho de una persona extranjera a ser inscrita como ciudadano de Malta al casarse con un ciudadano maltés se reconoce desde la entrada en vigor de la Constitución. Según la Ley de ciudadanía de Malta, una persona que el día de referencia o posteriormente contrae matrimonio con otra persona que es ciudadano de Malta o que adquiere la ciudadanía maltesa tendrá derecho a ser inscrita como ciudadano de Malta una vez realizada la solicitud prevista. No obstante, para que pueda ser inscrito como ciudadano de Malta el solicitante debe cumplir uno de los siguientes requisitos:

- El día de presentación de la solicitud está todavía casado o vive con el ciudadano de Malta y debe haber estado casado al menos durante 5 años;
- El día de presentación de la solicitud está de facto o de jure separado del ciudadano de Malta pero ha vivido con el ciudadano de Malta al menos 5 años después de la celebración del matrimonio;
- El día de presentación de la solicitud es viudo/viuda de un ciudadano de Malta pero ha vivido con ese ciudadano de Malta al menos 5 años antes de su fallecimiento y vivía todavía con él cuando se produjo este; o
- El día de presentación de la solicitud es viudo/viuda de un ciudadano de Malta y en el día del fallecimiento estaba separado/a *de facto* o *de jure* de dicho ciudadano pero ha vivido con ese ciudadano de Malta al menos 5 años después de la celebración del matrimonio.

403. En el caso de un extranjero casado con un ciudadano de Malta pero cuyo cónyuge maltés hubiera fallecido antes del quinto año de matrimonio, dicha persona también tendría

derecho a solicitar la ciudadanía maltesa una vez transcurrido un período de 5 años desde la celebración del matrimonio y con la condición de que dicho cónyuge extranjero estuviera todavía viviendo con el cónyuge maltés en el momento de la defunción de este último. Este derecho y estos requisitos se aplican no solo a las personas extranjeras casadas con ciudadanos malteses no más tarde de 1964 sino también a los extranjeros que antes de 1964 estaban o habían estado casados con una persona que había adquirido la ciudadanía de Malta en 1964.

2. Elecciones

404. Malta elige los miembros de su Asamblea Legislativa Nacional con el método de voto simple transferible. Ello significa que los ciudadanos malteses deben expresar un orden de preferencia (primero, segundo, tercero, cuarto, etc.) entre los numerosos candidatos que aparecen en la papeleta electoral. Al indicar sus preferencias, los votantes pueden elegir candidatos de diferentes partidos políticos.

405. Para ganar un escaño, un candidato debe recibir una cuota mínima de votos en el distrito. Esta cuota se determina teniendo en cuenta el número de votos válidos y dividiéndolos por el número de escaños más uno. Por ejemplo, si en un determinado distrito deben elegirse 5 candidatos y se han depositado en total 12.000 votos, la cuota sería 12.000 dividido por 6 (5 + 1), es decir, 2.000.

406. Cuando se hace el primer recuento de los votos, se examinan las primeras preferencias (número 1) de todas las papeletas y se considerará elegido el candidato que haya recibido un número suficiente de primeras preferencias para cubrir la cuota. Muchas veces ocurre que algunos candidatos tienen más primeras preferencias de las previstas en la cuota mínima para la elección. En tal caso, todos los votos que el candidato recibió por encima de la cuota necesaria se declaran votos excedentes. Pero esos votos no se pierden, ya que se transfieren al candidato indicado en la papeleta como siguiente opción. Una vez que se han transferido esos votos, se realiza un segundo recuento para determinar si algún otro candidato ha alcanzado la cuota.

407. Normalmente es necesario realizar recuentos adicionales para determinar los distintos ganadores de forma sucesiva. Si en uno de los recuentos ningún candidato alcanza la cuota mínima, el candidato con menor número de votos es eliminado y sus votos se transfieren al candidato que ocupa el siguiente puesto en la papeleta electoral. Estas transferencias de votos, de candidatos que han sido elegidos o eliminados, continúan en sucesivos recuentos hasta que se han cubierto todos los escaños.

408. Así pues, las características más importantes del voto único transferible son las siguientes:

- a) Se eligen varios candidatos en cada distrito;
- b) Los votantes pueden designar candidatos concretos por orden de preferencia, en vez de aceptar una lista de candidatos del partido, y
- c) Los votantes pueden distribuir libremente sus preferencias entre los candidatos de diferentes partidos o candidatos independientes.

3. Comisión Electoral

409. La Comisión Electoral se constituye de acuerdo con lo previsto en la Constitución de Malta (art. 60), y estará integrada por un funcionario elegido como Presidente y ocho miembros. Esta Comisión es nombrada por el Presidente de Malta teniendo en cuenta las opiniones del Primer Ministro, previa consulta con el jefe de la oposición.

410. La Comisión se encarga de la inscripción, transferencia, corrección y cancelación de votantes, la compilación del registro electoral y la designación de los miembros de la Oficina Electoral. El Presidente de la Comisión es responsable de la gestión cotidiana de la Oficina Electoral y de la aplicación de las decisiones de la Comisión.

411. Además, la Comisión Electoral es una entidad con personalidad jurídica propia, capaz de suscribir contratos, realizar adquisiciones, poseer y enajenar tierras y propiedades para el cumplimiento de sus funciones, demandar y ser demandada y adoptar todas las medidas y realizar todas las transacciones resultantes del ejercicio de sus funciones o que puedan contribuir al desempeño de estas.

412. La Comisión electoral es responsable de las siguientes elecciones:

- a) Elecciones generales;
- b) Elecciones a los consejos locales;
- c) Elecciones de miembros del Parlamento Europeo;
- d) Referendos.

4. Elecciones generales

413. La elección de los miembros de la Cámara de Representantes es competencia exclusiva de la Comisión Electoral. La celebración de dichas elecciones está regulada en la Ley sobre las elecciones generales¹¹⁵.

414. El sistema electoral existente desde 1921 y sancionado por varias constituciones es el de representación proporcional mediante voto único transferible.

415. Las Islas de Malta se divide en 13 distritos electorales, cada uno de los cuales envía cinco miembros a la Cámara de Representantes. La lista de votantes, en forma de registro electoral, se revisa y publica todos los meses de abril y octubre en la Gaceta Oficial. Cuando se convocan elecciones mediante una orden del Presidente de la República, la Comisión Electoral imprime y distribuye entre los votantes los documentos de votación de acuerdo con el último registro electoral publicado. En octubre de 2011 había 328.088 posibles votantes (cuadro 22). La Comisión Electoral procede entonces a realizar todas las funciones administrativas y organizativas necesarias para la celebración correcta y fluida de las elecciones.

5. Elecciones a los consejos locales

416. En 1993 el Parlamento aprobó una ley (Ley N° XV) en la que se prevé el establecimiento de consejos locales en 67 localidades: 53 en Malta y 14 en Gozo. En diciembre de 1999 una Ley de enmienda (N° XXI) incorporó una nueva localidad (la 68ª), Mtarfa. Las primeras elecciones, basadas siempre en el mismo principio que las elecciones generales, se celebraron entre noviembre de 1993 y mayo de 1994, mientras que la primera elección para consejeros de Mtarfa tuvo lugar en marzo de 2000. La enmienda de 1999 incluyó también un Apéndice adicional en el que se enumeraban 10 aldeas dentro de las localidades establecidas. Son las siguientes: Fleur-de-Lys en Birkirkara, Santa Lucija en Kerċem, Gwardamanga en Pietà, Paceville en San Ġiljan, Kappara en San Ġwann, Ibraġ y Madliena en Swieqi, Marsalforn en Żebbuġ, Gozo, Bubaqra en Żurrieq y Xlendi en Munxar.

417. Hasta 2009, cada mes de marzo se celebraron elecciones escalonadas en 22 o 23 localidades, de manera que cada consejo se votara por un período de 3 años. Salvo en 2004

¹¹⁵ Ley sobre las elecciones generales, cap. 354 de la legislación de Malta.

y 2009, las elecciones previstas se aplazaron a junio para hacerlas coincidir con elecciones nacionales convocadas para elegir cinco miembros del Parlamento Europeo.

418. El número de consejeros de cada localidad se determina de acuerdo con la población de la misma, dentro de un mínimo de cinco y un máximo de 13. Por varias razones, incluidos los fallecimientos, pueden quedar escaños vacantes a lo largo del año. La Comisión Electoral se encarga de organizar las correspondientes elecciones ocasionales para sustituir a los consejos o a los miembros del comité. Cuando no se presenta ningún candidato o ninguno de ellos sale elegido, el escaño se asigna por cooptación.

419. Entre 1993 y 2003, los ciudadanos británicos que cumplían los requisitos electorales establecidos en la Ley de consejos locales tenían derecho a presentarse como candidatos y a votar en sus respectivos consejos, junto con los electores malteses. A partir de 2004, esos derechos se ampliaron cuando en la lista de votantes se incluyó a todos los nacionales de la UE residentes en las islas de Malta, si están inscritos y poseen un documento de identidad maltés.

420. En virtud de ulteriores enmiendas, el mandato de los consejos locales ha pasado de tres a cuatro años. Por esta razón, el mandato de algunos consejos se amplió a fin de que la mitad de las elecciones de los consejos de Malta y Gozo se celebraran en marzo de 2012, y la mitad restante en marzo de 2013. Se repetirían, respectivamente en 2016 y 2017.

6. Elecciones de miembros del Parlamento Europeo

421. La Ley N° XVI de 2003 contenía disposiciones sobre la primera convocatoria de elecciones de miembros del Parlamento Europeo. Estas tuvieron lugar el sábado 12 de junio de 2004.

422. La Comisión Electoral publicó un nuevo Registro Electoral de la Unión Europea, después de señalar a la atención de los ciudadanos de la UE residentes en Malta y de los nacionales malteses con residencia en países miembros de la UE que podían solicitar su inscripción en las listas de dicho Registro para, en su momento, poder votar en Malta a fin de elegir cinco miembros del Parlamento Europeo. A raíz del Tratado de Lisboa, el número de miembros elegidos por Malta subió a seis, pero no todos los Estados miembros ratificaron el proceso, por lo que hasta ahora Malta está representada por cinco miembros. También en este caso, el sistema utilizado fue el de voto único transferible, y la mayoría de la reglamentación era similar a la utilizada en las elecciones generales. De hecho, el artículo 21 especifica que la organización de las elecciones y el recuento de los votos se llevarán a cabo de acuerdo con las disposiciones de la Ley sobre las elecciones generales. Una diferencia básica era que las Islas de Malta se consideraban como un único distrito electoral.

423. Para poder inscribirse en el Registro Electoral de la Unión Europea, el solicitante debe reunir los siguientes requisitos:

- a) Ser nacional de un Estado miembro y no figurar en el Registro Electoral;
- b) Estar en posesión de un documento de identidad;
- c) Haber cumplido los 18 años de edad y residir en Malta (la residencia en cualquiera de los Estados miembros se considera como residencia en Malta);
- d) Declarar que ejercerá su derecho al voto para la elección de miembros del Parlamento Europeo únicamente en Malta; y
- e) No haber sido privado del derecho al voto en su Estado miembro de origen.

424. Por otro lado, no tendrá derecho a inscribirse como votante en el Registro Electoral de la Unión Europea quienquiera que haya sido objeto de interdicto o esté incapacitado por

demencia por algún tribunal de un Estado miembro, esté cumpliendo una pena de prisión de más de 12 meses dictada por un Estado miembro o no reúna los requisitos de inscripción electoral con arreglo al ordenamiento legal vigente en ese momento en Malta por haber sido condenado en razón de delitos relacionados con las elecciones a miembros de la Cámara de Representantes, miembros de los consejos locales o miembros del Parlamento Europeo¹¹⁶.

425. Para las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2004 se presentaron 27 candidatos aspirantes a cinco escaños. Cinco eran candidatos independientes y los otros 22 se presentaban en representación de siete partidos. El sábado 6 de junio de 2009 se celebró una segunda elección con características semejantes. Esta vez eran 34 los candidatos a cinco escaños en representación de 10 partidos. Fueron elegidos tres representantes del Partido del Trabajo y dos del Partido Nacionalista.

7. Referendos

426. El objetivo de la Ley de referendos (cap. 237) es que los votantes inscritos decidan si aprueban una o varias propuestas recogidas en la resolución aprobada por la Cámara de Representantes o si están de acuerdo en que se derogue una disposición contenida en la legislación.

427. El 8 de marzo de 2003, se pidió al electorado que eligiera, mediante un referendo, sobre la propuesta de adhesión de Malta a la UE en la ampliación prevista para el 1 de mayo de 2004. El resultado fue favorable a la adhesión de Malta a la UE como Estado miembro. El último referendo anterior había tenido lugar 39 años antes. Era relativo a la confirmación de la Constitución de la Independencia. Otro referendo nacional tuvo lugar el 28 de mayo de 2011. Su objetivo era determinar si el electorado estaba de acuerdo con la introducción del divorcio.

8. Requisitos para los votantes

428. En el artículo 57, la Constitución establece los requisitos que debe cumplir una persona para que sea incluida como votante en las elecciones de los miembros de la Cámara de Representantes o cualquier otra elección que sea competencia de la Comisión Electoral. Esos requisitos son los siguientes:

- a) Ser ciudadano de Malta;
- b) Haber cumplido los 18 años de edad;
- c) Ser residente en Malta y, durante los 18 meses inmediatamente anteriores a su inscripción, haber residido en Malta durante un período ininterrumpido de seis meses o un tiempo equivalente a un total de seis meses. No obstante, este requisito no se aplica a las personas que residen habitualmente en Malta pero que no han residido en el país debido a la prestación de servicios en el exterior en calidad de funcionarios públicos, o como miembros de un cuerpo armado (a saber, la Armada, el Ejército, la Aviación de Malta, la fuerza de policía de Malta, otras fuerzas de policía establecidas en virtud de la ley en Malta y el servicio de prisiones de Malta).

429. El derecho a votar en las elecciones se reconoce a todas las personas inscritas como votantes en un distrito electoral. No obstante, la Constitución contiene una lista de personas que no pueden inscribirse como votantes. Son las siguientes:

- a) Toda persona que haya sido objeto de interdicto o esté incapacitada por demencia por un tribunal de Malta;

¹¹⁶ Cap. 467, Ley sobre las elecciones al Parlamento Europeo, art. 12.

b) Toda persona condenada a muerte por algún tribunal de Malta¹¹⁷ o que cumpla pena de prisión de más de 12 meses;

c) Toda persona condenada por delitos relacionados con las elecciones a miembros de la Cámara de Representantes.

9. Requisitos para ser elegidos como diputados de la Cámara de Representantes

430. Los mismos requisitos indicados para los votantes se aplican también para determinar quiénes pueden ser elegidos como miembros de la Cámara de Representantes y quiénes no reúnen los requisitos para la elección a no ser que los reúnan para estar inscritos como electores en las elecciones a la Cámara de Representantes. Así pues, no podrán presentarse a las elecciones quienes no sean ciudadanos y residentes de Malta y quienes no hayan cumplido los 18 años de edad.

431. La Constitución establece que una persona no podrá presentarse como candidato en las elecciones para la Cámara de Representantes:

a) Si es ciudadano de un país distinto de Malta y ha adquirido dicha ciudadanía voluntariamente;

b) Si ocupa o está ejerciendo un cargo público o es miembro de las fuerzas armadas del Gobierno de Malta;

c) Si es parte o, en su caso, socio con responsabilidad limitada en alguna asociación (*partnership*) o director o gerente de una sociedad que sea, a su vez, parte en un contrato con el Gobierno de Malta;

d) Si se encuentra en situación de quiebra no rehabilitada;

e) Si ha sido objeto de interdicto o está incapacitada por demencia;

f) Si está condenada a muerte por algún tribunal de Malta¹¹⁸ o cumpliendo una pena de prisión de más de 12 meses; no obstante, dos o más sentencias que han de cumplirse en forma consecutiva deben considerarse como sentencias independientes si ninguna de ellas es superior a 18 meses, y tampoco debe tenerse en cuenta ninguna sentencia de prisión impuesta como alternativa o como compensación por el impago de una multa;

g) Si es titular o desempeña las funciones de algún cargo que implique responsabilidad en la organización de una elección de miembros de la Cámara de Representantes, o actividades conexas, o en la compilación o revisión de un censo electoral.

10. Administración Pública¹¹⁹

432. La Administración Pública es el núcleo del mecanismo administrativo permanente del Gobierno de Malta. Su misión es:

- Ofrecer asesoramiento normativo al Gobierno;
- Aplicar las políticas gubernamentales y administrar la legislación con eficiencia y eficacia;

¹¹⁷ Esta parte de la ley no tiene ya aplicación, pues la pena de muerte se ha eliminado de nuestras leyes, como se ha indicado *supra*.

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ Office of the Prime Minister: Public Service <<https://opm.gov.mt/servizz-pubbliku?l=1>> consulta realizada el 14 de febrero de 2012.

- Prestar servicios al público en forma imparcial, sin errores y teniendo en cuenta las necesidades de los destinatarios.

433. La Administración Pública forma parte del conjunto más amplio del sector público, pero son realidades diferentes. En términos generales, la Administración Pública está integrada por personal contratado bajo la autoridad de la Comisión de la Administración Pública (en términos jurídicos, funcionarios públicos) que prestan servicio en los ministerios y departamentos y están sometidos a un marco común de normas y reglamentos.

434. Por el contrario, el sector público en sentido más amplio incluye muchas corporaciones públicas, autoridades oficiales y otras entidades que no forman parte de la Administración Pública. Por ejemplo, los miembros del personal docente de las escuelas estatales son funcionarios públicos; los profesores de universidad no lo son. Los funcionarios de policías son también miembros de la Administración Pública, pero no los soldados.

435. La Administración Pública ha conocido en el último decenio un amplio programa de reformas encaminadas a aumentar su eficacia y capacidad de respuesta al Gobierno y al público. La Administración Pública ha marcado la pauta en su aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). Cuenta con una infraestructura de TIC de vanguardia, que ha servido como trampolín para el gobierno electrónico. El nivel de calidad del servicio al público está mejorando gracias a esta inversión en TIC así como a la iniciativa Carta de Servicios de Calidad.

11. Comisión de la Administración Pública (CAP)¹²⁰

436. El artículo 109 de la Constitución establece la Comisión de la Administración Pública (CAP), integrada por un Presidente, un Vicepresidente y entre uno y tres miembros más. Estos son nombrados por el Presidente de Malta, teniendo en cuenta las opiniones del Primer Ministro, previa consulta con el líder de la oposición.

437. La CAP tiene como objetivo lograr una Administración Pública imparcial, con un alto nivel de competencia, eficiencia e integridad, para lo cual ofrece asesoramiento y formula recomendaciones vinculantes al Primer Ministro sobre:

- Nombramientos para cargos públicos (o puestos en la Administración Pública);
- Destitución de personas de dichos cargos;
- Ejercicio del control disciplinario sobre los funcionarios públicos.

438. La CAP garantiza que todas las acciones relacionadas con el reclutamiento, promociones y nombramientos dentro de la Administración Pública se lleven a cabo de forma equitativa, justa e imparcial, sin favoritismos, clientelismo ni discriminación y sobre la base del principio del mérito. La Comisión tiene también el deber de velar por que las medidas disciplinarias contra los funcionarios públicos se lleven a cabo de forma equitativa, sin demora y con eficacia.

439. Los nombramientos para los puestos de la Administración Pública son realizados por el Primer Ministro teniendo en cuenta el asesoramiento de la CAP, lo que significa que la Comisión dice al Primer Ministro a quién debe nombrar. Hay varias excepciones de esta norma general, como en el caso de los secretarios permanentes, nombrados por el Presidente teniendo en cuenta la opinión del Primer Ministro, después de que este haya consultado a la CAP. Los nombramientos para los puestos de jefe de departamento son realizados por el Primer Ministro, quien designa a un alto funcionario público, previa

¹²⁰ Public Service Commission <<https://secure2.gov.mt/PSC/funzjonijiet?l=1>> consulta realizada el 14 de febrero de 2012.

consulta con la CAP. Además, la facultad de realizar nombramientos puede ser delegada por el Primer Ministro siguiendo las recomendaciones de la Comisión. Por ejemplo, se ha delegado al Secretario Permanente Principal la facultad de realizar los nombramientos para los puestos que se cubren mediante concurso público.

440. Al realizar los nombramientos para la Administración Pública, el proceso de selección es gestionado en general por una junta de selección que interviene como "agente" de la Comisión de la Administración Pública. Ello significa que la Junta, integrada por miembros nombrados por la Comisión, forma parte de la maquinaria de la Comisión de la Administración Pública y, por consiguiente, solo debe rendir cuentas a la Comisión.

441. La Junta de Selección está obligada a llevar a cabo el proceso de forma imparcial y objetiva de acuerdo con los criterios de selección aprobados previamente por la Comisión. La Junta somete a la Comisión la aprobación del informe y el resultado provisional. La Comisión examina esos documentos a fin de comprobar que el proceso ha sido justo y, si da su aprobación, dispondrá que se publique el resultado. La Comisión recomendará también que el candidato mejor clasificado sea designado para ocupar el puesto vacante.

442. La Comisión puede investigar el proceso de selección, bien por propia iniciativa o previa petición de un candidato, en cuyo caso se prevé que la Junta de Selección convenza a la Comisión acerca de la legitimidad, equidad y coherencia del proceso de selección seguido por la Junta. Si la Comisión no queda satisfecha, puede ordenar que se modifique el resultado de la selección o incluso anularlo por completo, y dar instrucciones para que una nueva Junta de Selección emprenda de nuevo todo el proceso.

12. Deposición, suspensión y despido

443. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110 de la Constitución de Malta el Primer Ministro ha delegado a los jefes de departamento la autoridad de ejercer el control disciplinario de los funcionarios públicos sometidos a su jurisdicción. Ello significa que en caso de cuestiones de disciplina, a diferencia de los relacionados con la selección, los departamentos no tienen obligación de remitirse a la Comisión en cada una de las etapas del proceso. De esa manera, la delegación permite agilizar los procedimientos y lograr una mayor eficiencia y rendición de cuentas.

444. La CAP puede investigar libremente el ejercicio del control disciplinario por cualquiera de los jefes de departamento e investigar si esa autoridad delegada se ha utilizado indebidamente o abusivamente. Además, los funcionarios públicos pueden recurrir las sentencias disciplinarias directamente ante la CAP, que luego examina el caso. Si es necesario, la Comisión puede incluso retirar la autoridad delegada de un jefe de departamento para imponer medidas disciplinarias. La Comisión puede adoptar también medidas disciplinarias contra los jefes de departamento u otros funcionarios que usan indebidamente sus facultades disciplinarias.

445. Aunque se hayan delegado las cuestiones disciplinarias, la Comisión conserva su autoridad sobre las siguientes cuestiones:

- Interdicción de funcionarios públicos acusados de infracciones graves;
- Sanciones, incluido el despido, que deberán imponerse a los funcionarios públicos declarados culpables de infracciones penales;
- Casos en que una infracción disciplinaria grave es considerada por el jefe de departamento como motivo de despido; y
- El decomiso de las retenciones del salario de funcionarios públicos durante el período de interdicción.

446. En lo que respecta a la norma 30 1) del Reglamento de 1999 (procedimiento disciplinario), la CAP conoce de los recursos interpuestos por funcionarios públicos contra las decisiones tomadas por los jefes de departamento en virtud de la autoridad delegada. Además, la norma 33 del mismo Reglamento autoriza a toda persona que sea o haya sido funcionario público y que haya sido sancionada en virtud del Reglamento Disciplinario a solicitar a la Comisión que examine su caso con el fin de enmendar o revocar la recomendación que la Comisión ha formulado contra él.

447. Los funcionarios públicos tienen derecho a recurrir ante la Comisión contra un dictamen de culpabilidad y la correspondiente sanción impuesta por un jefe de departamento en cualquiera de las siguientes circunstancias:

- a) Cuando el funcionario ha sido declarado culpable de acusaciones consideradas por su departamento como una infracción disciplinaria grave;
- b) Cuando la sanción impuesta por el jefe de departamento es o incluye un "aviso de despido";
- c) Cuando el funcionario puede demostrar que ha habido un grave incumplimiento de los procedimientos establecidos en el Reglamento Disciplinario que ha redundado en perjuicio de aquel.

Artículo 26

448. El artículo 45 3) define la discriminación del siguiente modo: "La expresión 'discriminatorio' significa el trato diferente a diferentes personas cuando puede explicarse total o principalmente por motivos de raza, lugar de origen, opiniones políticas, color, credo o sexo, cuando las personas con esas características son sometidas a inhabilitaciones o restricciones a que no se somete a las personas con otras características, o reciben privilegios o ventajas que no se otorgan a las personas que tienen otras características".

449. Además, el Estado garantiza que no se dictará ninguna ley discriminatoria, en sí misma ni en sus efectos. En virtud del párrafo 4 de la misma norma constitucional, la garantía contra las leyes discriminatorias está limitada a fin de que no se aplique en las siguientes circunstancias:

- Para la asignación de rentas públicas y fondos públicos;
- Respecto de las personas que no son ciudadanos de Malta;
- Respecto de la adopción, el matrimonio, la disolución del matrimonio, la inhumación, la sucesión hereditaria y todas las cuestiones referentes al régimen jurídico de las personas, pero no en los casos en que la discriminación es totalmente imputable al sexo;
- Respecto de las personas sometidas a cualquier inhabilitación o restricción o que han recibido cualquier privilegio o ventaja que, por su naturaleza y las circunstancias especiales relativas a tales personas o a cualquier otra disposición de la Constitución, se justifica razonablemente en una sociedad democrática;

Para la autorización de medidas durante períodos de emergencia pública razonablemente justificados a los efectos de hacer frente a tal situación.

1. Personas con discapacidad

450. La Ley sobre igualdad de oportunidades (personas discapacitadas), de 19 de enero de 2000, prohíbe la discriminación contra las personas discapacitadas en cinco esferas concretas: el trabajo, la educación, el acceso a los locales, el suministro de bienes y

servicios y el alojamiento. Esta Ley procura compaginar los derechos y obligaciones de las personas que emplean o prestan servicios a las personas con discapacidades con los derechos de estas. La persona impedida tiene derecho a que no se le someta a discriminación y a obtener acceso a los servicios mencionados en igualdad de condiciones. La persona que presta esos servicios está obligada a asegurar que pueda suministrarlos. No obstante, si la prestación del servicio impone al empleador o al proveedor del servicio dificultades injustificadas, la discriminación puede justificarse.

451. La Ley dispone el establecimiento de la Comisión Nacional de Personas Discapacitadas, que se creó el 3 de noviembre de 1987. La Comisión se conoció inicialmente con el nombre de Comisión Nacional del Discapacitado, y su denominación se modificó en 1993. La Comisión Nacional, formada por 14 miembros, está facultada para investigar las denuncias de discriminación contra cualquier persona que alegue haber sido sometida a ella por razones de discapacidad. La Comisión también puede promover investigaciones de oficio.

2. Legislación que sanciona la incitación al odio racial

452. El desarrollo de la legislación maltesa con respecto a la discriminación racial es relativamente reciente. La Constitución de la Independencia de 1964 fue el primer instrumento legislativo de Malta que incorporó un conjunto justificable de derechos y libertades fundamentales, incluido el derecho de protección contra la discriminación por motivos de raza, color y lugar de origen, entre otros. Antes, la Ordenanza sobre propaganda sediciosa (prohibición) de 1932 era el único instrumento que se ocupaba de las relaciones raciales. La Ordenanza prohibía la publicación, impresión, exposición, venta o distribución de cualquier periódico, libro, cartel, etc., cuyo contenido pudiera contribuir probablemente "a promover sentimientos de mala voluntad y hostilidad entre las diferentes clases o razas de los súbditos de Su Majestad".

453. Desde la independencia, Malta es signataria de varias comisiones y convenios internacionales que prohíben la discriminación racial, a saber, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Convenio N° 111 de la OIT relativo a la discriminación, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales y la Carta Social Europea revisada. Los derechos sustanciales garantizados en virtud de esas convenciones y convenios, salvo el Convenio Europeo de Derechos Humanos, no son directamente aplicables en los tribunales de Malta. La adhesión de Malta a la UE en 2004 ha tenido efectos profundos en el desarrollo de la legislación contra la discriminación y, en particular, la discriminación racial en Malta. El progreso más significativo del marco jurídico de Malta con respecto a la discriminación racial fue la incorporación en el derecho maltés de las directivas sobre la igualdad en el empleo y la igualdad racial, lo que supuso la introducción en el sistema maltés de medidas legislativas no discriminatorias en los ámbitos del empleo y el suministro de bienes y prestación de servicios, con inclusión de la educación, la seguridad social y la salud.

454. En virtud del artículo 45, la Constitución garantiza la protección contra las leyes discriminatorias en su sustancia y en sus efectos y salvaguarda también a las personas del trato discriminatorio por parte de autoridades o funcionarios públicos.

455. En 2002 se aprobaron modificaciones del Código Penal en virtud de las cuales se creó el delito de incitación al odio racial. De este modo, toda persona que emplee cualquier amenaza, expresiones o comportamientos abusivos o insultantes, exhiba cualquier material escrito o impreso que sea amenazante, abusivo o insultante o se comporte en otras formas susceptibles de fomentar el odio racial puede ser sancionada con pena de prisión de entre 6

y 18 meses. Por odio racial se entiende el odio contra un grupo de personas basado en el color, la raza, la nacionalidad o el origen étnico o nacional.
